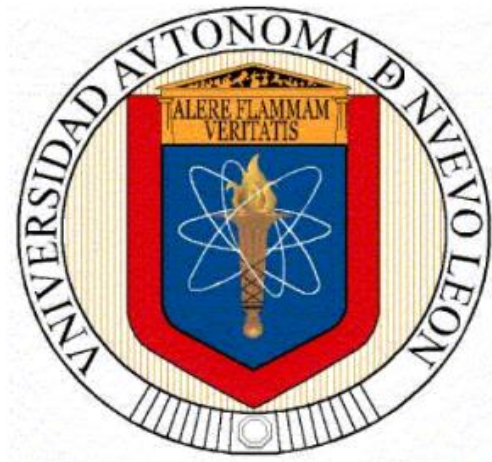


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA**  
**DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO**



**TESIS**

**LOS LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN  
EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL AMBITO LOCAL DEL  
ESTADO DE NUEVO LEON**

**POR:**

**JOSÉ MANUEL GUAJARDO CANALES**

**PRESENTADA PARA OBTENER EL GRADO DE:**

**DOCTORADO EN DERECHO CON ORIENTACIÓN EN DERECHO PROCESAL**

**SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, DICIEMBRE DE 2020**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA  
División de Estudios y Posgrado



**LOS LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN  
EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL AMBITO LOCAL DEL  
ESTADO DE NUEVO LEON**

TESIS

PRESENTADA PARA OBTENER EL GRADO DE:  
DOCTORADO EN DERECHO CON ORIENTACIÓN EN DERECHO PROCESAL

POR:

JOSÉ MANUEL GUAJARDO CANALES

ASESOR:

DR. JOSÉ LUIS PRADO MAILLARD

ANTE EL HONORABLE JURADO:

PRESIDENTE:

SECRETARIO:

1er VOCAL

2do VOCAL

3er VOCAL

# LOS LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL AMBITO LOCAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

## ÍNDICE

Introducción .....	1
CAPITULO I.- METODOLOGÍA. ....	4
1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ....	4
1.1.- Variables de la hipótesis .....	5
1.1.1.- Variable independiente. ....	5
1.1.2.- Variable dependiente.....	6
1.1.3. - Variable moderadora.....	7
1.1.4.- Variable mediadora.....	8
2.- REFERENCIAS TEÓRICAS .....	10
2.1. Teoría de la Textura Abierta de “Hart”. ....	10
2.2. Teoría de la Interpretación de “Jerzy Wróblewski” .....	12
2.3. Teoría de la Racionalidad de la Interpretación “Aulis Aarnio” .....	13
2.4. Teoría del Garantista de la Constitución. ....	13
2.5. Tutela Judicial Efectiva.....	15
2.6. Teoría General del Proceso.....	16
3.- Marco Conceptual.....	18
CAPÍTULO II.- LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA. ....	22
1. Interpretación .....	22
1.1.- Concepto.....	26
2.- Teorías.....	30
2.1.- Teoría de la Textura Abierta de L.A. Hart.....	30
2.2.- Teoría de la Interpretación Jerzy Wroblewski.....	35
2.2.1.- Interpretación Operativa.....	38
2.2.2.- El proceso de la interpretación y de la justificación de la decisión interpretada. .....	39

2.2.3.- Teoría e Ideología de la Interpretación.....	40
2.2.4.- El Problema de la Creatividad y Teoría de única Explicación Correcta. ....	41
2.2.5.- Instituciones y funciones de la interpretación constitucional.....	41
2.3.- Teoría de la Racionalidad de Aulis Aarnio. ....	42
CAPITULO III.- LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LA NORMA PROCESAL. ....	49
1.- La Tutela Judicial Efectiva. ....	49
1.1.- Concepto. ....	52
1.2.- Objeto.....	55
1.3.- El Debido Proceso. ....	58
1.4.- El Debido Proceso y su Vinculación con la Tutela Judicial Efectiva .....	68
1.5.- La Tutela Judicial Efectiva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado como Órgano de Función Jurisdiccional.....	73
1.6.- Exposición de Jurisprudencias relacionadas con la Tutela Judicial Efectiva. ....	78
2.- La Norma Procesal. ....	90
2.1.- Concepto. ....	90
2.2.- La Norma Procesal y la Teoría General del Proceso. ....	94
CAPITULO IV.- LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA.....	97
1.- La Reforma Constitucional de 10 de junio del 2011 (fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación) y su impacto en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León. .	97
2.- Ámbito nacional. ....	104
2.1.- Tribunales de lo Contencioso Administrativo.....	104
2.1.1.- Fundamento Constitucional Tribunales de Justicia Administrativa.....	104
2.1.2.- La Función Jurisdiccional. ....	106
2.1.3.- Situación Actual de las Entidades Federativas respecto a la Justicia Administrativa.....	107
2.1.4.- Principios Procesales Comunes y los Particulares del Proceso Contencioso Administrativo.....	124
3.- Ámbito local. Caso Nuevo León. ....	154
3.1.- Naturaleza de la Función del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León. .....	154
3.2.- Fundamento Constitucional Local. ....	155
3.3.- Funciones Juzgado Fiscal. ....	157
3.4.- Funciones Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ....	159

3.5.- Tribunal de Justicia Administrativa. ....	161
3.6.- Competencia del Tribunal de Justicia. ....	161
4.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, como parte de la Administración Pública de Estado. ....	164
CAPITULO V. LOS DERECHOS HUMANOS COMO LÍMITE DE INTERPRETACIÓN DE LA NORMA PROCESAL. ....	168
1. Los Derechos Humanos. ....	168
1.1.-Concepto.....	173
1.2 Los Derechos Humanos como eje central de la Constitución. ....	180
CONCLUSIÓN. - .....	188
Bibliografía .....	195

## Introducción

Este trabajo científico de investigación tiene como fin la divulgación del cuestionamiento sobre los límites de la interpretación de la norma procesal, como es bien profesa la filosofía del derecho, la figura del estado representa una ficción humana la cual tiene como fin evitar la inequidad y la negligente impartición de justicia, toda vez que bajo el entendimiento de la doctrina de la fuerza, la correcta impartición de justicia depende del ángulo de la perspectiva que se pretenda utilizar, de modo que esta ficción representa el ordenamiento jurídico la posibilidad de que el juzgador pueda otorgar un veredicto justo.

No obstante para poder alcanzar este ideal jurídico, es necesario preguntar por las formas de interpretación que la autoridad ejecuta para poder ponderar y justificar sus decisiones en la impartición de la justicia, de tal manera es para mí necesario inaugurar la presente tesis hablando de la norma procesal y su importancia para la ejecución de los actos procesales dentro del juicio contencioso e incluso en si todo juicio que pueda ser controversial la acción interpretativa del juzgador tanto para impartir justicia sin fuerza como para hacerlo sin consideración de los derechos de los seres humanos denominados fundamentales.

Continuando con el análisis de esta corriente me es necesario expresar que la esencia de toda norma procesal es la de contribuir en el engranaje de todo proceso llevado por una autoridad jurisdiccional competente, con el objetivo de resolver las controversias que se presenta entre particulares o entre particulares y autoridades. Son las normas procesales las que deben generar mayor confianza a todos lo que intervienen en un proceso, ya que son las reglas en que éste se desarrolla y a las cuales deben sujetarse todas las partes que estén bajo las mismas circunstancias, para con ello concluir con una decisión en la cual el demandante y el demandado hubiesen tenido las mismas oportunidades para hacer valer sus racionamientos y la demostración de estos.

Conforme al contexto constitucional, el juzgador fue dotado de herramientas interpretativas dentro de la normatividad jurídicas en aras de respetar o hacer eficiente el reconocimiento de los derechos humanos que se consagran dentro de los Tratados que forma México parte, así como aquellas que se contemplan dentro de la Constitución Federal, considerando que la interpretación de esto puede llegar al extremo de desaplicar o inaplicar una disposición legal por ser inversa a la Constitución o las convenciones a nivel internacional.

Bajo esta perspectiva, es importante establecer parámetros, reglas, directrices sustentadas en un marco teórico, para que todo juzgador, incluyendo los del Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León al momento de interpretar las normas que tienen el carácter procesal encuentren una justificación razonable y no dejar duda que la discrecionalidad jurisdiccional fue bien encauzada salvaguardando los derechos humanos de las partes. Ante ello la importancia de identificar las diversas teorías que tienen relación con el estudio para así estructurar de una manera científica soluciones y que la postre puedan ser utilizadas por los impartidores de justicia. Es fundamental y necesario construir sobre lo ya avanzando en el tema aquí pudiéramos aplicar la siguiente máxima “*toda investigación se construye sobre la base de investigaciones pre-existente.*” (Sánchez Zorrilla, 2010)

La construcción de la investigación debe operarse bajo un modelo deductivo, porque partiendo de una premisa general en la que se sustentan la teoría de la Constitución y la teoría general del proceso, se da cuenta de una situación actual de cambio o desarrollo que ha traído un paradigma de sistema jurisdiccional actual.

Los modelos teóricos que sustentan el presente estudio deben ser explicativos como descriptivos, puesto que dan a conocer el motivo de cambio del contexto constitucional y da cuenta de la consecuencia que ha originado la reforma explicando si desenvolviendo y el impactado en la impartición de justicia.

Si de acuerdo con Villabella Armegol la investigación empírica “*es la que aborda objetos, fenómenos o procesos factuales de los que percibe rasgos, propiedades o manifestaciones*” y la investigación teórica “*es la que se desarrolla sobre objetos abstractos, que no se perciben sensorialmente y cuya materia prima son datos indirectos, no tangibles, especulativos etc.*” (Villabella Armegol, 2015) Es que se estima que el trabajo de investigación es mixto, porque hay manera de abordar el estudio tomando en cuenta el fenómeno que ha producido la reforma comprobándolo con material que sea producido con ello, pero también tiene como objeto reflexionar si las mismas tienen sustento con las teorías que se relacionan con el tema.

Es necesario el análisis de las diferentes resoluciones emitidas por los diversos órganos jurisdiccionales, para tener un referente de la evolución de la interpretación a partir de la reforma constitucional del 2011 y reflexionar si las mismas encuentran la justificación en el marco teórico que se propone.

El estudio debe ir encaminado al encuentro y comprensión del sentido y el alcance contenidos dentro de los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y relacionarlo con los artículos, 14, 16 y 17 que consagran el principio denominada de certeza y seguridad jurídica, implicando que la investigación debe ser de carácter dogmática ya que “el punto a destacar aquí es la actividad dogmática se trate de plantear el sentido de las normas jurídicas a partir de métodos de interpretación que consideren a la realidad, aun cuando no tratan de interpretarlas directamente, si se puede decir así, más allá del sentido normativo que la misma realidad ha adoptado”. (Cossio & Raigosa, 1996)



## **CAPITULO I.- METODOLOGÍA.**

### **1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.**

Dentro del contexto constitucional actual permite a los juzgadores interpretar de una manera más amplia, las normas jurídicas han provocado que las decisiones judiciales sean cada vez más diversas, no obstante, que pudiera tratarse de asunto similares, pues la interpretación por sí misma implica discreción y las normas procesales no están exentas de ser interpretadas. Las normas procesales tienen la función de dirigir el proceso sometiendo a sus operadores (jueces) a los terceros auxiliares y a las partes a bajo reglas previamente establecidas. Esta discrecionalidad con la que cuenta el juzgador de hoy ha propiciado colisiones con otros principios constitucionales como lo son lo de la certeza y la seguridad jurídica.

El espíritu de la reforma constitucional y la falta del conocimiento de esta, así como la omisión de adecuar las diversas leyes a la Constitución federal y sobre todo la falta de criterios obligatorios uniformes que limiten la interpretación y desaplicación de las normas procesales del juicio contenciosos administrativo es lo que ha impedido la armonización de todos los preceptos constitucionales que rigen dentro de los procesos de la distribución de la aplicación de justicia que se imparte en México.

Se demostrará la implicación de la limitación de la interpretación de las normas procesales en los casos en que las mismas restrinjan la tutela judicial efectiva del derecho fundamental o cualquier otro derecho humano traerá consigo un parámetro en los que los juzgadores deberán justificar sus decisiones restringiendo la discrecionalidad sólo para los casos que lo ameritan.

## Hipótesis.

“La falta de parámetros para interpretar las normas por los juzgadores, provoca la existencia de resoluciones contradictorias en asuntos similares, violentándose el principio de certeza jurídica que debe regir en todo proceso jurisdiccional.”

### **1.1.- Variables de la hipótesis**

Se tiene en mente que una variable constituye “... las características o los conceptos que se manejan en una hipótesis.” (Cruz Covarrubias, 2008)

Exponemos la definición que establece Reidl Martínez acerca de la Variable Independiente que se maneja dentro del trabajo de investigación, el cual señala que se trata en particular del manejo por conducto de quien está haciendo el trabajo se emplea para lograr un efecto consiguiendo una variabilidad dependiente, considera que esta varía de conformidad a las necesidades o las acciones que el investigador utilice para generar el efecto que necesita producir. (Reidl Martínez, 2018)

#### **1.1.1.- Variable independiente.**

- El contexto constitucional de la reforma del año 2011

El artículo primero de la Constitución mexicana fue reformado en 2011 y trajo consigo una de las reformas más trascendentes tanto en el sistema de impartición

de justicia y en el espíritu de esta que va en reforzando el, porque pone como eje de esta el reconocimiento, protección y optimización de los derechos humanos. En aras de ello, la Constitución otorga a todos los Juzgadores la oportunidad de interpretar las normas que deben de aplicarse para efecto de que no se restrinja los derechos humanos, inclusive, otorgan facultad a los Juzgadores para la desaplicación de la norma cuando la misma es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales. (Arenas Bátiz, 2013) (Ferrer Mac-Gregor, 2011)

- Facultad del juzgador para interpretar las normas procesales.

Como se ha indicado, el campo de la interpretación para el juzgador se acrecentado como consecuencia de la reforma constitucional del 2011 relativa a los derechos humanos.

### **1.1.2.- Variable dependiente**

- La interpretación de las normas procesales

Bajo los mismos dispositivos constitucionales queda claro la facultad y la obligación de interpretar las normas por parte de los juzgadores conforme más se potencialicen los derechos humanos e interpretarlos conforme a los demás preceptos constitucionales o convencionales, inclusive inaplicar la norma en caso de ser contraria a la misma. Se ha conceptualizado con motivo de la reforma los tipos de interpretación a la cual está obligado el juzgador las cuales pueden ser, pro-persona o de acuerdo con la Constitución o a los tratados de derechos humanos o a través del control difuso. (López Sánchez, 2013) (Lorca Navarrete, 2003) (González Oropeza, 1996)

Hay que considerar que la interpretación a la norma procesal sólo se da cuando exista una causa que lo amerite

No puede dejarse al arbitrio del juzgador hacer una interpretación, solamente en los casos que existan una laguna jurídica, o se pueda interpretar en diversos sentidos o bien en caso de que la misma se estime violenta algún derecho humano.

### **1.1.3. - Variable moderadora.**

- La capacitación de los juzgadores en concerniente a los derechos humanos.

A mayor conocimiento de los derechos humanos provoca que existe una mejor interpretación de las normas jurídicas, inclusive las de carácter procesal y por ende permite regular la discrecionalidad de los juzgadores.

Esta inquietud ha llevado a distintas organizaciones o instituciones como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidades (Entre ellas nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León a través de su Facultad de Derecho), Colegios de Abogados, organismos gubernamentales a realizar cursos, clínicas, maestrías etc., con el afán de entender el alcance de la reforma ya que incide de manera muy importante en la impartición de justicia y para que esta sea de mayor calidad debe de haber operadores mayor capacitados, sin embargo aún falta mucho por entender.

Me permito reproducir unas palabras del rector de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México tomadas de la presentación de la Clínica de Derechos Humanos que organiza esa institución con la Suprema Corte de Justicia en México y que de alguna manera destaca la imperiosa necesidad de que se conozca más sobre ello, *“En México son pocas las instituciones de educación superior que han abrazado la defensa de los derechos humanos como parte de la formación de los nuevos estudiantes. Las Clínicas Jurídicas de Derechos Humanos, tan exitosas en Estados Unidos y América Latina, no han surgido con fuerza en nuestro país. Su presencia en México ha sido limitada, a pesar de la innovación que representan, tanto para una educación integral del estudiante en derecho, como en su contribución a una impartición de justicia que llegue a sectores tradicionalmente marginados”* (SCJN, Clínicas de Derechos Humanos. Una nueva alternativa para la educación jurídica y la sociedad, 2016)

#### **1.1.4.- Variable mediadora**

- La falta de criterios obligatorios que limiten u orienten la interpretación a los juzgadores.

La falta de criterios obligatorios que limiten u orienten la interpretación a los juzgadores provoca la discrecionalidad de forma ilimitada, por ende, las decisiones similares tienen una posibilidad de ser contradictoria, lo que merma tanto al principio de seguridad jurídica como al principio de certeza jurídica.

- Los límites a la discrecionalidad del juzgador están constreñidos a los siguientes marcos jurídicos:
  - a. Al marco Constitucional.
  - b. Al marco Jurisprudencial.

- c. Al marco de los distintos ordenes de leyes generales o secundarias.

Los derechos, principios y valores en los que descansa los derechos tales como: de acceso a la justicia, el debido proceso, efectividad de la sentencia conocido en términos generales como la tutela judicial efectiva las podemos encontrar dentro de los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Podemos encontrar las causas de justificación en ellos para que el juzgador realice las interpretaciones correspondientes.

La jurisprudencia son los criterios obligatorios u orientadores emitidos por diversas instancias de la jurisdicción federal, pero que repercuten en todos los órdenes jurisdiccionales, hay autores que estiman que la jurisprudencia garantiza la tutela judicial este como un derecho efectivo y teniendo la función principal y consolidando el derecho para que existan mayores sentencias congruentes y uniformes, desde mi particular opinión considero que refuerza tanto al principio de seguridad jurídica como el certeza jurídica, en ellas podemos encontrar algunos parámetros de interpretación que pueden limitar la discrecionalidad del juzgador en ciertos casos o puede dar la pauta o como debe de realizarse la interpretación correspondiente. Aun así, la Suprema Corte Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Distrito han fijado límites a la interpretación y en algunos casos parámetros a los mismos, sin embargo, aún hay contradicción en ellos, no obstante, hay algunos criterios que son obligatorios, y en ellos se encuentran algunas restricciones.

También podemos encontrar limitaciones dentro de las diferentes leyes tanto adjetivas como substantivas, no obstante, ello, las cuales pueden estar sujetas a la

interpretación del juzgador si las mismas se apartan de tutela judicial efectiva o de algún otro precepto constitucional como convencional.

## **2.- REFERENCIAS TEÓRICAS**

Tanto Villabella Armegol y Sánchez Zorrila coinciden que en todo trabajo de investigación jurídica se debe de partir de un punto conocido para llegar a otro desconocido y que todo lo conocido de alguna manera ya está teorizado, por lo que para el caso que nos ocupa se estima centrar el marco teórico en las siguientes referencias que fueron consultadas a través del desarrollo de la materia de modelos y constructos dentro del doctorado en derecho con acentuación en proceso.

- Teoría de la Textura Abierta de “L.A.Hart”.
- Teoría de la Interpretación de la Norma “Jerzy Wroblewsky”.
- Teoría Racionalidad de la Interpretación “Aulis Aarnio”.
- Teoría Garantista de la Constitución.
- Tutela Judicial Efectiva.
- Teoría General del Proceso.

### **2.1. Teoría de la Textura Abierta de “Hart”.**

La discrecionalidad judicial en el sistema jurídico mexicano, se ha abierto de una manera rápida y dinámica a partir de la reforma Constitucional del 2011, la interpretación de la norma jurídica debe de enfocarse a la optimización de los

derechos humanos tratando de buscar que la misma sea eficiente y razonable y no solamente aplicarla de manera estricta que no dé una solución o no cumpla para lo fue creada, Herbert L.A. Hart refiere que hay leyes(normas) que contienen un mandado directo de un hacer o un no hacer, pero existen otras leyes (normas) que son generales y que no pueden prever todas las consecuencias que pudieran tener al momento que se aplicaran a un caso concreto, a éstas últimas las llama leyes o normas de textura abierta, porque la misma es general y fue creada para una situación particular, por lo que en consecuencia debe de interpretarse según sea el caso. (Hart, 1998)

La discrecionalidad no es un tema nuevo en los diversos sistemas jurisdiccionales de los diferentes países, sin embargo, en ciertos modelos es más frecuente como lo es en los países anglosajones, ya que su sistema de impartición de justicia es consuetudinario y por obvias razones la discrecionalidad es más frecuente, sin embargo la preocupación de no abusar de ello ha generado directrices doctrinarias para justificar el sentido de la decisión, por eso es necesario sostenernos en una de las teorías más influyentes y desarrolladas como es la de Hart, que trata de establecer parámetros en la argumentación y justificación de las decisiones, es por ello que servirá para desarrollar el trabajo de la investigación, ya que lo que se pretende es el establecer los límites de interpretación de las normas procesales ante la nueva realidad de la normatividad jurídico mexicano, considerando la ampliación de la discrecionalidad del juzgador como consecuencia del nuevo contexto constitucional. *“Dice Hart, cuando el derecho resulte indeterminado y por lo tanto ha de decidirse de forma discrecional, el juez debe ejercer su poder de creación de derecho, pero no debe hacerlo arbitrariamente, es decir, debe siempre tener razones generales que justifiquen su decisión y debe actuar como lo haría un legislador concienzudo, diciendo de acuerdo con sus propias esencias y valores.”* (Etchevery, 2015)



## 2.2. Teoría de la Interpretación de “Jerzy Wróblewski”

El maestro polaco elabora toda una teoría sobre la interpretación, en un primer término, la ve como una teoría descriptiva, en un segundo término la ve como una teoría normativa y una última como una ideología de la interpretación legal. Sobre la primera nos dice que la misma manifiesta ese proceso al momento de fijar una postura, es decir esa toma de decisión, así como en las decisiones interpretativas formuladas o justificadas, o sobre ambas. La segunda consiste en un ordenamiento de la valorización y de las directrices interpretativas de dicha actividad. El tercer punto que en que se compone la teoría de la interpretación estriba en las ideologías de estas, para el trabajo que nos ocupa, este punto es de suma importancia, porque se parte hace una distinción de normas estáticas y de normas dinámicas o funcionales. Las primeras son reglas que contiene valores determinados por el legislador que no son susceptible de variarse sino es a través de un proceso legislativo, y la segundas se consideran a la inversa, el derecho se ajusta a las necesidades sociales tanto presente como futuras. *“Uno de los tipos procesales de ideología de interpretación legal toma como valores básicos la certeza, la estabilidad y la predictabilidad. Estos valores exigen que las reglas legales tengan un significado inmutable –valores estáticos-”*. (Wróblewski, 1985)

Wróblewski hace una distinción entre la interpretación lingüística o gramatical, la sistemática o simétrica y la funcional, esta teoría ha sido recogida en muchos criterios jurisprudenciales de los distintos órganos jurisdiccionales del estado mexicano, partiendo de ello y ante el tema que nos ocupa que son los límites de la interpretación, es importante tomar las bases sobre las que descansa esta teoría y poderla encausarla hacia nuestra hipótesis.

La importancia de poder justificar una sentencia con argumentos interpretativos es muy necesaria, las decisiones no sólo deben convencer a las partes de un juicio, sino también, convencer a toda una sociedad que tiene derecho de conocer los criterios con los que se imparte justicia. Precisamente, ante el abandono de los silogismos lógicos que se tomaban decisiones, surgen argumentaciones que sostienen interpretaciones y que deben generar seguridad y certeza en la comunidad. (SCJN, Introducción a la Retórica y la Argumentación., 2009)

### **2.3. Teoría de la Racionalidad de la Interpretación “Aulis Aarnio”**

Aarnio desarrolla una metodología sobre la interpretación de la norma, donde destaca la importancia de observar en toda toma de decisión por parte del juzgador el concepto de certeza jurídica. Concepto que lo entiende como el derecho de todo ciudadano a esperar la protección de la justicia, y que esa protección (decisión) sea correcta. Es fundamental, para el presente trabajo, entender la base en la que se construye esta teoría, pues, tiende a establecer los principios en los que debe descansar una determinación jurisdiccional de casos difíciles, en los que caben dos o más interpretaciones. Esta teoría pretende evitar la arbitrariedad del juzgador y establecer parámetros para que sus decisiones sean racionales y se cumpla con la norma jurídica, en el entendido que aquellas normas que no sean jurídicas sean complemento para una buena decisión. (Aarniu, 1991)

### **2.4. Teoría del Garantista de la Constitución.**

Se considera a esta teoría como rama de la Teoría de la Constitución, pero que hay que analizarla de manera muy particular pues es una de las corrientes más influyentes en la actualidad. El garantismo, tiene como propósito consignar en la

Constitución los derechos fundamentales y los principios a través de un proceso positivista, pero que tiendan a su vez a ser interpretados y aplicados de la manera más efectiva. Prieto Sanchís al referirse a Ferrajoli menciona, “que *ha insistido en que el paradigma garantista –es uno y el mismo que el actual Estado constitucional del derecho-, concretamente aquella que se encarga de formular las técnicas de garantía idóneas para asegurar el máximo grado de efectividad a los derechos reconocidos constitucionalmente.*” (Prieto Sanchís, 2009)

Esta teoría justifica el cambio del positivismo clásico al positivismo moderno, donde ya no cabe el término “Estado de Derecho”, sino el “Estado Constitucional del Derecho”, concibiendo con esto, la importancia de los derechos humanos, así como de los principios tales como certeza jurídica, seguridad jurídica, debido proceso, entre otros que se recogen y esto con el objetivo de garantizar su respeto por parte de todos los poderes u órdenes de gobierno del Estado, inclusive por los particulares. En materia el caso del estudio que se pretende realizar es importante detectar cuales son los derechos y los principios y derechos que garantizan la regulación del sistema de impartición de justicia que tenemos en México. “*La finalidad última de constitucionalización de los derechos y garantías procesales no es otro que lograr la tan pretendida Justicia, reconocida en Nuestra Carta Magna (España) como valor superior del ordenamiento jurídico. El proceso se convierte de este modo -como apunta Couture- en el medio de la realización de la justicia.*” (Picó i Junoy, 2011)

La comprensión de esta teoría es necesaria en el presente trabajo, porque sugiere tener bases importantes en la consagración dentro nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acerca de los derechos humanos y los principios constituyendo que la “*teoría que se basa en formular técnicas de garantía idóneas para asegurar el máximo grado de efectividad a los derechos reconocidos constitucionalmente.*” (Prieto Sanchís, 2009)

## 2.5. Tutela Judicial Efectiva.

La llamada tutela judicial efectiva forma parte de los derechos humanos que ésta consagrado desde antes de la reforma del 2011 en nuestra Constitución en los artículos 14,16 y 17, sin embargo, el concepto es novedoso, pues el mismo se ha desarrollado más como precepto contenido en las distintas convenciones y tratados internacionales, así lo dicen Pahuama y Rosa *“El acceso a la justicia o tutela judicial efectiva es un imperativo constitucional y una exigencia internacional que exige al estado poner a disposición de los ciudadanos todos los mecanismos para hacer efectiva la tutela de sus derechos y para resolver conflictos de manera adecuada”* (Pahuamba Rosas & Erick, 2014) *“Así, el derecho a la tutela judicial efectiva se traduce correlativamente en la obligación, no sólo constitucional, sino también inter y supranacional, que tiene el Estado de cumplir con su obligación de impartir justicia pronta, imparcial, expedita y completa”*. (Pahuamba Rosas & Erick, 2014)

Esta teoría de la tutela judicial efectiva alberga tres grandes campos o fines en los que se sustenta o se garantiza el derecho, de acuerdo con el catedrático en derecho administrativo el español Jesús González Pérez, “a) El acceso a la justicia, b) El debido proceso y c) la efectividad de la sentencia”. (González Pérez, 2001). Estos grandes temas tienen a su vez subtemas que se estiman por el momento no profundizar en ello, pero si señalar a groso modo la tutela judicial efectiva, sea señalado que es un derecho humano para que el estado haga justicia sobre una pretensión de la cual se estima es legítima a través de juicios sencillos donde se privilegia el fondo *del asunto que culmine una decisión que pueda cumplirse y restituir el derecho de la manera más óptima, “ Para la integración proceso-derecho material es imprescindible, además de la clasificación de las tutelas, que el derecho de acción sea concebido como un derecho fundamental, es decir, como un derecho*

a la efectividad de la tutela jurisdiccional” (Marioni, 2007). De manera similar otros autores consultados coinciden sobre el concepto de la tutela judicial efectiva. (Salinas Garza & Rodríguez Lozano, El debido Proceso en el Estado Constitucional de Derecho, 2016) (Guimaraes Ribeiro, 2004) (Llobregat, 2008)

Ahora bien, para garantizar estos fines surgen reglas, o sea, normas procesales, de ahí que esta teoría tenga la mayor de las relevancias en el estudio, pues hay que determinar si las mismas son susceptibles de ser interpretadas por el juzgador o bien hay restricciones a la interpretación o sólo en ciertos casos.

## **2.6. Teoría General del Proceso**

En términos amplios una teoría general la podemos definir como “*un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos*” (Pavó Acosta, 2009)

La teoría general del proceso, se ha venido entendiendo como la rama del derecho que sistematiza los procesos judiciales (jurisdiccionales) a través de principios encaminados a la obtención de una resolución emitida por un órgano jurisdiccional o como lo diría Alcalá-Zamora citado por Ovalle Favela “*Es la parte general de la ciencia del derecho procesal que se ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las diversas disciplinas procesales especiales*”, (Ovalle Favela, 2011), el clásico procesalista argentino

Hugo Alsina al hablar de ella, refiere que *“Correspondiendo al Estado resolver las controversias entre particulares cuando éstos no logren una solución pacífica, ha debido para ello, según hemos vistos, crear órganos especiales, fijar sus atribuciones y establecer las reglas de actuación para los mismos y litigantes”* (Alsina, 1990). En el mismo sentido lo han dicho los diversos procesalistas mexicanos, que coinciden en la potestad del Estado para impartir justicia a través de órganos competentes, bajo principios, conceptos y reglas propias de una rama especializada del derecho. (Becerra Bautista, 2006) (Gómez Lara C. , Teoría General del Proceso, 2004) (Kelley Hernández, 2003)

De alguna manera podemos decir que el desarrollo del estudio referente a los principios se consagra a través de la materia que abarca la teoría que aborda el aspecto general del proceso dentro de la jurisdicción, siendo el estudio un énfasis del desarrolla dentro de un proceso jurisdiccional, los órganos que la imparten y la competencia para impartirlas, las reglas a las que están sometidos en la substanciación, así como las reglas que deben seguir para tomar decisión que corresponde de acuerdo a la problemática. La investigación no pudiera conducirse hasta el final sino se tienen los cimientos de la referida teoría, pues la misma es inminentemente de carácter procesal, pues su estudio va encaminado a determinar los límites que pueda tener un juzgador al interpretar las normas de carácter procesal y como consecuencia de reforma del 2011 hay movimientos forzosos en esta teoría, cito al maestro regiomontano doctor Juan Ángel Salinas Garza quien al referirse a la tutela judicial efectiva (teoría que se verá más adelante) señala que en la actualidad hay un cambio de la teoría clásica del proceso, *“En este orden de ideas, la tutela judicial efectiva y las instituciones que se le han incorporado progresivamente modifican de forma considerable el entendimiento del proceso como teoría clásica y asignatura educativa”*. (Salinas Garza, Tutela Judicial Efectiva, una Visión Constitucional y Convencional de la Teoría del Proceso, 2016)

El presente trabajo tiene como un escalón más la teoría general del proceso, ya que el estudio es eminentemente de carácter procesal, pues existe un contexto constitucional a partir del 2011 en la que el juzgador deja de estar de atado de manos en cuanto a el estricto apego de la norma, para poder apartarse de ella en aras de la consecución de la justicia. Por lo que es importante tener como punto de partida un marco teórico general sobre el proceso, pues el desarrollo de la investigación consiste en determinar el impacto que ha causado la reforma dentro del sistema en el área correspondiente de la administración de justicia en México que tiene como base obvia a dicha teoría.

### **3.- Marco Conceptual**

Lo que se pretende en un trabajo de investigación jurídica en donde el objetivo es desentrañar el alcance de una reforma constitucional, lo mínimo que se debería de transmitir a quien pueda ser destinatario de la investigación, cuáles son los conceptos base sobre los que está construida la misma o bien sobre lo que pudiera repercutir, por ello se considera importante exponerlos de una manera general y cumplir con una parte importante de todo trabajo de investigación, que es hacerlo atractivo y útil.

- Discrecionalidad, de acuerdo con el diccionario de la lengua española define a la discrecional como “*que se hace libre y prudente*”. (española), función que se ha abierto a los juzgadores como parte de las facultades que le ha dado -el nuevo contexto constitucional y que importa a la investigación en cuanto que se puede determinar los casos en que la misma es necesaria. La discrecionalidad judicial no debe ser utilizada como escuela para interpretar la ley de una manera valida, sino, lo que se

debe aprovechar esta discrecionalidad para tomar decisiones correctas.  
(Duque Sandoval, 2007)

- Interpretación, sin duda concepto toral en el trabajo de investigación, pues uno de los objetivos del estudio es establecer los límites de ella por parte del juzgador en un concepto general se puede se puede contextualizar en palabras de Anchondo Paredes *“Cuando se tiene la necesidad de desentrañar el sentido de una norma legal o contractual, porque hay desacuerdo con su contenido, el intérprete lo hace encontrar el significado de la disposición, pues de ese modo, tendrá elementos para resolver la controversia planteada con motivo de la discrepancia surgida con el propósito del alcance de la ley o de lo estipulado”*. (Anchondo Paredes, 2018) En un contexto más clásico, también se puede precisar como lo hace el maestro alemán Savigny, *“la reconstrucción del pensamiento expresado en la Ley en cuanto sea conocible en la ley”* (Aguilera Portales & López, 2010)
- Norma Procesal, se entiende como las disposiciones a las cuales debe de sujetarse todos los que intervienen en un proceso de índole judicial (jurisdiccional), son fundamentales del principio del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, la norma procesal no ha sufrido mutación conceptual alguna a través del tiempo, se transcribe su concepto tradicional, *“A lado del derecho procesal que regula forma y de orden exterior de los actos procesales (in procedendo) la doctrina habla, en cuanto a las normas sustanciales a las cuales el juez debe de ajustarse in judicando, del derecho procesal-substancial o también del derecho judicial-sustancial”*. (Calamandrei, 1996) *“La norma procesal contiene los tres elementos que caracterizan la norma jurídica. Ella establece una regla para la actuación del Juez, de las partes y aún de los terceros en el proceso, determinando su posición y rigiendo sus relaciones recíprocamente. La norma contiene una orden, porque los que intervienen*



*en el proceso sólo pueden apartarse de la regla en la medida en que ella misma lo permita. La eficacia de la norma está asegurada por medidas de diversas clases: en algunos casos por la imposición de una carga, como ser la interposición de la demanda, su contestación, aportación de pruebas; entre otros o por una sanción jurídica, como ser la nulidad de los actos procesales; a veces, con una pena pecunaria, como ser la multa, etc.” (Alsina, 1990)*

- Norma Constitucional, Zagrebelsky señala que la norma establecida por el legislador que conjuga la diversidad política de una nación y la traduce a una unidad jurídica se le denomina Constitución (Carbonell Sánchez, 2008) cuanto al sentimiento que se tiene al ordenamiento de mayor jerarquía en el país. Bajo otra óptica, las normas constitucionales son un conjunto de preceptos ordenados de manera sistemática que tiene como propósito la organización del estado mexicano en nuestro caso, son de jerarquía superior y pueden ser reformables en los términos que la misma Constitución lo disponga. (Arteaga Nava, 2006), en opinión de quien escribe, la agregaría a este concepto que preceptos también reconocen y garantizan los derechos fundamentales de todo individuo a través de valores y principios que la misma señala.
- Derechos humanos, bajo un concepto general podemos entenderlos: *“Conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben de ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”* (Pérez Luño, 1995), concepto básico en nuestro trabajo de investigación ya que es el eje del nuevo entorno constitucional que ha propiciado la visión en la impartición de justicia. (Aguilera Portales & López, 2010)

- Certeza jurídica, es la oportunidad que se tiene de conocer las consecuencias legales previstas en Ley. Es un principio existente en el marco constitucional mexicano muy arraigado entre los juristas, ligado al sistema legalista que ha sido mermado con motivo de la reforma constitucional relativa a los derechos humanos del 2011. Se puede decir que a mayor discrecionalidad menor certeza jurídica.
- Seguridad jurídica: *“Es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, se estos llegan a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación”*. (Le Fur, 1967). Esta definición es muy general y de alguna manera un concepto entendido bajo el sistema de impartición de justicia anterior a la reforma del 2011, ya que una de sus características al igual que el del principio de certeza jurídica es el de un apego al contenido de la ley, sin embargo, el concepto puede haberse variado ante el cambio del paradigma de la legalidad a la juridicidad pues los juzgadores están facultados para interpretar la norma. Sin embargo, es necesario y trascendental que en todo sistema jurisdiccional prevalezca el principio de certeza jurídica, pues *“la Seguridad Jurídica vista como estabilidad y continuidad del orden jurídico y previsibilidad de consecuencias jurídicas de determinada conducta, es indispensable para la conformación de un Estado que pretende ser Estado de Derecho.”* (Marinoni, 2012)

## **CAPÍTULO II.- LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA.**

### **1. Interpretación**

Aventurarse a definir o conceptualizar una palabra tan abstracta podría ser arriesgado, no obstante, la importancia de esta palabra ha representado mucho para el desarrollo humano pues describe de una manera sofisticada la acción corporal, lingüística e intelectual que acompaña al hombre desde que tiene conciencia de sí mismo, es entonces más que un concepto, un acto humano, el cual con el desarrollo del razonamiento humano fue incrementando su complejidad.

Propia y estrictamente desde un espectro etimológico la palabra “Interpretación” proviene del latín “Interpretatio” el cual significa “Representación” y/o “Explicación”. Los alcances de la palabra “Interpretación” son bastos pues ante el desarrollo del intelecto humano, su aplicación no se ha limitado a un uso lingüístico, pues tanto se puede interpretar una acción física como también es posible interpretar una acción visual o sonora.

Para poder explicar el acto humano de interpretar podemos remitirnos a la “alegoría de la Caverna” descrita por el propio filósofo “Platón” quien en su obra “La República” define a dicha alegoría como el acto humano de interpretación según lo que su conocimiento o sentidos permitan, hasta que el hombre expanda sus experiencias o conocimientos, dicho relato sentaría los precedentes de la corriente empírica la cual define que la interpretación como acción dependerá de quien la realice y sus experiencias y pensamientos que este posea previamente, dicha proposición fomentó la disyuntiva entre las corrientes filosóficas del empirismo y el

racionalismo, pues el racionalismo propone que existen pensamientos innatos, los cuales son relacionados a los sentidos los cuales propician la interpretación del conocimiento de una manera empírica mientras que el racionalismo pretende que la interpretación debe realizarse a través del ejercicio de la reflexión y la investigación de las causas que propician los fenómenos tanto naturales como humanos, para que estos puedan ser interpretados desde la perspectiva de la razón.

Ante la exposición de los razonamientos ya expresados, es necesario remitirse al pensamiento del Filósofo austriaco “Ludwig Wittgenstein” quien en su obra “Tractatus logico-philosophicus” expresa que dentro de las limitantes de la interpretación del conocimiento se encuentra el lenguaje, pues ante la expresión oral y escrita del lenguaje el acto de la interpretación podrá efectuarse de maneras distintas y con resultados diferentes, es entonces de suma importancia situarse en el pensamiento que define al acto de la interpretación como un acto sujeto a la lingüística y a la redacción del conocimiento y sus precedentes.

Me es preciso aclarar que, para el desarrollo de la presente investigación el concepto de interpretación será orientado al área intelectual, puntualmente a la ciencia jurídica, de modo que el tema crucial a reflexionar en el presente capítulo es la capacidad interpretativa de las autoridades que imparten justicia dentro de un sistema jurídico, ante las limitantes de técnico-legislativas de la autoridad, es preciso exponer la necesidad de poder realizar un acto interpretativo adecuado a los fines de la impartición de justicia desde un espectro garantista de los derechos fundamentales.

Continuando con el análisis del vocablo “Interpretación” y lo que este ha representado durante el progreso de la razón humana, es fundamental mencionar que ante la especialización, tecnificación y desarrollo del conocimiento surgieron

métodos para poder efectuar el acto de la interpretación de una manera más focalizada, de modo que explicar que es la Interpretación sin mencionar la hermenéutica podría ser no provechoso, la hermenéutica para el ámbito jurídico es una herramienta fundamental pues ante la necesidad de tener normas, reglamentos y leyes escritas su interpretación requiere tanto de la forma en que estas han sido escritas como de la forma en que estas se interpretan. (Cossío Díaz & Schmill Ordoñez, 2002)

Dicho esto, la Hermenéutica es definida como un método de interpretación de textos filosóficos, jurídicos o literarios, la cual tiene como fin la explicación y traducción de la comunicación “verbal” y “escrita”, propiamente la definición etimológica de hermenéutica se expresa como el “arte de interpretar, explicar o traducir”. (Cossío Díaz & Schmill Ordoñez, 2002)

De modo que dicho método es fundamental en los procesos de interpretación del conocimiento jurídico-filosófico, el cual pretende que el acto interpretativo pueda realizarse de la manera más correcta, para poder alcanzar dicho propósito el desarrollo del método hermenéutico se vale de la “Exegesis” la cual es definida como “Extraer un texto dado”, también puede definirse de manera desarrollada como la “interpretación crítica y completa de un texto”.

Ahora bien, para poder complementar, definir y concluir el análisis de lo que se define como “Interpretación” y “Hermenéutica”, es fundamental exponer al lector la importancia del aporte que ha dado en los ámbitos mencionados y de la razón el pensador “Martin Heidegger” quien en su más excepcional obra “Ser y Tiempo” mencionaba lo siguiente acerca de la “interpretación” y la “hermenéutica” con fines de investigación y análisis del conocimiento, la razón y la palabra:

*“El sentido metódico de la investigación de la descripción fenomenológica es una interpretación. La fenomenología del Dasein es hermenéutica en la importancia originaria de la palabra, significación en la que designa el quehacer de la interpretación” A este desarrollo de la comprensión se la llama interpretación. Ésta no es, pues -como quiera que se la vea-, sino el ponerse en el acto de la comprensión. ¿Y en qué consiste la comprensión? De ella lo que se afirma es que tiene siempre la estructura del comprender algo en cuanto algo. La interpretación no es el tomar conocimiento de lo comprendido, sino el desarrollo de las posibilidades proyectadas en el comprender. Siguiendo la mancha de estos análisis preparatorios del Dasein cotidiano, estudiamos el fenómeno de la interpretación sobre la base del comprender del mundo, es decir, del comprender impropio, pero en el modo de su genuinidad”. (Heidegger, 2003)*

Finalmente, para efectos del presente texto, exponer las limitación y formas en que se desarrolla el concepto de “interpretación” será fundamental para la correcta interpretación del presente capítulo, pudiendo concluir en el presente punto que la realización del acto de interpretar podrá ser limitado a ciertas condiciones del lenguaje y el conocimiento de quien pretenda la exegesis del conocimiento de un texto dado, es importante entender como un concepto abstracto y en constante movimiento para poder esclarecer que propiamente su definición también será mutable.

## 1.1.- Concepto

Para poder conceptualizar lo que es “Interpretación jurídica” es viable expresar el pensamiento de “Jerzy Wróblewski”, quien la conceptualizó y explicó cómo:

*“El campo de batalla en el que se deciden los casos de la práctica jurídica, sino también el lugar de los desacuerdos más antiguos y violentos en el ámbito de la teoría del derecho o jurisprudencia. Esto no debe maravillar: los problemas de la interpretación jurídica están unidos a los temas más controvertidos de la filosofía (la comprensión del lenguaje), de la ética (la justicia de las decisiones) y de la jurisprudencia (la posición del juez en el cumplimiento de función propia), por no mencionar las implicaciones sociopolíticas (estabilidad versus elasticidad del derecho en relación con la actividad del legislador o del intérprete del derecho)” (Wróblewski, 1985)*

Para el pensador polaco de ascendencia báltica la interpretación en el campo jurídico corresponde a una serie de conceptos a ponderar dentro del desarrollo de la búsqueda de la solución de los cuestionamientos jurídicos, los cuales son limitados por el lenguaje, la expresión verbal y escrita de modo que la “Interpretación jurídica” como método de interpretación acompaña a otro proceso que ya hemos mencionado la “Hermenéutica”, la cual también tiene una forma que puede ser relacionada al campo jurídico, es decir la “Hermenéutica Jurídica”.

Complementando la definición ya expresada me es pertinente mencionar la perspectiva del catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha Javier Díaz Revorio, quien dentro de sus apuntes expresa y define lo siguiente sobre la “Interpretación jurídica”.

*“Ésta es una actividad, que “comparte con cualquier proceso interpretativo la finalidad de tratar de descifrar el significado de textos lingüísticos, pero presenta como nota específica el que los textos jurídicos contienen normas, de forma que el significado que se trata de extraer del anunciado lingüístico de una norma jurídica, entendida ésta como mandato o prohibición dirigido a poderes públicos o a ciudadanos, y cuyo cumplimiento es objeto de una respuesta mediante una sanción jurídica. En la interpretación jurídica el signifiicante es la disposición, y el significado es la norma”. (Díaz Revorio, 2016)*

Ante la exposición de las ideas propuestas por los juristas ya mencionados surge el cuestionamiento y la necesidad de explicar que interpreta la “Interpretación Jurídica” de modo que “con respecto a los sujetos que llevan a cabo la actividad interpretativa suele haber un consenso más o menos general en la clasificación. Por interpretación auténtica se entiende la realizada por el autor mismo del documento interpretado. La interpretación oficial es aquella realizada por un órgano del Estado en ejercicio de sus funciones” (Kelsen, Teoría Pura del Derecho, 1934).

Para la esfera que comprende lo judicial es importante tener en cuenta que se le “conoce como la que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales, más fuerte y concreta que la doctrinal, realizada por juristas y profesores de derecho en obras académicas”. Me es pertinente aquí explorar los razonamientos del maestro Kelsen quien expone que “la interpretación auténtica no es la realizada por el mismo órgano creador, sino por cualquier órgano de aplicación”; como él mismo dice: “De la interpretación efectuada por un órgano de aplicación del derecho, se distingue aquella otra interpretación que no es auténtica, es decir, que no crea ningún derecho”. Es importante mantener la idea que, para el pensamiento kelseniano, “es igualmente auténtica la interpretación que crea derecho para un caso concreto y la



que trata de una ley o tratado internacional con carácter general”. (Kelsen, Teoría Pura del Derecho, 1934)

Bajo el entendimiento de estos razonamientos y siguiendo la misma línea de interpretación es preciso exponer que “el estudio de las teorías que concentran las posiciones principales en el debate contemporáneo sobre la interpretación jurídica se ha optado tradicionalmente por presentar a cada uno de los autores sucesivamente” (Kelsen, Teoría Pura del Derecho, 1934). En la presente tesis se pretende adoptar un espectro distinto de esta. Pues para poder llegar a la tipificación es necesario entender que esta se cimienta a partir de diferentes interpretaciones e “ideas de los autores, y las diferencias o similitudes entre sus propias perspectivas son las que permiten redimensionar la discusión teórica sobre la interpretación jurídica. Se obtendrá así un esquema global que permita visualizar las posiciones doctrinales simultáneamente, a partir del cruce de tres planos trazados por los siguientes extremos”: “1) Visión de la interpretación como un acto de voluntad vs. Visión del derecho como un concepto interpretativo vs. Visión, 2) Formalismo vs. Escepticismo, y 3) Perspectiva del juez vs. Perspectiva del legislador” (Kelsen, Teoría Pura del Derecho, 1934).

Dentro del desarrollo del siglo XX se adhirieron en la teoría del Derecho dos perspectivas sumamente contrastantes sobre la ponderación asignado a la interpretación jurídica. En 1960 las corrientes de la filosofía del derecho expresaban que la interpretación es “un procedimiento espiritual que acompaña al proceso de aplicación del derecho, en su tránsito de una grada superior a una inferior”; tras la superación de este pensamiento llegado 1986, la que había ganado terreno a una grada superior era la interpretación, se escribió entonces que: “El Derecho es un concepto interpretativo. Los jueces deberían decidir lo que el Derecho es interpretar la práctica de otros jueces decidiendo lo que el Derecho es”. (Palombella, 1999)

Desde otro espectro, para el maestro Dworkin “no puede existir una distinción entre teoría y práctica jurídica, la naturaleza interpretativa abarca a ambas porque tanto el Derecho como la ciencia del Derecho, son conceptos interpretativos. No hay neutralidad aquí para el científico del Derecho, las conclusiones resultan de involucrarse y adoptar un punto de vista interno dentro del Derecho. De tal modo que cuando Dworkin divulga una teoría interpretativa del Derecho, en oposición a las teorías semánticas, lo hace pensando que es imposible dar criterios semánticos que puedan determinar si algo debe o no ser considerado como Derecho”. (Dworkin, 1986)

Dworkin define así la interpretación como práctica social que se compone de reglas y valores, y por ello propone un modelo de interpretación creativa, lo que requiere que los sujetos participantes desarrollen actitudes interpretativas, en donde se puede llevar a cabo juicios clasificatorios primarios y secundarios. La interpretación para Dworkin “no puede ocupar otro lugar que el de todo el espacio en el Derecho, uno muy distinto del que le asigna Kelsen”. (Kelsen, Teoría Pura del Derecho, 1934)

El fenómeno de la textura abierta es una gran preocupación para A Hart, ya que este fenómeno demuestra que el lenguaje del Derecho conlleva una indeterminación parcial del mismo. En esta situación, es importante buscar cuál sería la función que tiene la interpretación jurídica, misma que debería consistir en la eliminación de aquellas indeterminaciones que pueden presentar o contener las normas generales en ciertos casos particulares. Para Hart, existen soluciones a este tipo de situaciones que se derivan de la interpretación, sin embargo, la interpretación no es concepto más alto de su construcción teórica, porque esta consiste en que la propia labor de interpretar es siempre *a posteriori* en la indeterminación jurídica.

Un tema que siempre genera debate en temas sobre la interpretación jurídica es aquel que versa sobre el control jurisdiccional, en donde las teorías no se encuentran delimitadas en sus alcances, a diferencia de los órganos de control jurisdiccional, que sí tienen definidos sus alcances, por ejemplo, de revisión constitucional, o aquellos que deben encargarse de revisar la legalidad.

Señalado lo anterior, situémonos en aquellos tribunales que se encargan de la legalidad, y otro órgano que se encarga de lo constitucional. Individualmente, ambos deberán realizar interpretación dentro de su competencia, como menciona Ursúa “los órganos jurisdiccionales límite efectivamente tienen un importante grado de descentralización normativa, los casos que a su consideración se presentan son, por decirlo en varios términos repasados en este trabajo: a veces oscuros, de indeterminación más radical, no reducida a priori, sino que es necesario solucionarlos a posteriori, otras veces de interpretación pragmática o bien cuestiones sobre moralidad o ideología política. Lejos están entonces de poder solucionarse con el enfoque formalista simple, no hay elementos en la norma para hacer su significado cognoscible y luego elegir de entre las opciones” (Ursúa, 2004).

## **2.- Teorías.**

### **2.1.- Teoría de la Textura Abierta de L.A. Hart**

Hebert Lionel Aldolphus Hart, filósofo inglés, jurista egresado de New College de Oxford University y académico de la misma institución, su gran obra “The Concept of Law” (“*El Concepto del Derecho*” en español) publicada 1961 (Martínez Idárraga), misma que es analizada en la presente investigación ya que da la pauta a la interpretación contemporánea del derecho con el objetivo de buscar que el derecho sea más eficaz al momento de resolver una contienda.

Para Hart el significado de los términos es esencial para resolver los juicios que son sometidos a un tribunal o bien para sancionar a la persona que ha violentado alguna disposición legal, el orden jurídico está predeterminado por *reglas* que emite el legislador; sin embargo, hay caos dudoso, toda vez que reconoce que el legislador no puede prever todos los actos y la consecuencia de estos que realizan las personas. Menciona que no todas las leyes ni los precedentes en que se pretende resolver una controversia contienen reglas únicas para que el juzgador pueda tomar una decisión única. Es por ello, que el Juez debe decidirse entre los posibles significados alternativos de las palabras (términos) de una ley, o entre lo ya resuelto por un órgano deliberante que haya establecido un precedente.

El autor señala que el derecho comprende:

- Mandatos: ejercicio que tiene la autoridad para que se respete la ley.
- Ordenes Coercitivas, se refiere a un castigo o una consecuencia ante el incumplimiento de una disposición legal.

Estas últimas son diversas y las clasifica por su: contenido, origen y ámbito de aplicación.

Hart habla que todo sistema jurídico debe contener ciertos fundamentos, en lo que un grupo social acepte y utilice una regla secundaria de reconocimiento para la identificación de una regla primaria de obligación.

Regla secundaria de reconocimiento: Regla última de un sistema (falta) la que deciden los jueces o las autoridades.

## Regla primaria

*Dice Hart “Hay pues, dos condiciones necesarias y suficientes mínimas para la existencia de un sistema jurídico. Por un lado, las reglas de conducta válidas según su criterio de validez último del sistema tienen que ser generalmente obedecidas, y, por otra parte, sus reglas de reconocimientos que especifican los criterios de validez jurídica, y sus reglas de cambio y adjudicación, tienen que ser efectivamente aceptadas por sus funcionarios como pautas o modelos públicos y comunes de conducta oficial”. (Hart, 1998)*

Todos los casos en que se aplica una regla pueden ser clasificados, catalogados o reconocidos y pueden ser comparados con otros similares donde no quepa la menor duda que se resuelva aplicándolas o negándolas con las mismas razones, sin embargo, siempre habrá una posibilidad en que la regla de reconocimiento de identificación del derecho o de la ley presente cuestiones vagas lo que se traduce en una regla de textura abierta.

Toda sociedad debe estar regida por reglas, pautas o criterios de conducta comunes que deben ser comunicadas para su debida eficacia, por lo general éstas se manifiestan mediante legislación y el precedentes, hay casos que son muy claros, que se repiten constantemente bajo el mismo entorno, por lo que, no dejan duda sobre su aplicación automática, no obstante ellos habrá casos donde puedan dejar ciertas dudas en su exigencia ante las diversas posibilidades del lenguaje, lo que arrojaría un aspecto de *discrecionalidad* importante, independientemente si la conclusión no es arbitraria o es racional, ya que en todo momento estamos ante una elección y no una aplicación directa.

Hart dice: “cualquier técnica, precedente o legislación, que se escoja para comunicar pautas o criterios de conductas, y por mucho que éstos operen sin dificultades respecto de la gran masa de casos ordinarios, en algún punto en que su aplicación se cuestione las pautas resultarán ser indeterminadas; tendrán lo que se ha dado en llamar <<textura abierta>>”. Este es el punto importante de la teoría de Hart para la presente investigación, pues se estará analizando la manera como debe de interpretarse los asuntos difíciles que deben de resolverse a través de la interpretación por ser de textura abierta.

En primer término, el autor hace una fuerte crítica a la teoría jurídica conocida como formalismo o conceptualismo, porque señala que atenta contra con la necesidad de elegir una regla ante casos particulares que son todos los contrarios a los ordinarios (obvios), por lo que se congela la posibilidad de encontrar otro significado que amerita ser rectificado. Esto a su vez, provoca que su grado de certeza o precisión se asegure, pero a costa de prejuzgar a ciegas sobre un caso diferente. Sostiene que esta técnica atenta contra la razonabilidad de los términos de “textura abierta” los cuales merecen ser resueltos y no estar sujetos a una rigidez que impediría resolverse de forma autónoma por ser un caso semejante.



Hart señala que los tribunales para apartarse de los precedentes que han dado pauta al derecho que emana de sus resoluciones, sólo puede darse ante dos escenarios: a) Cuando halle una diferencia jurídicamente relevante entre el caso del precedente y el nuevo, cuando no hubiese considerado una cuestión de la textura abierta del significado; b) o ampliando la regla, solamente ante una nueva reflexión sobre el particular, toda vez que no existe una exigencia para conservar el criterio.

De manera textual, Hart es enfático al conceptualizar su enunciado sobre la textura abierta a decir: “La *textura abierta del derecho* significa que hay, por cierta, áreas de conducta donde mucho debe dejarse para que sea desarrollada por los tribunales o por los funcionarios que procuran hallar un compromiso, a la luz de las circunstancias, entre los intereses en conflicto, cuyo peso varía caso a caso”. (Hart, 1998) No obstante, ello también reconoce que el derecho consiste en establecer medidas orientadoras predeterminadas para que sean acatadas por todas las personas, ya sea en su carácter de particular o de funcionario.

Las reglas dan certeza a todos los individuos para predecir las decisiones de los órganos que imparten justicia, de ahí, su importancia en el derecho, pues de dichos órganos se crea derecho el cual puede subsistir mientras estos no lo cambien por un nuevo precedente o legislador lo modifique o anule por medio de la Ley, cuestión que en nada cambia en el que el juez tiene siempre la última palabra, pues tiene la potestad de interpretar la reglas ante la duda de sus significados. Las reglas por sí no pueden ser consideradas como predicciones, sino como criterios o pautas que limitan la discreción del juzgador.

Si bien, el estudio de Hart obedece a un sistema jurídico donde el precedente es parte fundamental en la toma de decisiones por parte del juzgador, se considera que el mismo no es distante a la evolución del sistema jurídico mexicano, que a través de la reforma del 2011 a la Constitución Mexicana amplía el ámbito de interpretación de los juzgadores de todos los órdenes e instancias de sistema de impartición de justicia.

La teoría de Hart pretende resolver por medios de acto de racionalidad aquellos asuntos sometidos a reglas poco claras o ambiguas y cuyo resultado no puede ser predecible de una forma automática pues el legislador dejó lagunas o no

tuvo la visión de ver todos los supuesto o consecuencias, de ahí su crítica fuerte en contra de la teoría formalista, de ahí que se justifique relacionarla con el sistema jurídico mexicano, que a partir del 2011 empieza abandonar el formalismo para darle apertura a un sistema interpretativo que tiene como punto total, los derechos humanos.

## **2.2.- Teoría de la Interpretación Jerzy Wroblewski.**

Jerzy Wroblewski, aunque nació en Lituania, sus estudios de derecho los cursó en la Universidad Jagellónica de Cracovia, Polonia, aunque su vida como académico la realizó principalmente en la Universidad de Łódź, también en Polonia de la cual fue decano y rector. Un dato importante en la vida del maestro Wroblewski es que se desempeñó como juez del Tribunal de Estado de la República de Polonia, lo que sin duda le aportó un conocimiento práctico del derecho.

Wroblewski, explica su teoría en gran parte clasificando una serie de conceptos que se trataran de explicar en este punto.

Concepciones de la interpretación jurídica, él refiere tres, *sensu largissimo*, *sensu largo* y *sensu stricto*,

- *Sensu largissimo: Comprensión de un objeto en tanto lo es como fenómeno cultural, entendiéndose como fenómeno cultural, al valor que la actividad humana le da.*
- *Sensu largo: es la comprensión de un signo lingüístico, entender el significado de signo del lenguaje atribuyéndole un significado con las reglas establecidas del mismo lenguaje.*



- *Sensu strictu: Determinación de una “expresión lingüística cuando existen dudas referentes a este significado en un caso concreto de comunicación”.*  
(Wroblewski, 1985)

Señala que todas las concepciones son correctas, pero para el caso de la interpretación jurídica se queda con el tercero, porque es parte del discurso práctico y se utiliza para justificar las decisiones jurisdiccionales; además, porque el término de interpretación se ve como sinónimo de la comprensión, donde se puede identificar la situaciones donde no cabe duda de las que si las hay, cuestión que deviene de suma importancia al determinar un significado en el discurso jurídico, y por último, se puede determinar si el texto es claro o dudoso según el contexto concreto en que se usa.

¿Qué es lo que se interpreta? pregunta que se hace el maestro polaco, el señala que lo que se interpreta son los textos que están redactados en un lenguaje legal y no encuentran claridad en determinado contexto.

De ahí parte para hacer una clasificación del tipo de interpretación la cual la divide en cuatro atendiendo a lo siguiente.

1. La interpretación legal desde el punto de la fuente de interpretación se puede clasificar desde los siguientes cinco puntos:
  - a) Interpretación auténtica, es la que realiza el mismo legislador, cabe señalar que la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, atribuye al Congreso la facultad de interpretar las normas que ha dictado.

- b) La interpretación legal, la que hace un órgano o ente del estado con facultades explícitas para ello, también aquí cabe mencionar, que, a partir del año 2011, el control concentrado de la interpretación ya no es materia exclusiva del Poder Judicial Federal, sino de todos los juzgadores cuando exista algún asunto que se considere no convencional o inconstitucional. Sobre el particular se verá más adelante.
- c) La interpretación operativa, la que la realiza el órgano que aplica el derecho a interpretar, tanto un juez como una autoridad administrativa.
- d) La interpretación doctrinal, aquella que realizan los teóricos del derecho en relación con las ciencias y la dogmática jurídica.
- e) La interpretación que surge de otras fuentes, como lo es la que hacen las partes en un proceso judicial; o bien, la que hace la opinión pública.

2. la interpretación legal desde la validez de la decisión interpretada:

- a) se refiere la que se da cuando todos los destinatarios están vinculados a ella.
- b) la que se da cuando un grupo determinados de personas interpreta textos legales de acuerdo con su parecer pensando que es lo correcto.
- c) La que un órgano interpreta determinada norma para que otras la apliquen en el mismo sentido.

3. Clasificación atendiendo al tipo de texto interpretado:

- a) Constitución;
- b) Leyes;
- c) Reglas;
- d) Tratados internacionales.

4. Interpretación según su clasificación:

- a) Implica la comparación de dos significados legales entre sí.
- b) Cuando se compara la interpretación de dos reglas legales.

### **2.2.1.- Interpretación Operativa**

Jerzy Wroblewski la concibe como aquella que “*se realiza en la aplicación del derecho cuando existen dudas referentes al significado de las reglas a aplicar relevantes para tomar una decisión*” (Wroblewski, 1985). De ahí que el juzgador deba tomar una decisión entre las distintas reglas que deban definir el significado de lo que se va a interpretar, el autor marca tres pautas a seguir por el intérprete, a) una duda de un significado que deba ser interpretado, b) uso de directivas interpretativas y c) toma de decisión interpretativa.

Es lógico que, dentro del lenguaje legal, pueda haber vaguedades y problemas con el contexto del significado, por eso hay tres contextos del significado de las reglas legales que hay que tomar en cuenta, a) lingüístico, b) sistemático y c) funcional; el primero no tiene mayor explicación pues es el lenguaje legal en concreto, el segundo refiere al sistema al que pertenece y el último implica una idea de lo que puede tener mayor beneficio social.

Precisamente este contexto del lenguaje legal es de suma importancia porque influirán en el significado de la regla legal interpretada.

Este contexto del significado aparece de dos formas, a) cuando no hay duda del significado y b) Cuando hay una situación interpretativa ante la duda del significado.

### **2.2.2.- El proceso de la interpretación y de la justificación de la decisión interpretada.**

Todas las decisiones jurisdiccionales deben estar justificadas con argumentos que las sustenten, argumentos que también deben estar apoyados en buenas razones y con razonamientos propios. La justificación interna refiere a los argumentos y la justificación externa en razones adecuadas.

La justificación en *stricto sensu* que con la que venimos trabajando, no es un acto de verificación, si no de técnicas argumentativas llamadas de formas distintas como tópicos, lógica no formal, lógica, retórica, argumentación por decir las más comúnmente utilizadas. De cualquier manera, la justificación consiste en la unión de argumentos de juicios que unen un discurso jurídico. Dice el autor que, en ningún caso, se califica bajo términos de verdad, sino de razonabilidad.

La justificación a veces encuentra una obligatoriedad en la ley y otras veces en la práctica jurídica, pero dice Wroblewski que siempre apela a la racionalidad y es precisamente ello, lo que implica que un acto no sea arbitrario. *“La idea fundamental es que una decisión interpretativa justificada debería identificar todos los argumentos determinados por los problemas básicos que tendrían que resolver si la decisión fuera racional.”* (Wroblewski, 1985)

Justificación de la decisión interpretativa exige interpretación de factores que son relevantes para el significado de la regla.

- a) Directivas interpretativas.
- b) Directivas valorativas.
- c) Valoraciones 1.- Elegir si el significado es claro, 2.- si son concurrentes o no y 3.- Términos valorativos o valoraciones.

### **2.2.3.- Teoría e Ideología de la Interpretación.**

La interpretación es una teoría descriptiva porque se centra en los argumentos y en las razones justificativas y porque hace notar los estilos de las decisiones tomadas en los distintos contextos legales.

La interpretación también es una teoría normativa, porque las valoraciones también son parte fundamental en ellas, pues forma un sistema axiológico que justifica toda la interpretación

La interpretación muchas veces deviene de valores o directrices que no encuentra congruencia entre ellos, ni son consistentes y tampoco completos, ha estos le llama Wroblewski ideologías de la interpretación. (Wroblewski, 1985)

El jurista polaco refiere que hay ideologías estáticas e ideologías dinámicas, las estáticas, tienen como punto toral la certeza y predicibilidad, mientras las dinámicas, se sustentan en que el derecho debe de ajustarse a las realidades del momento y no esperar a que el legislador contempla la necesidad de un cambio en el derecho. El maestro Jerzy, no comparte las ideologías estáticas, pues estima que eso atenta contra la creatividad y a la adaptabilidad de la interpretación legal.

#### **2.2.4.- El Problema de la Creatividad y Teoría de única Explicación Correcta.**

Toda decisión interpretativa es creativa, alberga forzosamente un punto de novedad y siempre es un elemento en toda discusión jurídica. No puede ser creativa una interpretación si no hay duda sobre el significado de una regla, o que el resultado de la regla sea producto de una operación lógica.

La tesis de la única interpretación correcta consiste en reconocer que quien toma la decisión tiene el deber de decidir el caso independientemente de todas las reglas válidas que sean deficientes y presentar una decisión correcta.

#### **2.2.5.- Instituciones y funciones de la interpretación constitucional**

La interpretación constitucional tiene varias funciones y tiene mucho que ver según quien sea el intérprete.

Función de orientación, legislativo y órganos del Estado.

Función de aplicación, Parlamento cuando sus reglas son base normativa de una decisión.

Wroblewski, es un clásico en la Teoría de Interpretación, su aportación es enorme al tema, pues sus esquemas de sistematización hacen que sea más compresivo el estudio. Gran parte de sus clasificaciones están reconocidas en la doctrina jurídica mexicana y en la pragmática jurídica, la misma jurisprudencia emitida por las diferentes instancias toma como referencias las clasificaciones de esta teoría. (Wroblewski, 1985)

Función de control, corresponde a quien tenga la tarea en controlar la observancia de la Ley, en el caso de México pudiéramos considerar al Poder Judicial de la Federación.

### **2.3.- Teoría de la Racionalidad de Aulis Aarnio.**

Aulis Aarnio, es un jurista finlandés y académico de la Universidad de Helsinki, nacido en 1937, tiene un número importante de obra escrita, su obra maestra es “Lo Racional como Razonable” publicada en 1987 y traducida al castellano en 1991.

Aarnio, empieza su obra por distinguir los casos rutinarios y los casos difíciles, se refiere a los primeros como los casos que son reiterativos y cuyas decisiones se dan en masa y que tiene poca importancia para la interpretación del derecho, cita a Benditt para explicarlo mejor “*Las decisiones rutinarias son mecánicas. “No permiten la discrecionalidad entre las alternativas.”* (Aarniu, 1991)

Decisiones rutinarias ≠ Decisiones discrecionales

Aarnio a diferencia de Wroblewski, tiene otro concepto de la certeza jurídica, para el finlandés la certeza jurídica juega un papel determinante en el derecho, el señala que la concepción de ésta significa que toda persona tiene derecho de esperar la protección jurídica, para evitar la arbitrariedad y que la decisión sea correcta, sostiene que la certeza jurídica consiste en que los Tribunales deben de comportarse de tal manera que los ciudadanos puedan organizarse y comportarse de una manera racional. En otras palabras, todo ciudadano que realiza una actividad bajo los parámetros de una ley no puede tener una consecuencia negativa por una interpretación arbitraria de un Tribunal.

El autor, repudia la arbitrariedad porque la compara como un juego de azar cuyo resultado no se puede predecir. “Cuando impera la imprevisibilidad, la sociedad se disuelve en la anarquía que, a su vez, está reñida con toda fundamentación justa y jurídica”. (Aarniu, 1991)

Elementos de la certeza jurídica: 1. Toda decisión debe jurídicamente estar en concordancia con el derecho válido. 2. Estar en concordancia con otras normas sociales no jurídicas.

Sostiene que el derecho y la realidad social interactúan de muchas formas, ya que el derecho forma parte también de las relaciones sociales, por lo que al igual que Wroblewski, reconoce que no siempre las normas legales van acordes con las nuevas realidades sociales, que aquí que haga una distinción entre normas rígidas y flexibles, las primeras se refieran al estricto cumplimiento y la segundas pueden aplicarse atendiendo a la circunstancia particular. De acuerdo con Aarnio debe de haber un equilibrio entre las dos, para dar certeza jurídica al ciudadano, sin embargo, cuando el grado de previsibilidad se extiende, debe de atenderse más a la flexibilidad razonada. La previsibilidad en estos casos de mayor flexibilidad debe “ser definida por medio de la racionalidad, sostiene que todo procedimiento que satisface criterios del discurso racional da como resultado decisiones previsibles”.

Aarnio, cita a su compatriota Kaarlo Tuori para referirse a los aspectos que han puesto en crisis al derecho; *primero* señala, que las disposiciones forman una totalidad sistematizada, donde una cantidad exagerada de normas que hacen complejo que se tenga una visión general del derecho.; *segundo*, “las disposiciones jurídicas constituyen la respuesta a la situación problemática prevaleciente en la sociedad”; *tercero*, no hay confianza en quien imparten justicia.



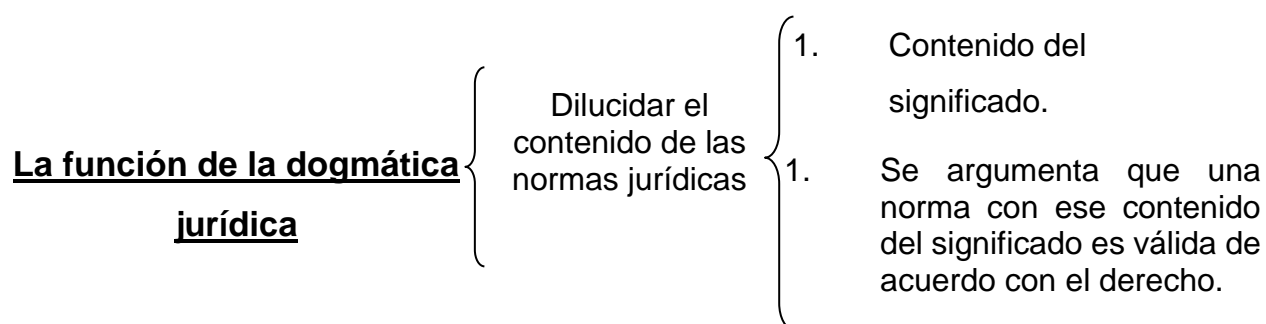
Considera que las reglas sirven para aproximarse a la verdad, y la dogmática jurídica la que se encarga del estudio del contenido de las reglas y de su orden sistemático. Cuando se habla del estudio del contenido de las reglas se llama interpretación y cuando se estudia el orden de estas se llama sistematización.

La sistematización es la contrapartida de la interpretación.

Sistema Jurídico = orden jurídico

Más general:

Sistematización + interpretación = sistema jurídico



Justificación = Racionalización

La dogmática y las decisiones jurídicas son parte de la praxis social, la materia de las dos son las normas jurídicas que realizan la realidad social.

Los tipos de investigación en la interpretación: a) investigación en el texto legal, b) investigación centrada en el problema.

En una interpretación siempre consiste en una elección, entre varias alternativas posibles, la que se haya elegido debe ser justificada para dar certeza jurídica al ciudadano.

La certeza jurídica también consiste en que las decisiones jurídicas sean racionales y los resultados sean aceptados.

“La expectativa de certeza jurídica queda plenamente satisfecha sólo si la decisión (interpretativa) cae dentro del marco legal, el discurso procedente de manera racional y la decisión satisface el código de valores dominantes”. (Aarni, 1991)

Como se ha venido diciendo, en toda interpretación debe de haber una justificación interna o externa de manera racional, comprensible. Escribía el destacado jurista escocés Neil MacCormick “La noción esencial es la de dar buenas razones justificantes para la demandas, defensas o decisiones”.

Para Aarnio las fuentes del derecho y las directrices de interpretación son las bases donde descansa toda la justificación.

La primera, las fuentes del derecho es de donde emana el mismo y las distingue o clasifica de la siguiente manera:

- a) Texto legal.
- b) Travaux préparatoires (historia de texto legal).
- c) Derecho consuetudinario.
- d) Decisiones de los Tribunales (aunque en Finlandia no tienen el peso como México a través de su Jurisprudencia).
- e) Argumentos Reales.

Asimismo, hace una categorización de las fuentes de derecho que justifican una interpretación.

- a) Obligatorización de las fuentes de derecho. El Juez siempre debe tomar en cuenta la fuente del derecho, bajo pena que sea sancionado de no hacerlo así.
- b) Aquellas fuentes de derecho en la que el juez deja un deber débil de obediencia.
- c) Fuentes permisibles del derecho, que no generan ningún tipo de obediencia, ni fuerte ni débil. Su fuerza recae en el racionamiento jurídico.

Pautas del procedimiento del racionamiento.

- a) Interpretación literal
- b) Interpretación extensa
- c) Interpretación restrictiva
- d) Interpretación a fortiori
- e) Interpretación de analogía
- f) Conclusiones a contrario

¿Cuál es la interpretación correcta? Es la que es comprensible para su receptor y para la persona a la cual el intérprete se dirige.

En la interpretación el enunciado que aclara el significado de la expresión es donde se centra la atención, estos pueden ser:

- g) Los que parte de una definición estipulativa.
- h) Los que parte de una definición analítica.
- i) Las que parte de una definición descriptiva.
- j) Las definiciones analíticas no descriptivas.

Se ha dicho que la interpretación se da en casos difíciles ante dos o más soluciones alternativas, la elección tomada debe de obedecer a una justificación que es parte de procedimiento práctico racional.

La justificación debe satisfacer al menos la fuente del derecho que tiene relación con el asunto, debiéndose verificar que se ha cumplido con lo establecido por la ley.

Las pautas de la interpretación jurídica están abiertas desde el punto de vista de su contenido, por lo que se reitera que en todo caso difícil y toda elección de posibilidades de la interpretación dogmática queda abierto a criterios valorativos.

El concepto de racionalidad se utiliza de diferente manera, la racionalidad jurídica es la que sigue ciertas pautas de interpretación que se basan en las fuentes del derecho.

La racionalidad institucional se refiere a la basada que implica en el propio sistema jurídico.

La aceptabilidad racional es una propiedad final de procedimiento de justificación jurídica, por lo que está más conectado con el resultado y con el contenido de la interpretación, más que con la del razonamiento.

La teoría procedimental del discurso racional, están sustentados por los principios de consistencia, eficiencia, coherencia, universalidad y sinceridad. Si estos son respetados y no se violan las reglas de las pruebas, el dialogo entre el que interpreta y el receptor de la interpretación crean el discurso racional.

“La aceptabilidad racional, en tanto principio regulatorio de la dogmática jurídica, juega el mismo papel que la verdad en la ciencia empírica. El objetivo de la dogmática jurídica es maximizar la aceptabilidad racional. Por otra parte, la aceptabilidad jurídica racional confiere sentido a la evaluación de las disposiciones normativas desde el punto de vista de la certeza jurídica”. (Aarniu, 1991)

## CAPITULO III.- LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LA NORMA PROCESAL.

### 1.- La Tutela Judicial Efectiva.

Dando inicio al presente capítulo es de suma importancia expresar un marco histórico y contextual de lo que representa la tutela judicial efectiva la cual tiene como notorio antecedente en el derecho anglosajón específicamente en los documentos, procesos y ordenamientos jurídicos británicos específicamente en el due process of law que podemos encontrar como atisbo histórico en la Carta Magna de 1215, en la que el Rey “Juan sin Tierra” se obligó con sus barones a “*nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exaulatur, aut aliquo modo destratur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale iudicium parium suorum vel per legem terrae*”, lo que en esencia implica que para afectar los derechos de una persona se deben seguir unos procedimientos legalmente establecidos y con ciertas garantías, todo lo cual supone a su vez un debido proceso.

Ahora bien, es preciso definir que “la tutela judicial efectiva constituye un derecho fundamental a la jurisdicción, con el fin de que los ciudadanos pertenecientes a los estados puedan resolver sus conflictos a través de órganos jurisdiccionales, a través de un proceso con las debidas garantías procesales adjetivas y sustantivas” (Ferrajoli, 2004), de suerte tal que, no se corra el riesgo de asistir a “*un resurgimiento de la auto tutela en la búsqueda extra institucional*” de la necesidad de justicia. De tal suerte que, “la tutela judicial efectiva expresa la constitucionalización del derecho subjetivo a la acción, de la misma manera que el debido proceso significa la constitucionalización del proceso; o dicho de manera más específica, nos encontramos frente a la subsunción de la acción y del proceso” (Ferrajoli, 2004) del Derecho procesal en las categorías y paradigmas propios del Derecho constitucional procesal.

Probablemente, hacer una análisis comparado entre la forma de interpretar el campo jurídico anglosajón con el de México pueda ser una labor un poco ambigua pues si bien en la actualidad el ordenamiento jurídico mexicano ha tomado ciertas directrices del derecho anglosajón estas no han sido de una manera directa por lo que su interpretación y explicación será distinta, en nuestro país el “derecho fundamental a la tutela judicial efectiva se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política Federal”, precisamente este se encuentra vertido en el segundo párrafo de dicho enunciado el cual tiene por bien señalar que *“toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”*. Además, en este párrafo podemos identificar los principios que deben ser respetados para así lograr la función jurisdiccional la cual tiene como fin garantizar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, tales como: “acceso a la justicia; seguridad jurídica en el proceso; razonabilidad en los plazos; independencia de los jueces; imparcialidad de los jueces; derecho a la defensa; congruencia y motivación de las resoluciones jurisdiccionales, entre otros”. (Carpizo E. , 2015)

Es preciso exponer que para el desarrollo del presente punto es necesario no solo hacer la reflexión de lo que la tutela significa para nuestro contexto si no también poder hacer el razonamiento de lo que esta representa en el ámbito internacional, un gran ejemplo es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual en su artículo 10, también contempla la tutela judicial efectiva, además dentro de diferentes documentos jurídicos internacionales podemos visualizar la importancia de éste derecho pues además de los textos jurídicos ya mencionados podemos encontrar la interpretación de esta en el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; ambos instrumentos internacionales señalan, que el acceso a tribunales y/o los recursos judiciales

efectivos en la protección de derechos fundamentales, son la esencia de tal derecho humano.

Por otra parte, considero importante traer a este ejercicio reflexivo al Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el cual en su artículo 14, vierte de una manera más descriptiva el alcance de la debida tutela judicial y el cual expresa: *“Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”*. (De Bernardis, 1995)

Ahora bien continuando con este ejercicio comparativo puedo destacar que en el sistema interamericano, se expresa con un especial interés, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, apartado 1°, en el cual se señala que *“toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”*. En este orden de ideas, “en la misma convención, pero en el artículo 25, establece el derecho a un recurso



judicial efectivo, pero para la protección de Derechos fundamentales”. (De Bernardis, 1995)

Continuando con la introducción y antecedente de dicho derecho podemos señalar que la tutela judicial efectiva se encuentra en distintos tratados internacionales que hacen énfasis en la protección de sujetos vulnerables, por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño, que hace énfasis en el interés superior del menor.

### **1.1.- Concepto.**

Como ya hemos expuesto en el punto anterior, la tutela judicial efectiva se puede conceptualizar como un derecho fundamental, a partir del cual se estructura la forma y función jurisdiccional. El justiciable a través de condiciones establecidas en torno a la protección de este derecho fundamental ejerce su acción y participa en el desarrollo de un proceso jurisdiccional hasta el dictado de una sentencia. Sin embargo, de poco serviría el respeto al debido proceso (formal y material) durante el desarrollo del juicio, si una vez dictada la sentencia, su ejecución se ve afectada por obstáculos que retrasen sus efectos en la esfera los justiciables, ya sea por inactividad procesal del juez, por actos contumaces de la autoridad, actos que sólo den apariencia de cumplimiento, o por un laberinto procesal en los mismos procedimientos de ejecución. De tal manera, es importante reconocer que todos los principios que forman parte de la tutela judicial efectiva y que se han tratado en este libro, alcanzan a los procedimientos de ejecución de sentencia.

No es debatible entender que dichos conceptos están sujetos a una dinámica de constante mutabilidad, y como ya he mencionado en capítulos anteriores la interpretación de este derecho será diferente según el espectro normativo en el cual

se analice, particularmente estas transformaciones en la evolución de la tutela judicial efectiva en el sistema jurídico mexicano, es la re-materialización del derecho procesal. Es de suma importancia no concebir al derecho procesal como una interpretación jurídica del derecho exclusivamente adjetiva, sino como un derecho compuesto por una parte sustantiva y con medio para aplicar esos aspectos materiales a través de su parte adjetiva.

Justamente el derecho fundamental de tutela judicial efectiva tiene una amplia vigencia en la jurisdicción mexicana, y este nuevo paradigma establece que los titulares e integrantes operen bajo esta lógica. Requiere apartar el contexto interpretativo y concepción del juez como intérprete y administrador de justicia que opera con reglas neutrales, a ponderativas, y reconocer que la función del juez no es sólo aplicar las leyes, sino interpretar de manera correcta y garantista las leyes para poder llevar a la praxis las garantías que tutelan dicho derecho.

Ahora retomando el análisis podemos iniciar el correspondiente con el ordenamiento jurídico mexicano es posible usar como ejemplo las reformas constitucionales de junio de 2011, han introducido de manera tardía a nuestro sistema jurisdiccional en la era de los derechos fundamentales; a través de ellos, el sistema jurídico se ha impregnado de una corriente para interpretar, la necesidad de los valores y derechos que el Estado debe proteger. La ley ya no es el límite de la aplicación constitucional, sino que ahora ha retomado su justa dimensión, como señala Zagrebelsky *“la primera de las grandes tareas de las constituciones contemporáneas consiste en distinguir claramente entre la ley, como regla establecida por el legislador, y los derechos humanos, como pretensiones subjetivas absolutas, válidas por sí mismas con independencia de la ley”*. Esto trajo un cambio importante en la metodología del derecho, en virtud del cual, la interpretación jurídica debe realizarse con sistemas interpretativos y bajo un contexto en el que los derechos fundamentales sean los rigentes, ante este

razonamiento podemos exponer lo que el maestro Perelman expone: *“el juez no puede considerarse satisfecho por haber podido motivar su decisión de una manera aceptable; debe apreciar también el valor de esta decisión y decidir si le parece justa o, por lo menos razonable”*. (Perelman, 1979) (Zagrebelsky, 2007)

En nuestro ordenamiento constitucional podemos identificar a la debida motivación como parte integral de la tutela judicial efectiva, la cual podemos encontramos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por ella que debemos entender cuáles son las razones fundamentales en el Derecho las cuales sostienen la resolución de un órgano jurisdiccional. Es importante expresar que “una resolución motivada debe alcanzar diversos aspectos, a saber: a) precisión clara de la Litis; b) Razones que sostengan el valor dado a las pruebas; c) Análisis de pretensiones o argumentos esenciales realizados por las partes; d) El Derecho que sostengan el sentido del fallo; e) Argumentación que justifique el sentido del fallo; f) Precisión clara de los efectos de la Sentencia, y; g) Lineamientos para su ejecución”. (Fix Zamudio & Ferrer Mac-Gregor, 2009)

Ahora bien, conforme a los razonamientos que ya hemos expuestos, sería una falsedad puesto que la tutela judicial efectiva pues si la ejecución de una sentencia implica un laberinto lleno de trampas procesales que subyugan al justiciable, llegando incluso a hacer que la misma nunca llegue a concretarse. Para este caso las sentencias constitucionales estimatorias hay coincidencia entre la doctrina y la jurisprudencia sobre la necesidad de que éstas sean idóneas para su ejecución. Esto se ha logrado porque, como afirmativamente expresa Fix-Zamudio, los Tribunales Constitucionales han conseguido un “reconocimiento de su superioridad” como “organismos especializados en la solución de los conflictos constitucionales en las materias de su competencia”. La materialización de la justicia constitucional no tendría relación con el debido proceso si no se estableciera una

ejecución de sus sentencias, conforme a la naturaleza de esta pues los conflictos que esta supone inciden en la vida jurídica, política, económica y social del Estado. (Fix-Zamudio, Enciclopedia Jurídica Mexicana, 2004)

## **1.2.- Objeto**

Continuando el desarrollo del presente capítulo podemos identificar que, de todas estas maneras de proteger la tutela judicial efectiva, sin importar que tan descriptiva sea la redacción de las disposiciones que la contemplan, es que garantiza a todas las personas la correcta ejecución de los derechos fundamentales en la estructura y función de la jurisdicción. No se pretende explicar todo el alcance de lo que puede constituir la tutela jurisdiccional efectiva o la forma en que puede concretarse dentro del proceso para caracterizarlo de debido proceso, ya que al ser la tutela judicial efectiva también un principio, cuando tratamos de hacer un razonamiento para su conceptualización, nos topamos, como veremos a lo largo del presente libro, con dificultades insuperables; de manera que, sólo nos queda analizar las aplicaciones directas de este principio a problemas particulares.

Para el ordenamiento jurídico mexicano, existía alguna confusión en la forma interpretativa de la debida tutela jurisdiccional, es importante expresar que el pleno en la quinta época expresaba que dentro del artículo 17 constitucional no se encontraban vertidas las violaciones que pudieran cometer los tribunales al administrar justicia, sino, sólo como un mandato al Estado para que los tribunales estén expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fijen la ley. No obstante, dentro del desarrollo de nuestra normatividad y con la puesta en práctica del ejercicio de razonamiento jurídico que, efectivamente, el artículo 17 constitucional se refiere a las violaciones que pueden cometer los órganos con funciones jurisdiccionales al impartir justicia. Otra confusión que existía en la realización del artículo 17 Constitucional, era que órganos del Poder Judicial de la

Federación subsumían el derecho fundamental de tutela judicial efectiva en la seguridad jurídica en lo que constituía una visión claramente legalista. (Fix-Zamudio, Enciclopedia Jurídica Mexicana, 2004)

De una manera más actualizada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha podido definir el alcance de la tutela judicial efectiva como *“el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, para poder tener de manera ipso facto el acceso a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión”*. Es preciso tener presente que la tutela judicial efectiva no se reduce a ser un derecho subjetivo público, sino que más allá de eso, el Estado tiene cargas materiales, obligaciones positivas con relación a este derecho, tales como las de establecer las condiciones necesarias para materializar este Derecho Fundamental.

Es posible observar estos razonamientos ya materializados como reflejados en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, específicamente, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual ha señalado que “los órganos judiciales están obligados: a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, con el objeto de evitar la imposición de formulismos enervantes contrarios al espíritu y finalidad de la norma, así como el convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso y la obtención de una resolución de fondo (favorecimiento de la acción); a apreciar, conforme al principio de proporcionalidad que impone un distinto tratamiento a los diversos grados de defectuosidad de los actos, los vicios en que pudieran incurrir las partes y a partir de las circunstancias concurrentes, la trascendencia práctica e incluso a la voluntad del autor, dar la oportunidad de corregirlos o inclusive, suplir de oficio los defectos

advertidos, cuando ello sea necesario para preservar el derecho fundamental en cita, con la única limitante de afectar las garantías procesales de la parte contraria y a imponer la conservación de aquellos actos procesales que no se ven afectados por una decisión posterior, en aras de evitar repeticiones inútiles que nada añadirían y sí, en cambio, afectarían el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el principio de economía procesal”. (Fix Zamudio & Ferrer Mac-Gregor, 2009)

Bajo este entendimiento, es insuficiente interpretar al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, como aquel derecho que asegura que se nos imparta justicia en los términos ponderados por las leyes previamente expuestas al proceso, sino que todo requisito establecido al individuo en relación con la función jurisdiccional y con su operatividad, tiene que pasar una prueba de razonabilidad y proporcionalidad para su validez, y los jueces tienen que ser garantes de la simetría entre la forma del proceso y el aspecto sustantivo de la tutela judicial efectiva, inclusive de oficio. Es una obligación para cualquier juez, no limitarse en aplicar estrictamente las normas procesales, sino también ponderar la aplicación siempre el principio *pro actione*, en todos los procesos, en los que este se vea implicado.

Finalmente es importante exponer la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha razonado que este derecho de tutela judicial efectiva conlleva a la aplicación del principio *pro actione*, y lo define como aquel que “*exige a los órganos judiciales, al interpretar las normas procesales, deben tener presente la ratio de la norma, a efecto de evitar formalismos o entendimientos no razonables de los ordenamientos procesales, de manera que haya un enjuiciamiento del fondo del asunto*”, recordemos que el derecho fundamental de tutela judicial efectiva implica la estructura y función jurisdiccional con ciertas garantías. (Fix Zamudio & Ferrer Mac-Gregor, 2009)

### **1.3.- El Debido Proceso.**

El vínculo entre el derecho constitucional y el derecho procesal facilitan el entendimiento de los derechos humanos como un eje rector dentro del constitucionalismo mexicano el cual permite el desarrollo de dos disciplinas jurídicas muy próximas entre sí: el derecho constitucional procesal y el derecho procesal constitucional. El primero puede ser concebido por sí mismo; el derecho procesal se conceptualiza desde las teorías constitucionales, mientras que el primero tiene como objetivo el estudiar las herramientas procesales que son necesarias para la protección de los preceptos constitucionales. En ambos, se debe considerar que la institución del debido proceso resulta forzosa desarrollarla. Dentro de los cuales están comprendidos un cumulo de principios constitucionales y de garantías que se convierten en enlaces para un diálogo entre el derecho constitucional procesal y el derecho procesal constitucional.

Es correcto interpretar como derecho fundamental complejo al debido proceso, de carácter tanto procesal como instrumental, el cual posee numerosas garantías de los individuos. Se trata de un mecanismo jurídico regulador vertido dentro de la “Constitución y que posibilita la adhesión de unos sujetos que buscan una tutela clara de sus derechos”. Es también interpretado como “un derecho fundamental que se integra generalmente a las partes dogmáticas de las Constituciones escritas reconocido como un derecho de primera generación en cuanto hace parte del grupo de derechos denominados como individuales, civiles y políticos, considerados como los derechos fundamentales por excelencia” (El debido proceso). Precisamente “estos derechos cuentan con unos mecanismos de protección y de efectividad muy concreta como el recurso de amparo o la acción de tutela, en el caso mexicano”.

Previo al análisis a este complejo derecho, resulta importante señalar que, al ser considerado un derecho fundamental, se concibe como un derecho inherente al ser humano y que se incluye en norma constitucional. Una forma de definir los derechos fundamentales es comprendiéndolos como un género de derechos humanos, ante la premisa de que son aquellos derechos reconocidos por los Estados en sus constituciones y convenios internacionales. De esta manera, “el debido proceso es un derecho humano reconocido en las Constituciones políticas, por lo que asume el carácter de fundamental, y adicionalmente aparece delimitado en gran parte de las normas positivas internacionales y desde la jurisprudencia emitida por órganos supranacionales”. (Fix-Zamudio, Debido proceso legal, Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo III, D, primera parte, 1983)

En este tenor, se puede concebir al debido proceso como un derecho fundamental, por tanto, se trata de un derecho que forma parte del bloque estricto de constitucionalidad, y que puede ser mejor entendido desde criterios que emiten órganos jurisdiccionales.

Sin embargo, poder aventurarse a expresar una definición sobre debido proceso resulta complejo, si se tiene en cuenta lo problemático que puede llegar a ser la delimitación de “los principios y garantías que lo integran lo que ha llevado a la vaguedad y equivocidad. Se trata de un derecho reconocido abiertamente en el derecho internacional y en la mayoría de las constituciones modernas. El Tribunal de Nuremberg 120 de noviembre de a 1 de octubre de 1940 se erige en el ejemplo por excelencia”, en el que una “instancia internacional que, apelando a toda la humanidad, insiste en la necesidad de vincular unos sujetos a un proceso que se asume como justo y que manifieste la existencia de un trámite digno del hombre, como <<*homenaje que el poder debe rendirle a la razón*>>”. (García Ramírez, 2014)



De tal modo la ampliación de recursos puede tornarse compleja toda vez que “no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto” (OEA), sino al conjunto de normativas que puedan ser aplicables para el correcto desarrollo del proceso con el fin de garantizar el correcto desarrollo de este.

Los recursos pueden ser ineficaces y carentes de contenido jurídico “cuando se demuestra su estos representes una inutilidad en la práctica, puesto que el Poder Judicial carece de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o faltan los medios para ejecutar las decisiones que se dictan en ellos” (OEA). A estos conceptos puede sumársele, una tardía respuesta injustificada en la decisión y el impedimento del acceso a la justicia al supuesto lesionado que está sujeto al recurso judicial.

Es necesario mencionar que para la Primera Sala de la SCJN se puede definir a garantía a la tutela jurisdiccional como “*el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión*”. De tal forma como he mencionado previamente, el derecho de acceso a la justicia debe ejecutarse de manera expedita, como lo expresa “Cuarto Tribunal Colegiado ha establecido que su interpretación debe ser en consonancia con las exigencias del artículo 25 de la convención americana de derechos humanos”. (Fix Zamudio & Ferrer Mac-Gregor, 2009)

En este sentido, el órgano jurisdiccional último, considera que la existencia del recurso judicial frente a los actos violatorios de derechos a nivel local, no basta,

sino “*que sea capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste, debe ser idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida.*” Siendo este un pilar indiscutible en el Estado de Derecho. (Zagrebel'sky, 2007) (Aguiló Regla, 2004)

Señalado lo anterior, es posible señalar la existencia de dos vertientes, una que se denomina formal, y otro material. La primera, hace referencia a *el deber que tienen las autoridades a dar respuesta de forma completa, pronta, imparcial y gratuita a las peticiones de las partes en un proceso, ajustándose a las formalidades del procedimiento. El aspecto material es atinente a la obligación de la autoridad de que sus resoluciones se cumplan, teniendo un énfasis cuando ésta se hace consistir en una sentencia definitiva favorable a los intereses del accionante.*

Ahora bien, los límites y/o restricciones a este derecho deben de estar acorde a la reserva de ley, lo cual *atiende a la exigencia de ejercer la acción en los pazos determinados, mismos que de no ser respetados, traerían consigo que se pudiera entender caducada, prescrita o precluida la posibilidad de avivar el actuar de los órganos de carácter jurisdiccional, lo cual se traduce en un legítimo presupuesto procesal, sin que se considere que resulta posible que con ello se transgreda el derecho a la tutela judicial efectiva.*

No obstante, el legislador debe de seguir los principios de proporcionalidad y racionalidad, tal y como lo ha sostenido la Primera Sala del máximo órgano judicial del país. Siendo esto, *no todos los requisitos establecidos en la normas dentro de un proceso pueden considerarse inconstitucionales, como es el caso del*

*cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, o el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.*

Se ha empleado el principio de proporcionalidad hasta convertirse en un canon de la hermenéutica jurídica, sobre todo cuando nos referimos a la concreción de derechos fundamentales a nivel constitucional e internacional. En este sentido, “ha sido empleado por la propia jurisdicción internacional de los Derechos Humanos, como la Corte Europea, donde ha tenido un desarrollo bastante prolijo, e inclusive se ha consagrado como parte del derecho común europeo, a través de su inclusión expresa del subprincipio de adecuación y necesidad en la propia Convención Europea sobre Derechos y Libertades Fundamentales” (OEA).

El derecho fundamental a ser juzgado por un Juez o Tribunal imparcial está garantizado, entre otros, por los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas interpretaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, serán analizadas en los siguientes apartados. (Kelsen, La garantía jurisdiccional de la Constitución , 1928)

Esta prerrogativa fundamental emerge de la necesidad de que los individuos no resuelvan sus conflictos por sí mismos, pues ello conlleva a la imposición del más fuerte, lo que no necesariamente entraña una impartición de Justicia; sino que los sometan a un Juez o Tribunal que, por su carencia de interés directo o indirecto en el asunto, actúe con objetividad en aras de lograr el descubrimiento de la Verdad y la impartición de Justicia, ambos fines inherentes a la función jurisdiccional de la cual es depositario. Así, se estima que la imparcialidad judicial, no es nada más una

característica de un “juez”, sino la expresión de un sistema que, de forma histórica, ha sido construido para hallar la verdad y expresar el derecho que le corresponda por una no-parte de la controversia cuya decisión quede exenta de la pasión o afección particular por alguno de los contendientes.

Bajo la clásica división tripartita de los sujetos que integran la relación jurídico-procesal, el Juez debe intervenir como un tercero que se conduzca bajo los siguientes principios: a) imparcialidad, según el cual no debe colocarse en la posición de parte actora o demandada, sino limitarse a ejercer la labor jurisdiccional; b) imparcialidad stricto sensu, o sea, que carezca de cualquier interés subjetivo, mediato o inmediato, en la resolución del asunto; y, c) independencia stricto sensu respecto de las partes que acuden ante él para que dirima su controversia . La conjugación de estos tres principios o virtudes permiten al juzgador emitir resoluciones imparciales y objetivas, apegadas a las normas jurídicas que aquél estime aplicables al caso; en cambio, la carencia de alguno de ellos desestabiliza la objetividad del Juez o Tribunal y lo coloca en un entorno de subjetividades ajenas al orden jurídico propiamente dicho, arriesgando el desentrañamiento de la Verdad y la impartición de Justicia. (Guastini, 1998)

Así pues, la autoridad jurisdiccional es imparcial cuando conduce el proceso y emite sus resoluciones de manera objetiva, esto es, basándose estrictamente en las fuentes del Derecho y alejándose de cualquier subjetividad resultante de su situación personal o de relación con alguna de las partes.

En esa tesitura, la imparcialidad judicial se erige como un elemento imprescindible del debido proceso, pues la indebida preferencia del juzgador por alguno de los litigantes constituye una potencial afectación al derecho de defensa

de la contraparte e incluso, podría reflejarse en las resoluciones judiciales contrarias a la objetividad que debe caracterizarlas.

La objetividad o imparcialidad del juzgador puede garantizarse mediante la prohibición a éstos de desempeñar otras actividades remuneradas, así como la regulación de los casos en que pueden incurrir en responsabilidad, ya sea penal, civil, administrativa y/o política. Ambos mecanismos tienden a garantizar extraprocesalmente la imparcialidad judicial porque, en primer término, impiden al Juez tener algún vínculo laboral con las personas que, a la postre, podrían fungir como actor o demandado en alguna de las controversias sometidas a su potestad; aunado a que las responsabilidades que pueden atribuirse a los juzgadores y las respectivas sanciones son un aliciente para que aquéllos tramiten y resuelvan conforme a Derecho los procesos cuyo conocimiento les corresponde.

Pero como esos mecanismos son de naturaleza extraprocesal, no tienen consecuencias tangibles y directas en los procedimientos ventilados ante los órganos jurisdiccionales, pues no alteran los derechos procesales de los justiciables ni la eficacia de las resoluciones judiciales que ya se hayan dictado; de manera que por sí mismos no garantizan la imparcialidad de los juzgadores en el entorno del debido proceso legal. (Gómez Lara C. , 2006)

En ese sentido, complementariamente existen mecanismos intraprocesales mediante los cuales sí se puede llegar a garantizar la imparcialidad judicial como una prerrogativa fundamental del debido proceso legal, tales como la excusa o inhibición y la recusación. La excusa o inhibición es un acto propio del juzgador mediante el cual se abstiene de conocer una controversia en la que considere tener un interés directo o indirecto en el litigio, en tanto que la recusación permite a los

justiciables exigirle formalmente a aquél que se abstenga de conocer un negocio en el que, según su perspectiva, carecería de imparcialidad.

A diferencia de la excusa o inhibición, la recusación no es un mecanismo regulado en todos los procedimientos jurisdiccionales, pues en determinadas leyes se prohíbe a las partes cuestionar la imparcialidad del juzgador; sin embargo, en esos casos excepcionales cobran importancia los mecanismos extraprocesales antes referidos y existen mayores sanciones para los juzgadores que no se abstienen de conocer el procedimiento en el que tienen interés directo o indirecto.

Por otra parte, en las normas procesales también se establece que los Jueces o Tribunales pueden decretar oficiosamente el desahogo de pruebas para mejor proveer e, incluso, reponer el procedimiento cuando adviertan una omisión procedimental que afecte los derechos de alguno de los litigantes. ¿En qué medida estas atribuciones afectan la imparcialidad judicial en el marco del debido proceso? Esta cuestión ha sido analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que se estudiará en el tercer apartado de este trabajo, pero por ahora hay que puntualizar que esas atribuciones jurisdiccionales se relacionan también con el desentrañamiento de la Verdad y la impartición de Justicia a que se ha hecho alusión anteriormente, de manera que no afectan la imparcialidad judicial siempre que tengan dichos propósitos y no tiendan a suplantar a las partes en la acreditación de las acciones o defensas, pues en ese caso se transgrediría el principio de imparcialidad.

Quizás una de las garantías del debido proceso, que más nos pueden ilustrar del cambio de paradigma en el Derecho procesal mexicano, es la ejecución de la sentencia. Siendo que el debido proceso es entendido como el espacio institucional que garantiza, que la función jurisdiccional concrete la tutela judicial efectiva que

exige la Constitución, no debería extrañar que ahora se comience a estudiar con más profundidad el tema de la ejecución de la sentencia.

Sin embargo, la desproporción que encontramos entre los estudios que hablan sobre los efectos de la sentencia y los referidos a la ejecución de esta, claramente favoreciendo a los primeros, nos muestra la resistencia por parte del paradigma liberal. De manera que, los efectos de la sentencia es un tema que tiene que ver con las consecuencias jurídicas que se desprenden de la función jurisdiccional referida a la interpretación, sin embargo, la ejecución de la sentencia atañe a la eficacia en la concreción del mandato judicial, y es un tema que, aunque jurídico, pareciera involucrar más bien la comprensión de aspectos procedimentales en el sentido instrumental.

Dicho en otras palabras, la visión liberal decimonónica pero que en México ofrece clara resistencia en pleno siglo XXI se preocupa más por los efectos de la sentencia en tanto que se puede observar la primacía de la ley frente al juzgador. No obstante, en el paradigma de los derechos humanos, la ejecución de la sentencia representa la garantía de que la función jurisdiccional efectivamente logra solucionar el conflicto, de manera que termina por ser la satisfacción de la parte subjetiva del proceso como institución. (Fix-Zamudio, Constitución y Proceso Civil en Latinoamérica, 1974)

Sin ejecución de la sentencia no hay una tutela judicial efectiva de la persona, y, por tanto, los efectos de la sentencia quedan sin efecto, reduciendo su importancia sólo a una visión formalista del ordenamiento jurídico. Frente a la naturaleza liberal del derecho a la jurisdicción que encontramos en la tutela judicial efectiva, aparece su carácter prestacional, esto es, la obligación del Estado a hacer cumplir lo que se establece en el fallo, aún en contra de la voluntad de las partes

inconformes con el mismo, y conforme a las mismas exigencias que se desprenden del debido proceso. De modo que, la ejecución de la sentencia está sujeta a las garantías del debido proceso.

Entre los derechos de los justiciables o de las partes, que es uno de los sectores integrantes del derecho constitucional procesal, se encuentra el derecho a ser oído o de audiencia. Esta prerrogativa fundamental refleja el aforismo latino *nemo inauditus condemnatur*, relativo a que nadie puede ser condenado sin ser escuchado, lo cual constituye una máxima o principio general del Derecho tendiente a garantizar que el interesado pueda desplegar a plenitud su defensa jurídica ante el órgano jurisdiccional que habrá de pronunciarse sobre sus derechos y obligaciones. (Carpizo E. , 2015)

Para el jurista Fix-Zamudio quien ha expresado desde un amplio espectro, a el derecho de audiencia al cual identifica como uno de los eslabones integrantes del derecho de defensa, pero cabe añadir que aquél debe ser complementado con las demás prerrogativas del debido proceso legal, pues la sola recepción de los argumentos del interesado no garantiza la defensa de los individuos si no se les permite acceder a la impartición de Justicia por parte de un órgano competente, independiente e imparcial, o bien, si no pueden recibir asistencia letrada o consular, conocer el expediente, ofrecer pruebas, interponer recursos, etcétera. (Fix-Zamudio, Constitución y Proceso Civil en Latinoamérica, 1974)

El derecho a ser oído es sin primordialmente un derecho fundamental e imprescindible de importancia para la correcta aplicación de las leyes, cumpliendo todos los estándares garantistas de derechos, que el derecho moderno prevé. Sin duda para los estándares actuales su omisión representaría una grave falta a los derechos más fundamentales de los individuos susceptibles de personalidad



jurídica. (Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales. Traducción y estudio introductorio de Carlos Bernal Pulido, 2007) Puesto que, de no garantizarse la audiencia del individuo, resultarían inservibles y sin coherencia jurídica las demás garantías que componen el debido proceso dentro de un juicio, de modo que no podría garantizarse la imparcialidad e independencia del órgano jurisdiccional, lo cual como ya se ha mencionado sería un atentado al derecho jurídico más importante de los individuos, trastocando en sí la estructura más fundamental al mecanismo de impartición de justicia, si bien en nuestro país la implementación de los baluartes de debido proceso no están implementados de una manera orgánica se va por un camino a la correcta implementación de estos teniendo en cuenta que el “Due Process” (De Páramo Arguelles, 1998) del derecho anglosajón comprende de un cúmulo de costumbres jurídicas aplicadas a los procesos históricos que se desarrollan conforme a la costumbre jurídica de dichos países, pensar en que el sistema jurídico mexicano pueda desarrollar dichas costumbres o antecedentes jurídicos es el objeto de la implementación de los derechos que conforman el debido proceso en los mecanismos de impartición de justicia en México, los cuales tienen el fin de garantizar un proceso jurídico justo, equitativo y apegado a los derechos fundamentales de los individuos.

#### **1.4.- El Debido Proceso y su Vinculación con la Tutela Judicial Efectiva**

El debido proceso es un derecho fundamental que garantiza el acceso a la justicia por lo tanto su relación es intrínseca con la “tutela de justicia efectiva, en el razonamiento de facilitar a los individuos el acceso a las instituciones impartidoras de justicia, además de contar con recursos que les permitan impugnar o entablar una acción ante los Tribunales competentes”; de tal manera precisa que se ha de entender la acción procesal como *el derecho que tiene las personas a obtener de los tribunales una sentencia que resuelva el conflicto que se le plantea, en el*

*entendido de que existe una obligación correlativa de los órganos jurisdiccionales misma que estriba en desarrollar un proceso y dictar una sentencia para resolver dicho litigio.*

Continuando bajo la misma línea argumentativa, es necesario exponer que el “debido proceso debe ser considerado como un verdadero derecho subjetivo, individualizado y determinado, el cual deriva de una obligación negativa y positiva para el Estado. Por una parte, respetar esa esfera de actividades (negativa) y por otra en prestar su función jurisdiccional para ese caso (positiva). Es por ello, señalar la existencia del correcto significado del derecho subjetivo, desde la clásica concepción del derecho reflejo de Kelsen, hasta concepción moderna de Alexy, quien defiende una visión amplia y no reduccionista de los derechos, aceptando la reconexión conceptual entre el derecho y la moral, desde una perspectiva moderada del positivismo jurídico”. (Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales. Traducción y estudio introductorio de Carlos Bernal Pulido, 2007)

El debido proceso puede interpretarse y materializarse a través de diferentes principios y subprincipios, los cuales articulan una relación con la tutela judicial efectiva. Uno de esos principios es el de plazo razonable. Una lenta impartición de justicia podría llegar a ser denegación de esta, debido al estado de incertidumbre prolongado en el que se mantienen los justiciables. Para poder explicar la legitimidad constitucional podemos encontrar la expresión textual dentro del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que *“toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”*. De lo anterior es posible destacar algunos aspectos importantes en torno al principio de plazo razonable: “a) es un derecho fundamental que se administra justicia; b) es tarea del legislador establecer los plazos y términos para que los tribunales impartan justicia (Reserva

de Ley); c) los tribunales deberán impartir justicia en los plazos y términos fijados por el legislador (seguridad jurídica); y d) la resolución de los tribunales en relación con las características del proceso debe ser pronta”. (García Ramírez, 2014)

De acuerdo con lo anteriormente expreso, y en seguimiento al pensamiento de que la impartición de justicia es un derecho fundamental, es una obviedad que resulta suficiente que exista cualquier plazo o término fijado en leyes para ello, sino que es necesario que esos plazos sean razonables de acuerdo con lo que se pretende lograr dentro del proceso. Es tarea del juzgador identificar que esos plazos y términos fijados por los legisladores sean razonables para la administración de justicia. Sin embargo, encontramos gran dificultad en precisar qué es o qué puede ser entendido como un plazo razonable de manera general.

Ahora bien respecto al principio de plazo razonable es posible identificarlo en una serie de diferentes cuerpos normativos internacionales los cuales son aplicables y ejecutables en México, tal ejemplo podría ser el “artículo 8 apartado 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos ; en los Artículos XVIII y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 14, punto 3, inciso c, del Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos ; artículo 37 inciso d) y 40, apartado 2, inciso b), sub inciso ii) y iii) de la Convención de los Derechos del Niño”. (Fix-Zamudio, Constitución y Proceso Civil en Latinoamérica, 1974)

En este capítulo expondremos la línea jurisprudencial que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con este principio de plazo razonable en la impartición de justicia; también tornaremos los reflectores a tribunales internacionales que han tratado con mayor desarrollo este tema y, por

último, aspectos de responsabilidad en el sistema jurídico mexicano por violación al principio de plazos razonables.

El derecho a recurrir o a la doble instancia es una prerrogativa fundamental de los justiciables que les permite impugnar las determinaciones materialmente jurisdiccionales que se pronuncian en torno a sus derechos y libertades con el objeto de que un órgano superior enmiende, con base en los respectivos agravios, los errores de la sentencia o los vicios procedimentales que trascendieron en el sentido de ésta.

Este derecho fundamental constituye una garantía del debido proceso legal por dos razones esenciales: a) permite defender derechos y libertades del error judicial; y, b) se erige como una garantía subsidiaria o secundaria que tutela el respeto de los demás derechos o garantías integrantes del debido proceso legal. Ambas razones, de forma independiente, permiten sostener que este derecho es inherente al debido proceso legal, pues tiende a garantizar de manera complementaria la defensa del individuo frente a cualquier acto de la autoridad jurisdiccional que podría afectar sus derechos y libertades. (Picó i Junoy, 2011)

Bajo esa tesitura es posible entender el razonamiento del profesor Picado Vargas que ha afirmado que la doble instancia legal *“es una manifestación y una garantía constitucional tanto del derecho de defensa o al contradictorio como el de la tutela judicial efectiva, que implica también el derecho a que las resoluciones del órgano decisor sean revisadas por otro de grado superior, en aras de la seguridad jurídica a través de un control jerárquico de tanto de la sentencia como de aquellas resoluciones interlocutorias que crean una situación de estado inmodificable”*. (Picado Vargas, 2011)

Como ejercicio comparativo podemos analizar lo que el profesor Fix-Zamudio expresa, el cual le define que el derecho a recurrir las sentencias jurisdiccionales está implícito en el derecho de acción, que constituye una potestad subjetiva pública tendiente a excitar la intervención de los órganos jurisdiccionales en la resolución de determinado conflicto. Dicho en otras palabras, puede entenderse como el derecho a recurrir el cual es una subespecie del derecho subjetivo público de acción debido a que motiva la intervención de un órgano jurisdiccional superior en aras de que verifique la corrección constitucional y legal de la sentencia originaria que dirime un conflicto en el que intervino o, en su caso, debió intervenir el recurrente. (Fix Zamudio & Ferrer Mac-Gregor, 2009)

Ante estas ponderaciones, es importante destacar que este razonamiento puede entenderse como el derecho a recurrir a la doble instancia legal, y que tiene límites que permiten la eficacia de otras prerrogativas del mismo rango, tales como la celeridad en la impartición de Justicia. Por ello, se ha sostenido que el derecho a recurrir está limitado por los principios de taxatividad impugnatoria y de legalidad procesal, según los cuales no toda resolución es recurrible y todo recurso debe estar previsto en la ley, respectivamente.

La importancia de la efectividad del derecho fundamental a recurrir el fallo ante un tribunal superior es la principal fuente de transgresiones a este derecho el cual ha representado un total fallo para la correcta impartición de justicia, puesto que su reconocimiento es necesariamente reconocido expresamente por las normas procesales de carácter secundario, mismas que establecen distintos medios de impugnación que deben dirimirse por un tribunal superior.

### **1.5.- La Tutela Judicial Efectiva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado como Órgano de Función Jurisdiccional.**

En una opinión personal, el término de la tutela efectiva empieza a ser familiar en el seno del medio jurídico mexicano a partir de la reforma constitucional del 2011 relativa a los derechos humanos, ya que si bien los tratadistas mexicanos con mucha precisión identifican este derecho humano en el artículo 17 de la Carta Magna, también lo es que para su debido ejercicio el juzgador tenga más herramientas interpretativas para solucionar el fondo de los asuntos puesto a su consideración y las cuales encuentra su fundamento en los artículos primero y 133 constitucionales, dice el maestro español Jesús González Pérez que *“La tutela jurisdiccional es el derecho de toda persona a que se le haga justicia, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con una garantías mínimas.”*

La tutela judicial efectiva no implica solamente el tener acceso a la justicia sino como dirían los maestros nuevoleonenses Garza Salinas y Rodríguez Lozano en su obra del debido proceso, *“La tutela judicial efectiva implica una actividad de los órganos pertinentes del Estado tendientes a la protección de los derechos. Nosotros pensamos que esa tutela a la vez que garantiza a las partes la resolución justa de un conflicto es un mecanismo que procura la actualización de la voluntad concreta de la ley”*.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, es el órgano competente por Ley para impartir justicia en las controversias que un particular – en casos de excepción, por una autoridad tratándose de los juicios de lesividad – promueva contra actos de la administración pública estatal y municipal, por lo tanto ejerce una función jurisdiccional por lo que sus actuaciones deben estar inmersas en el contexto constitucional, pues imparte justicia al resolver los respectivos

sometiéndose a las reglas procesales contenidas en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Este último punto, es sobre lo que se pretende reflexionar, ¿Cuál es la importancia del papel de las normas procesales dentro del ejercicio de la tutela judicial efectiva?, ¿Cuál es la interpretación que deben darse a las mismas?

*El segundo párrafo del artículo 17 constitucional dispone:*

***“17....***

***...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...”***

Este precepto es el fundamento constitucional de la norma procesal al referirse de manera categórica que toda persona tiene el derecho de acceso a la justicia, bajo los términos de ley, esto es, bajo las reglas previamente establecidas, lo que significa la protección de esta garantía en el estado de derecho. Por consiguiente, la actuación de todas las autoridades jurisdiccionales debe de apagarse a las normas que las respectivas leyes que regulan sus procedimientos señalen. Sin embargo, como se verá más adelante dichas normas no están exentas a interpretación.

Hugo Alsina, José Becerra Bautista y Cipriano Gómez Lara –tres clásicos en materia procesal– el primero argentino y los otros dos mexicanos, la función jurisdiccional y las normas procesales guardan estrecha relación, respecto a dicho tema han señalado:

*“El Estado cumple con su función jurisdiccional de tres maneras: 1.) Organizando la administración de justicia, 2) determinando la competencia de los tribunales que la integran 3) estableciendo las reglas del procedimiento a que deben sujetarse los jueces y litigantes en substanciación de los procesos.”* (Alsina, TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL, VOLUMEN I, 1990, pág. 34)

*“...jurisdicción es la facultad de decidir, con fuerza vinculativa para las partes, una determinada situación jurídica controvertida.”* (Becerra Bautista, 2006, pág. 5)

*“Por lo tanto son normas procesales: I. - Las que crean el órgano jurisdiccional mismo y le atribuyen competencia. II. – Las que establecen la forma en que se debe desarrollar el proceso; y III.- Las que fijan las obligaciones, derechos y cargas de las personas o entidades que, por cualquier motivo, intervienen en el proceso.”* (Becerra Bautista, 2006, pág. 23)

*“La norma procesal siempre es de carácter público, y este carácter deviene porque siempre presupone la intervención soberana del estado en un acto supra a subordinación en el que, a través de los órganos jurisdiccionales, se conducen y dirimen una serie de conductas que son las procesales, para llegar a una sentencia, acto de soberanía estatal a través del cual se dirime coactivamente una divergencia, litigio...”* (Gómez Lara C. , Sistemática Procesal, 2006)

La función jurisdiccional necesariamente debe, en primera instancia, ir de la mano con las normas procesales, ya que ambas son parte medulares en el ejercicio de la tutela judicial efectiva; de alguna manera, en la medida de que la actuación jurisdiccional este apagada al marco normativo, se permite asegurar la imparcialidad



en el juicio, pues, las reglas serán comunes para todos, evitando así, ventajas; esto también se traduce en certeza y seguridad jurídica para las partes.

En la justicia internacional, también estos principios son muy arraigados, de manera de ejemplo cito algunas ideas en el caso “Panel Blanca”, conocido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el que el Juez Dr. Edgar Enrique Larraondo Salguero, sostuvo que:

*“En derecho procesal la legalidad de las formas consiste en los modos o maneras en que deben desenvolverse los actos de que se compone el proceso, o sea, en el tiempo, lugar y orden previstos por la ley.*

*Ello es valedero para todo tipo de proceso, cualquiera que sea su naturaleza y jurisdicción, para evitar caer en la anarquía procesal, puesto que el derecho falto de certeza deja de ser derecho. En el presente caso las leyes aplicables: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su Estatuto, contienen disposiciones que revisten formalidades solemnes referentes a las actuaciones ante la Corte, tendientes a asegurar el respeto del contradictorio, igualdad procesal y seguridad jurídica.”* (Larraondo Salguero, 2014)

Puntualizo lo importante que juega una norma procesal en el derecho de la tutela judicial efectiva con algo escrito por Gómez Lara que cita a Briseño, el cual se refiere a las características que debe tener toda regla procesal, en los términos que a continuación se precisa:

*“Los principios procesales son los siguientes: el de imparcialidad del juzgador; el de transitoriedad, el de igual de ocasión de instancia de las partes y el de eficiencia procesal”.* (Larraondo Salguero, 2014, pág. 66)

La posición jurídica del presente trabajo no recae en una concepto de estricta legalidad, al contrario, pretende justificar como no caer en ella, en el entendido que la norma también puede ir en contra de un derecho humano como lo es el de tutela efectiva, y que ante su aplicación pudiera darse un control constitucional de misma por parte del jugador, pero para ello se requiere argumentos que no se contrapongan con los demás principio constitucional, de alguna manera así lo dice Ferrajoli quien es citado por Prieto Sanchís al hablar del cambio de positivismo clásico al constitucionalismo *“Una de sus consecuencias es que la jurisdicción ya no es la simple sujeción del juez a la ley, sino también análisis crítico de su significado como medio de controlar su legitimidad constitucional”.*

Anterior a la reforma al artículo primero de nuestra Constitución Política, los órganos jurisdiccionales procuraban en sus resoluciones apearse en lo más posible a la literalidad de las disposiciones legales, cuidando así el principio de certeza jurídica. Hoy, ante la vigencia del artículo primero constitucional federal, cambia la concepción de la certeza jurídica, sin que ésta tienda a desaparecer como muchos lo han dicho, al contrario, la certeza jurídica es el principio toral de todo procedimiento, pero ahora, a la luz de una nueva concepción, donde siempre el juzgador debe velar por el respeto a los derechos humanos, siendo la tutela judicial efectiva uno de ellos como lo veremos más adelante.

## **1.6.- Exposición de Jurisprudencias relacionadas con la Tutela Judicial Efectiva.**

En este apartado se analizarán tres tesis las cuales están relacionadas en torno a la interpretación que hacen las distintas instancias del Poder Judicial de la Federación en torno al derecho fundamental de la tutela efectiva, la primera es una contradicción de Tesis que resuelve la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la segunda es una Jurisprudencia emanada de la Primera Sala de la misma Corte y la Tercera es una tesis aislada del Segundo Colegiado de Circuito.

Es importante saber la línea de pensamiento de los diferentes órganos jurisdiccionales, ante la nueva visión de la impartición de justicia en México, donde se privilegia la interpretación en aras de proteger, salvaguardar y optimizar los derechos fundamentales; sin embargo, esta nueva migración del derecho, la discrecionalidad se incrementa, por lo que resulta una imperiosa necesidad de que los impartidores de justicia sean congruentes y constantes en sus líneas de pensamiento, ya que esto evita la arbitrariedad en las resoluciones. Los justiciables tienen derecho a saber la línea de pensamiento, ya que a juicio de quien escribe el principio de certeza jurídica rige en nuestra Constitución y es parte del derecho a la tutela jurídica efectiva.

### **1- Análisis a Jurisprudencia por contradicción de tesis.**

*“Registro digital: 2022311, Aislada, Materias(s): Administrativa, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, Tesis: 2a./J. 47/2020 (10a.)*  
**RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  
CUANDO LA INFRACCIÓN HAYA OCURRIDO ANTES DEL 19 DE JULIO DE**

**2017 SIN QUE SE HUBIERE INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD, RESULTA APLICABLE PARA EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS).**

*Hechos:* El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado de Circuito contendientes analizaron cuál legislación resulta aplicable para el procedimiento de responsabilidad administrativa si la conducta se ejecutó antes del 19 de julio de 2017, pero la investigación inició en esa fecha o en una posterior. Al respecto llegaron a soluciones contrarias, pues para el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito concluyó que la legislación aplicable para el procedimiento es la vigente en la fecha en que se cometió la conducta.

*Criterio jurídico:* La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

*Justificación:* La Ley General de Responsabilidades Administrativas fue creada como un cuerpo normativo que busca englobar la totalidad de las actuaciones necesarias para determinar la existencia de causales de responsabilidad y, en su caso, sancionarlas, lo cual generó que las etapas procedimentales estuvieran enlazadas y tuvieran un efecto unas respecto de otras; la estrecha vinculación entre la fase de investigación y las posteriores, implica que el trámite sea uniforme, desde la investigación hasta la resolución, y sus etapas no se pueden entender de manera aislada. Ahora bien, de conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los procedimientos administrativos iniciados antes del 19 de julio de 2017 deberán concluir según las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Sin embargo, si la conducta se ejecutó antes de esa fecha, pero la investigación inició con posterioridad a ella, el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la resolución será emitida por la autoridad competente”.

Quien denuncia la contradicción de tesis es la Secretaría de la Función Pública, respecto a los criterios sustentados por el Pleno en materia Administrativa del Primer Circuito Judicial, que a su vez resuelve una contradicción de tesis en las que contendieron el Cuarto Tribunal Colegiado y el Décimo Quinto Tribunal Colegiado, ambos en materia Administrativa pertenecientes al mismo circuito.

El motivo de lo resuelto por dicho Pleno fue determinar si los procedimientos disciplinarios debieron ser tramitados con fundamento en la Legislación vigente en la que ocurrieron los probables hechos irregulares o bien, con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya entrada en vigor fue posterior.

El Pleno determinó, que, en apego a una Jurisprudencia emanada por la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número de registro digital 2014917, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el veinticinco de agosto del dos mil diecinueve, bajo el rubro:

***“PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. PARA DETERMINAR LA LEGISLACIÓN APLICABLE PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN, DEBE ATENDERSE AL MOMENTO EN QUE INICIA LA ETAPA DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.”***

En dicha tesis se considera que las etapas llevadas en un procedimiento de Responsabilidad Administrativa debían de regirse bajo la misma normatividad en la que fue iniciado el procedimiento, esto con la intención de no comprometer la integridad y congruencia de un procedimiento.

Esta Jurisprudencia del Pleno del Primer Tribunal de Circuito al que hemos hecho referencia contendió contra el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, quien producto de una revisión fiscal promovida en contra de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que determinó la nulidad del procedimiento sancionador al sostener que el procediendo de Responsabilidad fue llevado por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas (vigente hasta el 2017), cuando la normativa aplicable era la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dicho Tribunal Colegiado declaró fundados los agravios interpuestos por quien presento la revisión

fiscal encaminados a sostener que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no puede ser la que se tome como base para determinar una sanción cometida bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, considero extender la vigencia de la Ley de Responsabilidades Administrativas Federal, tanto en la parte sustantiva como adjetiva, ya que a su parecer la Ley General de Responsabilidades Administrativas es la que distingue las faltas graves y no graves, por consiguiente, sostuvo que no se puede desvincular las normas sustantivas y las adjetivas.

Antes de continuar, es importante precisar que el artículo tercero transitorio de La Ley General de Responsabilidades Administrativas que entró en vigor en julio del año dos mil diecisiete, establece que todos los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados conforme las disposiciones aplicables a su inicio deberán de concluir bajo dicha normativa, más del mismo no se desprende cual es el ordenamiento aplicable para resolver las posibles conductas irregulares cometidas antes de la entrada en vigor de la Ley.

Cabe señalar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contempla reglas específicas en cuanto a etapas procesales, reglas sobre caducidad, procedencia, valoración de pruebas, autoridades involucradas, tipo de faltas, sanciones y autoridades vinculadas en la aplicación de la Ley.

Una vez expuesto los sentidos de las jurisprudencias en disputa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluye en su ejecutoria que

todos los procedimientos iniciados bajo la vigencia de una Ley, deben de ser concluidos bajo el ordenamiento con el cual fue iniciado, cuestión que en opinión de quien escribe, es un tema que ya estaba superado, sin embargo, como parte de sus razonamientos identificados en los puntos cuarenta y uno y cuarenta y dos de la ejecutoria, justifica que los hechos cometidos bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas, deben sujetarse a la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente a partir del dos mil diecisiete, bajo la lógica que no es obstáculo calificar la conducta como grave o no grave en los términos de la Ley General ya que la ley Federal en diversos artículos ya calificaba la gravedad de ciertos actos irregulares.

#### Opinión:

En primer término, quisiera destacar, que esta contradicción de tesis fue aprobada por mayoría de votos con tres a favor y dos en contra, lo que evidencia que fue un tema controvertido, desde mi punto de vista el razonamiento que da la segunda sala respecto a que la conducta irregular cometida antes de la reforma que da entrada a la Ley General de Responsabilidades Administrativas debe de regirse por la Ley vigente en su momento. Coincido en lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en virtud de que las normas que integran el sistema anticorrupción derivado de la reforma constitucional del 2015, es un sistema concatenado entre diversas leyes, instancias, se pudiera decir que es todo un sistema novedoso para la imposición de las sanciones administrativas, por lo que para su operatividad en todos los ámbitos debe de existir un verdadero engranaje de toda la normativa, pues de lo contrario se atentaría contra los principios de certeza y seguridad jurídica que tiene toda persona y que garantiza las consecuencias de sus actuaciones partiendo de normas ya establecidas. Como ejemplo de cómo este criterio jurisprudencial puede repercutir en los derechos fundamentales de las personas, basta señalar que, con motivo de

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establecen los mecanismos Para sancionar a los particulares por las actividades que en dicha ley se señalan y que tienen como consecuencia la imposición de una sanción. En este sentido, este criterio puede ser nugatorio para dichos particulares puesto que atentaría contra el Derecho consagrado en el artículo 14 constitucional de la no retroactividad de la Ley en perjuicio de persona alguna.

## **2. Análisis a jurisprudencia por reiteración**

*“Registro digital: 2021551, Aislada, Materias(s): Constitucional, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: Libro 74, Enero de 2020 Tomo I, Tesis: 1a./J. 8/2020 (10a.), Página: 589”.*

**“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO A RECURRIR UN FALLO ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO”.**

*“Si bien los derechos mencionados giran en torno al derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse presente que dichas prerrogativas son autónomas, con dimensiones y alcances propios que exigen desarrollos interpretativos individualizados que abonen en el entendimiento y configuración del núcleo esencial de cada derecho. Ahora bien, en cuanto al juicio de amparo, la Corte Interamericana ha establecido que éste se encuentra en el ámbito del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, <<Pacto de San José>>, reconociéndolo, por su naturaleza, como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por la Constitución y la Convención citada; el mismo Tribunal Interamericano precisó que el recurso consagrado en el aludido artículo 25 no es el recurso de apelación, el cual está previsto, en el artículo 8.2 h), del mismo tratado. Esta diferencia entre el derecho a la protección judicial y el derecho a la revisión, es de suma relevancia para entender cuándo se está en presencia del derecho a recurrir un fallo ante una instancia superior, en respeto al derecho al debido proceso, y cuándo se está ante la exigencia del derecho a un recurso que ampare derechos fundamentales de fuente nacional o convencional, por tanto, el juicio de amparo debe considerarse como un medio de defensa diseñado para proteger los derechos consagrados en la Constitución y la Convención Americana, y no como un mecanismo de segunda instancia, esto es, un recurso que sirve de margen para la revisión de una decisión en el marco de un proceso”.*



La Primera Sala de la SCJN, resuelve un recurso de revisión que originariamente proviene de un juzgado menor de Saltillo, Coahuila, si bien este asunto es de naturaleza mercantil, la argumentación que emplea la Sala es aplicable para todos los procedimientos jurisdiccionales ya que en ella encontramos una conceptualización del Derecho fundamental de la Tutela Judicial Efectiva.

Para entender un poco en caso, se han las siguientes precisiones:

- La parte demandada de un Juicio Ejecutivo Mercantil, promueve un Amparo Directo ante el Tribunal Colegiado en materia Administrativa y Civil del Octavo Distrito, ya que se agravia de que el Juez Menor no considero sus excepciones, entre ellas, la del error en la vía, la falta de elementos necesarios que debe de contener un pagaré, aunado a que la sentencia violaba el principio del debido proceso, exhaustividad y congruencia de la misma ya que se le condenó a pagar la suerte principal y los intereses moratorios sin que se tomaran en cuenta todas las pruebas que el ofreció. Y por último se siente agraviado de que no exista una Segunda Instancia en materia ordinaria, por lo que, pide la desaplicación de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, por ser estos contrario a lo establecido en el artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y octavo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- El Tribunal Colegiado en primer orden tomó el último de los conceptos de violación, sobre los que sostuvo que el derecho de los particulares al uso de recursos, como medio de corregir las diferencias de las resoluciones de los juzgados originarios, no es un derecho absoluto, sino que está sujeto a parámetros de racionalidad. Aunado a ello, precisó que en la Constitución General no hay un principio procesal que contemple la obligación de incluir en las normas procesales una segunda instancia ante un tribunal de alzada, sino considera que la Constitución recoge los principios de justicia pronta,

completa e imparcial. Asimismo, considero que era racional contar con un límite a las instancias tratándose de cuestiones de cuantía e importancia, ya que así se aceleraría el proceso en aras de una sentencia pronta y completa.

- En el recurso de revisión promovido por el quejoso, en términos generales expone como agravios la inexacta aplicación de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio porque violenta su garantía a la tutela judicial efectiva contemplada en los artículos 1, 14, 16, 17 y 104 de nuestra carta magna, así como también se violenta su derecho al debido proceso consagrado en el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Agregando, además, que el amparo no debe de considerarse como una instancia del juicio, ya que el mismo tiene características diferente pues no permite la confrontación de la apelación respecto de una sentencia que a su juicio es ilegal, sigue diciendo que el amparo se ocupa de conflictos que se ocasiona a un particular por una norma, acto u omisión dictada por una autoridad que violenta derechos humanos, y no se ocupa de revisar la legalidad de una resolución dictada en primera instancia. En un último punto que expresa como agravio, menciona que en la resolución combatida no se aplicó a si favor diversas jurisprudencias convencionales tendientes a la interpretación una interpretación pro-persona.
- A partir de ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve bajo las premisas que a continuación se sintetizan.
- Justifica que el recurso de revisión es procedente, porque por que la resolución recurrida versa sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general y se establece una interpretación directa a un precepto de la Constitución y de un Tratado Internacional. Aunado a ello estima que el problema de constitucionalidad entrañe a la fijación de un criterio de importancia y transcendencia.
- El problema por discernir consistió en determinar si es constitucionalmente válida la limitación establecida en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, en el sentido de que dar la posibilidad a las partes de acceder a un recurso para que en alzada se revise la legalidad de una determinación

en aquellos juicios mercantiles menor a los quinientos mil pesos, o, por lo contrario, los referidos artículos violan el derecho a impugnar un fallo ante determinado órgano jurisdiccional de alzada.

- La Primera Sala analizó si los juicios mercantiles de única instancia por razón de su cuantía violenta el último párrafo de la fracción II del artículo 104 constitucional que dispone “*Las sentencias de primera Instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado*”. La sala consideró infundados los agravios aplicando para el caso una Jurisprudencia del Pleno de la Corte que ya se había pronunciado en unos asuntos similares. Las consideraciones que se dieron es que las normas procesales que establecen la improcedencia de la apelación por razón de cuantía, constituye una disposición excepcional, que responde a la mayor urgencia de obtener una decisión definitiva y evitar costo que impliquen juicios prolongados y complejos, concluyendo que la finalidad perseguida por la norma es dar celeridad en los juicio mercantiles y la eficiencia y eficacia de la función pública de administración de justicia, por lo que estimó que la resolución recurrida es constitucionalmente legítima.

#### Opinión:

Primero se resalta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya analizado de una manera profunda (aunque no se comparta del todo) un recurso de revisión cuyo origen sea un juzgado menor, el haberle dado el grado de asunto relevante pone de manifiesto el compromiso de impartir justicia.

Sin embargo, no se comparte la justificación de la ejecutoria dado que no fue respetó el último párrafo de la fracción II del artículo 104 constitucional, que con toda precisión otorga un derecho a favor de los justiciables a una apelación por un superior de quien dictó la resolución de la que se duele que revise la legalidad de

esta. El precepto constitucional en ningún punto señala que habrá casos excepcionales para ello.

Si bien, la Sala dejó entre ver que hay varios principios constitucionales y convencionales en juego, como lo son, la prontitud, la economía procesal, el debido proceso, optó por qué prevalecieran los primeros, sin considerar que la cuantía determinada por los artículos del Código de Comercio para efecto no exclusión de la apelación, puede ser de la mayor importancia para una persona, quinientos mil pesos, puede en algunos casos tener el costo de una vivienda o bien el costo de un negocio.

Es por ello, que se considera que la Primera Sala pudo haber ponderado los derechos que estaban en juego y no solo limitarse a las líneas argumentativas del Pleno.

### **3.- Análisis de tesis emanada del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Distrito del Estado del Nuevo León.**

*“Registro digital: 2022503, Aislada, Materias(s): Administrativa, Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 81, Diciembre de 2020, Tesis: IV.2o.A.149 A (10a.)”*

**“COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AL TRATARSE DE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA A UN SUJETO OBLIGADO EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL”.**

*“Conforme al artículo 17, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado es competente para conocer de los juicios promovidos contra actos que*

*causen un agravio en materia fiscal, emitidos por las autoridades administrativas, fiscales o entidades de la administración pública paraestatal o de los Municipios del Estado y, en términos del numeral 1o. de dicho ordenamiento, el citado tribunal tiene competencia para conocer y resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y el Estado, los Municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal cuando estas últimas realicen funciones administrativas de autoridad. Ahora bien, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, de observancia general en toda la República, los organismos garantes –como la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado– son aquellos con autonomía constitucional, especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales, en términos de los artículos 6o., 116, fracción VIII, y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Federal –este último en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016–. Respecto de tales organismos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 77/2016, determinó que las resoluciones de los organismos constitucionales autónomos de las entidades federativas, son impugnables mediante el recurso de inconformidad ante el organismo garante federal y el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, excluyendo <<la posibilidad de promover en su contra el juicio de nulidad ante el tribunal contencioso administrativo del Estado de que se trate>>. En ese orden, la resolución de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, que impone una multa a un sujeto obligado en materia de acceso a la información, no es impugnable mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al no encuadrar tal acto en los supuestos establecidos en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, y dado que tal organismo garante del Estado, no se encuentra previsto dentro de las autoridades respecto de las cuales tal órgano jurisdiccional tiene competencia, establecidas en el citado numeral 1o. de dicho ordenamiento”.*

Esta tesis es de especial relevancia para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, ya que el criterio que en ella se contiene es el argumento que venía sosteniendo este Tribunal como consecuencia de los Juicios Contenciosos Administrativos, que se presentaban pretendiendo la anulación de las determinaciones tomadas por la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.

El Tribunal de Justicia Administrativo de Nuevo León, apoyado en la Jurisprudencia número 2008487, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro dice:

***“TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN RELATIVA EN EL PROCEDIMIENTO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIO AL AMPARO.”***

Desechaba la demanda por ser una causal notoria y manifiesta de falta de competencia, ya que, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y la Ley de Justicia Administrativa, con toda exactitud preceptúa que es competencia del Tribunal conocer las controversias entre los particulares y la Administración Pública Estatal, Paraestatal, Municipal y Paramunicipal, quedando fuera de dichos preceptos que pudiera conocer de asuntos provenientes de un Órgano Constitucionalmente Autónomo.

Esta tesis reivindica el criterio con el que venía resolviendo el TJANL, el cual tuvo que ser modificado, ante los constantes otorgamientos del Amparo que se sustentaban en una tesis emanada del mismo Segundo Tribunal Colegiado cuyo rubro es el siguiente.

***“TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SÓLO ES COMPETENTE PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, CENTRAL O PARAESTATAL, Y LOS PARTICULARES, PERO NO LOS CONFLICTOS SURGIDOS ENTRE ÉSTOS Y LOS PODERES LEGISLATIVO O JUDICIAL”.***

El argumento contenido en esta última tesis consistía en que al no tener previsto un medio de impugnación, la competencia para someter la controversia de

un particular y ese Órgano autónomo debería ser el Tribunal de Justicia Administrativa Local, pues la nulidad de los actos tenía similitud a los de cualquier acto de autoridad provenientes de las instancias de las Administraciones Públicas Estatales o Municipales.

#### Opinión:

Se considera acertada esta nueva reflexión que hace el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, pues es puntual en señalar que un Órgano Jurisdiccional no puede tener una competencia que expresamente no se le haya otorgado en un ordenamiento legal.

Es importante señalar, que los Órganos Jurisdiccionales cuyas resoluciones son sometidas al escrutinio de los juzgadores federales al resolver los amparos, en muchas ocasiones son contradictorios entre sí y ponen en una posición difícil a dichos órganos pues los criterios cambian de manera constante, rompiendo así con los principios de certeza y seguridad jurídica que deben imperar en todos los procedimientos.

## **2.- La Norma Procesal.**

### **2.1.- Concepto.**

Por regla general, aunque hay excepciones, el fin de todo proceso sometido a un órgano jurisdiccional es la obtención de una resolución que ponga fin a una controversia entre dos o más partes y que dicha decisión tenga la fuerza para ser ejecutada.

Pero en todo proceso jurisdiccional, el órgano encargado de la impartición de justicia está sometido a una serie de pasos, reglas, principios consagrados en los diversos cuerpos normativos, para resolver en el fondo aplicando el derecho objetivo tutelado a favor de una de las partes.

Carnelutti, habla de que hay dos tipos de normas jurídicas, unas las que resuelven directamente el conflicto, ya sea reconociendo un derecho e imponiendo una obligación y las otras son las que regulan los medios para dictar la solución e imponerla, las primeras las llama materiales o substanciales y las segunda instrumentales o formales.

Son precisamente las segundas donde se encuentran las normas procesales, porque las mismas tienden asegurar que en la consecución de una resolución se dé a través de un proceso previamente determinado, al cual debe sujetarse el juzgador en donde se garantice la igualdad entre las partes contendientes. Cabe mencionar que no necesariamente las normas procesales se encuentran en los códigos o leyes adjetivos, éstas pueden estar contenidas en distintos ordenamientos legales, inclusive desde el ordenamiento de mayor jerarquía como en el caso de México desde su Constitución Política. La norma jurídica tiene su esencia en el rol que juega como dispositivo a seguir en un proceso jurisdiccional y no necesariamente por el ordenamiento legal donde se ubica. *“La naturaleza procesal de una disposición o regla de derecho se desprende de la función que está llamada a cumplir, no del cuerpo legal en que se encuentre. El lugar propio de estas reglas o disposiciones es, sin duda, el cuerpo legal procesal: pero la realidad nos muestra disposiciones o reglas rigurosamente procesales contenidas en cuerpos de derecho sustantivo o materiales”*. (De Pina & Castillo Larrañaga, 2007)

Alsina señala que la norma procesal *“establece una regla para la actuación del juez, de las partes y aun de los terceros en el proceso, determinando su posición*



*y rigiendo sus relaciones recíprocas. La norma contiene una orden, porque los que intervienen en el proceso sólo pueden apartarse de la regla en la medida que ella misma lo permita. La eficacia de la norma asegurada por medidas de diversas clases: en algunos casos, por la imposición de una carga, como ser la interposición de la demanda, su contestación, aportación de pruebas; en otros, por una sanción jurídica, como ser la nulidad de los actos procesales; a veces, con una pena pecuniaria, como ser una multa etc.” (Alsina, 1990)*

El maestro Becerra Bautista para definir o explicar el concepto de norma procesal, empieza por preguntar ¿Cuándo una norma jurídica debe considerarse como procesal? Y el mismo se responde de la siguiente manera *“Como criterio distintivo podemos adoptar el que deriva de la finalidad del proceso y de los órganos estatales jerárquicamente organizados que en el intervienen. Por lo tanto, son normas procesales: I.- Las que crean el órgano jurisdiccional mismo y atribuyen competencias; II.- Las que establecen la forma en que debe desarrollarse el proceso; y III.- Las que fijan las obligaciones, derechos y cargas de las personas o entidades que, por cualquier motivo, intervienen en el proceso.”* (Bautista, 1985)

Al respecto los maestros De Pina Vara y Castillo Larrañaga si bien no dan un concepto en forma de definición de norma procesal en su obra, si explican la función de esta de donde podemos deducir el concepto de ella. *“Un estudio de conjunto de la legislación procesal de cualquier Estado nos permite distinguir en ellas las leyes procesales formales (procedimentales o de procedimiento), leyes procesales materiales (que regulan la capacidad de las partes, los requisitos de los actos procesales, la eficacia de las resoluciones judiciales, etc.), y las leyes procesales orgánicas (que atienden a la Constitución de los órganos de jurisdicción, y que no pueden ser consideradas como meramente administrativas).”* (De Pina & Castillo Larrañaga, 2007) Se entiende que las normas procesales son las que establecen las reglas en que deba desarrollarse el procedimiento, las relativas a las cargas de

las partes y las que organizan y atribuyen competencia a los órganos jurisdiccionales.

Como se ha visto el concepto de norma procesal obedece básicamente a tres características que deben contener: a) La competencia de órgano jurisdiccional para conocer de determinados conflictos, cabe precisar que en la actualidad se busca que los órganos jurisdiccionales sean especializados en la materia que es puesta a su consideración, por encontramos juzgados especializado en familiar, civil, justicia restaurativa, administrativa, penal, cabe señalar que muchas veces por faltas de recursos o bien por escasez de población en distintos lugares no es costeable tener esa diversificación b) Las reglas o formas a las que está sometido el órgano jurisdiccional para el desarrollo del proceso; c) Las cargas y obligaciones de las partes o de cualquier otra persona o ente que interviene en el proceso.

Toda esta conceptualización se ha visto desde un punto de vista teórico y de alguna manera se puede decir que las referencias son de tratadistas clásicos mucho de ellos fallecidos antes de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, la cual como ya se dijo en la introducción de esta investigación es la que ha roto el paradigma de rigidez de la legalidad en la manera de impartir justicia en México. A juicio de quien escribe, lo anterior rompe con la teoría tradicional del proceso donde la forma jugaba un papel determinante en cada proceso en particular, pues era difícil que el impartidor de justicia pudiera dejar de observar lo que la marcaba la norma procesal. Precisamente el objeto de la investigación trata de señalar hasta donde le es permitido al juzgador apartarse de la norma procesal o interpretarla de manera diferente para la que fue dictada.

Como una primera aproximación podemos decir que a partir de la referida reforma constitucional del 2011 hay un cambio en la aplicación irrestricta en el

sistema de justicia, puesto que la norma procesal como cualquier otra puede ser interpretada o en su caso desaplicado por cualquier órgano jurisdiccional, por lo tanto la forma como característica de las normas procesales pudiera pensarse que pierde la fuerza con la que se venía sosteniendo los proceso y de alguna manera se puede prescindir de ella, sin embargo esto no es así, la misma Constitución Política en su artículo 17 estableció que se privilegiaría el fondo que las formas, pero dejó en claro que sólo cuando las mismas no dejaran a una de la contraparte en una posición desfavorable. Con esto se resalta la esencia de las normas procesales que es dar igual oportunidad a las partes para ser oídas y vencidas en juicio ante un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver del caso.

## **2.2.- La Norma Procesal y la Teoría General del Proceso.**

De alguna manera podemos decir que le corresponde a la teoría general del proceso, el estudio de los principios en los que se desarrolla en las diferentes disciplinas el proceso jurisdiccional, los órganos que la imparten y la competencia para impartirlas, las reglas a las que están sometido en la substanciación, así como las reglas que deben tomar en cuenta al momento de tomar la decisión.

El maestro Favela Ovalle señala *“que la teoría general del proceso se ocupa del estudio de todo lo que es común en las diversas disciplinas procesales, o sea, todo los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las diferentes disciplinas procesales”*. (Ovalle Fabela, 2011)

El gran procesalista Cipriano Gómez Lara, en una ponencia, sostuvo la necesidad de establecer una posición en torno a una unidad procesal que constituya el eje de los cursos de Teoría General del Proceso, él estima que hay cosas en común y al derecho procesal hay que verlo desde tres dimensiones; científica,

puesto que ordena y sistematiza los conceptos; otra dimensión es la legal, o sea la que parte de las normas vigentes; y una tercera, que es la pragmática, que refiere la conducta propia que se da en el desarrollo de los procesos. Al final de todo, para el maestro Gómez Lara hay cosas en común en las diferentes disciplinas y ese debe ser el motivo de la Teoría General del Proceso y lo dice así “ *Que se postule, que se propague, que se difunda que todo los procedimientos jurisdiccionales imaginables, el gran abanico de procesos que puedan existir, tiene un tronco común, tiene una base unitaria, o sea, que puede haber procesos penales, puede haber procesos constitucionales; pues bien, todos estos procesos que pueden ser muchísimos, son un abanico enorme de procesos jurisdiccionales que tienen algo de común y unitario. Esa es la idea unitaria de lo procesal.*” (Gómez Lara C. , Teoría General del Proceso, 2004)

Varios tratadistas citan por lo regular al maestro Italiano Carnelutti, quien para explicar esto habla de la idea del tronco común, en la que postuló que todos los procesos se asemejaban a un tronco de un árbol y que al llegar a cierta altura sus ramas empezaban a tener sus propias particularidades, pero nunca para seguir viviendo se podía separar del tronco en común.

La mayoría de los tratadistas señalan que hay tres temas comunes en todas las disciplinas procesales a) La acción, b) Jurisdicción y c) Proceso, pero desde el punto de vista de quien escribe, estos tres puntos de convergencia están regidas por normas jurídicas de carácter procesal, por consiguiente el punto inicial de esta investigación que tiene como objeto de estudio el alcance de la interpretación de las normas procesales en el juicio contencioso administrativo de Nuevo León, es por comprender el concepto de la norma procesal, pues como ya se ha dicho, ésta comprende temas comunes a todas las disciplinas procesales llevadas por un órgano jurisdiccional, en donde la justicia administrativa no está aislada, sino por el

contrario, tiene punto convergentes y otros propios de su disciplina como se abordará en su momento.

## **CAPITULO IV.- LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA.**

### **1.- La Reforma Constitucional de 10 de junio del 2011 (fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación) y su impacto en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.**

Dice el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan N. Silva:

*“Varios meses han transcurrido desde que el 10 de junio de 2011 se publicara en el Diario oficial de la federación la más trascendental modificación a la Constitución Política mexicana en materia de derechos Humanos. Si alguna comparación pudiera esbozarse, esta reforma es posible equipararla al momento en que 1917 el texto fundacional de nuestro ordenamiento jurídico incorporó por vez primera los derechos sociales. Hoy, como en aquella época, la sociedad mexicana y sus autoridades enfrentamos el reto de hacer que en la vida diaria de las personas se reflejen los cambios constituidos como promesas en aquel papel”. (Silva Meza)*

Se coincide con el ex presidente de nuestro más alto Tribunal de Justicia de la Nación, en el sentido de que la reforma de junio del 2011 es de tal importancia, como lo es el mismo texto fundacional, porque lo que en sí se pretende es que toda persona pueda ejercer al máximo los derechos humanos inherentes a su condición de persona y que, a la vez, éstos le sean respetados de manera más efectiva por todas las autoridades del Estado. El ideal del primer artículo constitucional es el de reivindicar a la persona humana como el fin último de toda Constitución, reconociendo en ella que toda persona es titular de los derechos humanos y que merece que los mismos le sean respetados por todas las autoridades en el ámbito de su competencia.

Sigo citando al ministro Silva Meza:

*“... lo que implica esta transformación en el modo de concebir los derechos, desde un punto de vista extrajurídico, es que las personas no le deben pleitesía, reverencia, acatamiento, sumisión, sometimiento u obediencia alguna al Estado porque le concede graciosamente sus derechos”.* (Silva Meza)

Bajo esta idea y a fin de lograr una optimización de los derechos humanos de la persona, el segundo párrafo del artículo primero constitucional dota a todas las autoridades jurisdiccionales incluyendo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, de las siguientes herramientas para juzgar con mayor plenitud los asuntos que son puestos a su consideración: A) INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN; B) INTERPRETACIÓN CONFORME A LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES; C) INTERPRETACIÓN PRO PERSONA; y D) DESAPLICACIÓN DE LA NORMA A TRAVÉS DE CONTROL DIFUSO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD O INCONVENCIONALIDAD DE LA NORMA”.

En relación con estas herramientas de control de constitucionalidad y convencionalidad, también debo decir que son tres parámetros los que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la realización de dicho control, mismo que se hacen consistir en:

**“1.- Interpretación conforme en sentido amplio.** Significa que los jueces y también las demás autoridades del Estado Mexicano deben interpretar el orden jurídico conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, en los cuales el Estado Mexicano sea parte, en atención al principio pro-persona”.

**“2.- Interpretación conforme en sentido estricto.** Esto es, cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos”.

**“3.- Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles.** Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte”.

Estas nuevas herramientas tienen como antecedente en el Estado Mexicano el caso Radilla Pacheco, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejecutoria dictada dentro del expediente 912/2010, determinó que existen tres parámetros para la interpretación de las normas y desaplicación de estas. Criterio que sentó la siguiente Tesis, que a continuación se cita:

*Época: Décima Época Registro: 2002268 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: IV.3o.A.10 K (10a.) Página: 1303*

**CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. PARÁMETROS PARA EJERCERLO EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL CONFORME A LA EJECUTORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE VARIOS 912/2010.**

*En estricto acatamiento a la reforma constitucional en materia de derechos humanos y su protección, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus*



competencias, en caso de ser necesario, deben ejercer el control de convencionalidad para verificar si un acto de autoridad vulnera los derechos humanos. Los parámetros para ese ejercicio, en el ámbito jurisdiccional, están contenidos en la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictada en el expediente varios 912/2010, que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313, con motivo del cumplimiento de la sentencia pronunciada en el caso *Radilla Pacheco* contra los Estados Unidos Mexicanos, del índice de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los términos siguientes: 1. La firmeza vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deriva, entre otros aspectos, de los artículos 62, numeral 3, 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Las resoluciones de dicha Corte (incluidos todos los criterios en ellas contenidos) son obligatorias cuando el Estado Mexicano haya sido parte del litigio. 3. Las demás resoluciones tienen el carácter orientador de todas las decisiones de los Jueces mexicanos, siempre en aquello que sea más favorecedor a la persona. 4. Éstos deben observar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como la jurisprudencia nacional y acudir a la internacional para evaluar si existe alguna más favorable que procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. 5. Todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por México, sino también por los previstos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro-persona. 6. En el caso de la función jurisdiccional, al ejercer el control de convencionalidad, los Jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, pero están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores, dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia. 7. El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. 8. El ejercicio de dicho control presupone realizar tres pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto. Implica que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas debe, a partir de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferirse aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las

*alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces, al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.*

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.**

*Amparo en revisión 498/2011. Juan Antonio Rodríguez Sepúlveda. 27 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretario: José Antonio Bermúdez Manrique.*

Si bien, las disposiciones de los tratados y las convenciones internacionales ratificadas en los términos del artículo 133 de nuestra Constitución Federal han sido parte de nuestro ordenamiento jurídico, también es cierto que las mismas tenían poca eficacia, pues, su aplicación era escasa, así como también era poco el reclamo de la aplicación de ellas ante algún órgano jurisdiccional.

Aquí la importancia de la reforma, la cual, ahora nos obliga a las autoridades jurisdiccionales a interpretar las normas en los términos en que se quisieron plasmar en dichos instrumentos internacionales y en, su caso, la inaplicación de las normas nacionales cuando éstas contravengan a los tratados o convenciones internacionales en relación con los derechos humanos, propiciándose, en consecuencia, el que dichos instrumentos internacionales sean invocados y aplicados con mayor frecuencia.

A fin de robustecer lo anterior, me parece oportuno reproducir la siguiente jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte el 25 de abril 2014, ya que la misma recoge el espíritu del constituyente legislativo de sobreponer a los derechos humanos, en el quehacer de toda actividad encomendada al Estado.

***“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL”.***

“El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano”.

“El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 20/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce”. “Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013”.

Es importante señalar que estas reformas similares se dieron con anterioridad en el sistema jurídico español, y han sido recogidas con beneplácito, lo que indica que existe una tendencia al menos en los sistemas iberoamericanos a la

constitucionalización de los derechos humanos en ámbito de los sistemas jurisdiccionales, así lo dicen Ruiz-Rico Ruiz y Carazo Liébana, El artículo 24 de la Constitución Española (CE) ha incorporado un catálogo de derechos constitucionales de naturaleza jurisdiccional o procesal, cuya aplicación casuística por el Tribunal Constitucional ha producido una profunda y progresiva modificación de las normas legislativas y la interpretación judicial sobre los diferentes procedimientos jurisdiccionales diseñados en el ordenamiento jurídico español. Esa eficacia transformadora se explica en buena medida por la calidad normativa con que han sido enunciados por la norma fundamental, en cuanto de derecho subjetivos que están dotados de la doble condición de exigibilidad e inmediatez con que se imponen inevitablemente en la práctica procesal de cualquier órgano judicial.

#### ***Artículo 24 de la Constitución Española***

***“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”***

Así también se ha referido me permito citar al jurista catalán Juan Picó i Junoy al hablar de la tutela judicial efectiva en España “El carácter normativo de la Constitución, unánimemente admitido en nuestros días, comporta que los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, requiriendo un adecuado sistema de garantías constitucionales dentro de las cuales hallan la exigencia dirigida a los jueces de aplicar, de modo directo e inmediato, las normas constitucionales”. (Picó i Junoy, 2011)

El Tribunal de Justicia Administrativa ha resuelto acorde a este marco constitucional como en los siguientes casos, que cabe aclarar no son cuestiones de interpretación de la norma procesal, pero si bajo las directrices de buscar en la decisión el mayor beneficio de los derechos humanos que pudiera colacionar.

## **2.- Ámbito nacional.**

### **2.1.- Tribunales de lo Contencioso Administrativo.**

#### **2.1.1.- Fundamento Constitucional Tribunales de Justicia Administrativa.**

Mediante reforma constitucional pública el 17 de marzo de 1987 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció en el artículo 116 en la fracción IV la posibilidad de que los Estados de la República pudieran instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

***“Artículo 116.- El Poder Público de los Estados se dividirá para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.***

***Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:***

***.....***

***IV.- Las Constituciones y las leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.”***

En la actualidad y con motivo de la reforma Constitucional del año 2015 que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, es una obligación constitucional el que las entidades federativas tengan un Tribunal de Justicia Administrativa con competencia para dirimir las controversias entre particulares y las administraciones públicas estatales y municipales, así como la de ser el órgano sancionador en

materia administrativa de los actos que la Ley catalogue como graves, inclusive sancionar a los particulares que ocasionen daño a la hacienda público o al patrimonio de los Estados, que estén vinculados a las referidas faltas graves.

Un cambio trascendental para los Tribunales de Justicia Administrativa, ya que aparte de seguir teniendo la encomienda de anular los actos administrativos emitidos por las administraciones públicas estatales, también se precisa que la competencia abarca sobre actos de la administración pública municipal, aunado a que en materia de responsabilidad administrativa tratándose de faltas graves se convierte en el órgano sancionador, función que venían desempeñado los distintos órganos de control que estaban bajo el esquema organizacional de las mismas administraciones.

***“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.***

***Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:***

***I...***

***...V.- Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.***

***Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de***

***fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos...”***

**2.1.2.- La Función Jurisdiccional.**

El ámbito jurisdiccional que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los distintos Tribunales de Justicia Administrativa está contemplado en el precepto citado en el punto anterior, sin embargo, cabe señalar que a juicio de quien escribe, ese ámbito jurisdiccional puede ser ampliado por las disposiciones que estén contenidas en las distintas Constituciones Locales y en las distintas leyes locales mientras no contradiga al orden constitucional federal.

En opinión de quien suscribe pudiéramos dividir de la siguiente forma la función jurisdiccional de los Tribunales de Justicia Administrativa Locales:

- Controversias derivadas de los actos administrativos emitidos por la administración pública estatal y un particular.
- Controversias derivadas de los actos administrativos emitidos por la administración pública municipal y un particular.
- Controversias derivadas de los actos administrativos emitidos por la administración pública ya sea estatal o municipal en contra de ella misma y emplazando a un particular con carácter de tercero (juicio de lesividad).
- La imposición de sanciones por faltas graves cometidas por funcionarios los servidores públicos.
- La imposición de sanciones a los particulares relacionadas con las de las faltas graves derivadas de las encomiendas que tiene con la administración pública.
- El finamiento de pago de los particulares por los daños y perjuicio ocasionados a la hacienda pública o al patrimonio del estado o municipios

con motivo de su responsabilidad en las encomiendas que las administraciones públicas le hayan encomendado.

- Las que les encomiende sus respectivas constituciones y leyes locales.

### **2.1.3.- Situación Actual de las Entidades Federativas respecto a la Justicia Administrativa.**

Como se ha indicado en el punto anterior, la función jurisdiccional de los Tribunales de Justicia Administrativa en los Estados, puede ampliarse de acuerdo a sus propios preceptos normativos de su localidad, así podemos encontrar Tribunales de Justicia Administrativas que sus actos jurisdiccionales van más allá de los emitidos por las administraciones públicas estatales o municipales, a continuación se incluye un tabla comparativa de cada uno de los tribunales de Justicia Administrativa del ámbito local.

ESTADO	MARCO CONSTITUCIONAL	MARCO LEGAL	GRADO DE AUTONOMIA
Aguascalientes	Artículo 27.- fracción XI. Magistrado propuesto por Ejecutivo, previa selección y autorización del Consejo de la Judicatura; Artículo 52.- Dependencia del Poder Judicial.	Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes. Artículo 2.- Competencia limitada contra actos de las autoridades del Ejecutivo del Estado, Municipio y organismos Descentralizados	BASE CONSTITUCIÓN FEDERAL.



Baja California	Artículos 27.- Fracción XIII y 55.- Autonomía plena, personalidad y patrimonio propio. Nombramiento de Magistrados a través de convocatoria expedida por el Congreso, su ratificación a cargo del Congreso. * Dato relevante, el presupuesto no puede ser disminuido respecto del año anterior	Ley de Justicia Administrativa del Estado de Baja California. Artículo 1. Competencia limitada para dirimir controversias administrativas y fiscales entre un particular y la administración pública estatal, municipal, paraestatal y paramunicipal	BASE CONSTITUCIÓN FEDERAL. AMPLÍA PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO (PROPONE PRESUPUESTO Y LO EJERCE).
Baja California Sur	Artículo 64.- fracciones XLIV y XLV Controversias entre particulares y administraciones pública estatal y municipal. Gobernador propone terna al Congreso para el cargo de Magistrados.	Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. Competencia limitada a las controversias de índole administrativo y fiscales derivadas de las resoluciones definitivas emitidas por la Administración Pública del Estado de sus Municipios y de sus organismos descentralizados a particulares. El Tribunal maneja el presupuesto autorizado por el Congreso del Estado	BASE CONSTITUCIÓN FEDERAL. SE AMPLÍA PARA EJERCER SU PRESUPUESTO.

Campeche	Artículo 54 fracción XXXIX y artículo 101 ter. Controversias entre administración pública estatal y municipal con particulares. Designación por gobernador y ratificación por las dos terceras partes del Congreso o por la permanente en caso de receso.	Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. Artículo 3 establece que el presupuesto lo ejercerá directamente.	BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PARA EJERCER SU PROPIO PRESUPUESTO.
Coahuila de Zaragoza	Artículos 67 fracciones XXX, LI y 168-A dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Magistrados designados por gobernador y ratificados por las dos terceras partes de los presentes en el Pleno, con competencia para dirimir controversias entre la administración pública estatal y municipal con particulares.	Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza y Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza	BASE CONSTITUCIONAL. AMPLÍA PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO (PROPONE Y EJERCE SU PRESUPUESTO).
Colima	Artículos 22, 34 fracción XLV, 77 es un órgano con personalidad y patrimonio propio, presupuestaria, técnica y de gestión, plena para dictar sus fallos; competencia para dirimir controversias entre particulares y la administración pública estatal y municipal. Gobernador propone con la aprobación de las dos terceras partes de los presentes del Congreso.	Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima. Artículo 2, autonomía presupuestaria, técnica, de gestión y plena para dictar sus fallos.	BASE CONSTITUCIONAL. AMPLÍA PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO (PROPONE Y EJERCE SU PRESUPUESTO).

Chiapas	Artículos 105 y 106 Personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia en el fallo de sus decisiones, Magistrados propuestos por el Gobernador con la aprobación de las dos terceras partes del Congreso o por la permanente.	Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas artículos 1 y 3, establece competencia para dirimir controversias de actos de la administración pública estatal y municipal.	BASE CONSTITUCIONAL. AMPLÍA PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO (PROPONE Y EJERCE SU PRESUPUESTO).
Chihuahua	Artículo 39 bis y 64 Otorgan al Tribunal independencia para dictar sus fallos y establece competencia para conocer de las controversias suscitadas de actos de la administración pública estatal y municipal y los particulares. Los Magistrados son aprobados por las dos terceras partes del Congreso (presentes) a propuesta de la Junta de Coordinación Política, previa reglas y autorizaciones de los tres poderes del Estado.	Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Ley de Justicia Administrativa. Además de la autonomía reconocida por su Constitución Política da autonomía para el ejercicio del Presupuesto. La competencia es la misma que establece su Constitución.	BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PARA EJERCER SU PRESUPUESTO.

Durango	<p>Artículo 114 Establece competencia para que el Tribunal conozca de controversias suscitadas entre la administración pública estatal y municipal y los particulares. Autonomía para dictar sus fallos, establecer su organización y funcionamiento. Gobernador designa Congreso ratifica con las dos terceras partes del Congreso.</p>	<p>Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango y Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango, mismas competencias de la establecida en su Constitución y aunado a la autonomía que le da ésta, la Ley le otorga la autonomía para ejercer el presupuesto</p>	<p>BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PARA EJERCER SU PRESUPUESTO.</p>
Guanajuato	<p>Artículo 63 fracción XXI y 81, dirimir controversia entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, autonomía plena para dictar sus fallos. El Gobernador propone y las dos terceras partes del Congreso aprueba los nombramientos de Magistrados.</p>	<p>Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Artículos, 2,3,4, competencia en materia fiscal y administrativa derivada de actos de la administración pública estatal y municipal y los particulares. Autonomía para ejercer el presupuesto autorizado por el Congreso.</p>	<p>BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PARA EJERCER SU PRESUPUESTO.</p>

Guerrero	Artículos 61, fracción IX, 105, 135, 136, 137 y 138. Personalidad y patrimonio propio, autonomía, funcional, organizacional, presupuestaria, ejercicio del patrimonio. Gobernador nombra y Congreso ratifica por las dos terceras partes de este.	Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Artículo 4 competencia para conocer de las controversias entre particulares y la administración pública estatal, municipal, órganos autónomos, órganos con autonomía técnica.	BASE CONSTITUCIONAL. AMPLÍA PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO (PROPONE Y EJERCE SU PRESUPUESTO).
Hidalgo	Artículos 56 fracción VII, VIII artículo 93, es parte del Poder Judicial, Magistrados propuestos por el Gobernador y aprobados por las dos terceras partes del Congreso.	Ley Orgánica de del Poder Judicial del Estado de Hidalgo artículos 2 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Controversias entre particulares y autoridades de la administración pública estatal, municipal y descentralizada relativas en materia fiscal y administrativa. Con relación al cumplimiento e interpretación de contratos también abarca los que deriven de órganos autónomos.	BASE CONSTITUCIONAL.

Jalisco	Artículos 35 fracción IX, 65,66,67, Órgano público autónomo, dirime controversias entre particulares y la administración pública estatal municipal y de entidades descentralizadas, los Magistrados son nombrados por las dos terceras partes del Congreso previa convocatoria emitida por ellos.	Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Reconoce personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía jurisdiccional, técnica, de gestión, presupuestal y administrativa. Competencia para conocer de las controversias entre particulares con la administración pública estatal, municipal y descentralizada, en materia laboral resuelve las controversias entre los servidores públicos y el tribunal y dirime controversias entre los entes públicos de la administración pública.	BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO (PROPONE Y EJERCE SU PRESUPUESTO)
Michoacán de Ocampo	ARTÍCULO 44 FRACCIÓN XXIII Y 95 Órgano Autónomo, independiente en la toma de sus resoluciones y con plena jurisdicción, competencia contra actos de naturaleza fiscal y administrativa, del Poder Ejecutivo, de la Auditoría Superior, Ayuntamientos, entidades descentralizadas o desconcentradas del estado o municipios y órganos autónomos. El Congreso elegía a los Magistrados previa convocatoria del mismo Congreso.	Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 1, 143, 145, 146, 148, 154. Competencia en el mismo sentido que la que señala su Constitución, además de conocer de actos administrativos del Poder Judicial, Legislativo y órganos autónomos.	BASE CONSTITUCIONAL.

Morelos	Artículos 40 y 109 Bis. Autonomía Jurisdiccional para la resolución de sus determinaciones, competencia para dirimir controversias entre particulares y la administración pública estatal y municipal, organismos auxiliares, órganos autónomos, determinación de conflicto de intereses, resoluciones de incompatibilidad del desempeño de dos o más cargos. El Congreso designa Magistrado mediante convocatoria pública emitida por dicho poder.	Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, artículo 1 y 2 autonomía del ejercicio del presupuesto.	BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PARA EJERCER SU PRESUPUESTO.
Nayarit	Artículos 47, 103, 104 y 105, autonomía presupuestaria, y jurisdiccional. Competencia para dirimir controversias entre particulares y la administración pública estatal y municipal. El ejecutivo interviene en el nombramiento de Magistrado al presentar terna al Congreso.	Reglamento del Tribunal de Justicia Administrativa, otorga independencia para el ejercicio del Presupuesto.	BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO (PROPONE Y EJERCE SU PRESUPUESTO)
Nuevo León	Artículo 63 fracción XII Autonomía Funcional, presupuestaria, con plena autonomía para dictar sus determinaciones. Competencia para conocer controversias entre los particulares y la administración pública estatal, paraestatal, municipal y paramunicipal.	Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León artículos artículo 2, autonomía presupuestal, funcional y con plena jurisdicción para dictar sus fallos. Competencia la misma que establece su propia Constitución.	BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PARA PROPONER SU PRESUPUESTO.

Oaxaca	Artículo 59 fracción XX y XXVIII, artículo 114. Autonomía organizacional, funcional, presupuestal y jurisdiccional para dictar sus fallos. Gobernador designa Magistrados Congreso ratifica. Competencia para dirimir controversias entre particulares y administración pública estatal y municipal, entre los propios municipios, entre municipios y dependencias o entidades de la administración pública estatal.	Artículo 119 y 120 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Autonomía igual a la que otorga su Constitución. Competencia para conocer controversias entre particulares y administración pública estatal y municipal, o entre particulares y otros órganos públicos cuyas leyes le otorguen competencia al Tribunal.	BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PARA PROPONER SU PRESUPUESTO.
Puebla	Artículos 12 fracción X, 57 fracción XIV. Autonomía para dictar sus fallos. Competencia dirimir controversias entre administración pública estatal y municipal. Gobernador designa Magistrados, Congreso los ratifica.	Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Artículo 5. El Tribunal tiene patrimonio propio y lo ejerce conforme al presupuesto asignado. No tiene competencias adicionales a las otorgadas por la propia Constitución.	BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO (PROPONE Y EJERCE SU PRESUPUESTO).



Querétaro	<p>Artículo 34 Se considera órgano autónomo sin embargo expresamente no se le otorga personalidad jurídica y patrimonio propio, se reconoce autonomía para ejercer el presupuesto aprobado por el Congreso y autonomía jurisdiccional para dictar sus fallos. Competencia para dirimir controversias entre particular y la administración pública estatal y municipal. Gobernador propone Magistrados y estos son electos por las dos terceras partes de los presentes en el Congreso.</p>	<p>Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, artículo 2, 3,4 y 5. Autonomía presupuestal, autonomía para ejercer el presupuesto, Autonomía jurisdiccional para dictar sus fallos. Competencia para dirimir controversias entre particulares y administración pública estatal y municipal.</p>	<p>BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PARA PROPONER Y EJERCER SU PRESUPUESTO.</p>
Quintana Roo	<p>Artículo 75 fracción XX, 76, 110. Personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, de gestión, funcional y financiera y organizacional, además con ejercicio autónomo de su presupuesto. Competencia para dirimir controversias entre particulares y administración pública estatal y municipal. Los Magistrados son designados por el Congreso mediante convocatoria realizada por el mismo Congreso.</p>	<p>Código de Justicia Administrativa para el Estado de Quintana Roo, Autonomía y Competencia en los términos de su Constitución.</p>	<p>BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PERSONALIDAD JURÍDICA PATRIMONIO PROPIO (PROPONE Y EJERCE SU PRESUPUESTO).</p>

San Luis Potosí	Artículos 57 fracción XXXIII, 96 y 123, Autonomía Jurisdiccional para dictar sus fallos; competencia derivada de asuntos de la administración pública estatal, municipal y organismos descentralizados de dichos entes promovidos por particulares. El Gobernador propone hace una propuesta de tres personas para cada cargo y el Congreso elige a uno de entre los tres.	Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí y Código Procesal Administrativo del Estado de San Luis Potosí. Mismas prerrogativas de autonomía que de su Constitución y de competencia.	BASE CONSTITUCIONAL.
Sinaloa	Artículos 57 fracción XXXIII, ,96 y 109 Bis. Se reconoce como órgano constitucionalmente autónomo (no se le otorga personalidad jurídica ni patrimonio propio). Competencia para dirimir controversias entre particulares y la administración pública estatal y municipal. Congreso elige por las dos terceras partes de los presentes a terna presentada por el Gobernador.	Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Autonomía para ejercer el presupuesto asignado por el Congreso.	BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PARA EJERCER SU PROPIO PRESUPUESTO.

Sonora	Artículo 64 fracción XVIII y 67 Bis. Autonomía Jurisdiccional, presupuestaria, organizacional, funcional. Competencia para dirimir controversias entre particular y administración pública del estado y municipal. Gobernador hace nombra Magistrados y Congreso por sus dos terceras partes ratifica.	Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora artículo 2, otorga autonomía, presupuestal, autonomía para ejercer su propio presupuesto. Competencia para dirimir controversias entre un particular y la administración pública estatal y municipal.	BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PARA PROPONER Y EJERCER SU PRESUPUESTO.
Tabasco	Artículos 36 fracciones XIX y XXX y 63 Ter. Autonomía para dictar sus fallos. Competencia para conocer de controversias entre particulares y administración pública del Estado y municipios. Los Magistrados son nombrados por el Gobernador y ratificados por el Congreso.	Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Artículo 156 Autonomía para dictar sus fallos y para ejercer su propio presupuesto previamente autorizado por el Congreso. Competencia igual que la Constitución.	BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PARA EJERCER SU PROPIO PRESUPUESTO.

Tamaulipas	<p>Artículos 58 fracciones XXI, XXVI, LVI, plena autonomía para dictar sus fallos. Competencia para dirimir controversias entre particulares y la administración pública del estado y municipios. De acuerdo con el artículo 91 el Ejecutivo debe cuidar que la justicia administrativa se aplique de manera pronta, completa e imparcial por el TJA. Gobernador propone a los Magistrados para que el Congreso los nombre con las dos terceras partes de los presentes.</p>	<p>Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. La ley le otorga el carácter de organismo constitucionalmente autónomo, le reconoce autonomía presupuestaria y autonomía para ejercer su propio presupuesto. Misma competencia que le otorga la Constitución.</p>	<p>BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PARA PROPONER Y EJERCER SU PRESUPUESTO.</p>
Tlaxcala	<p>Artículos 54 fracción XXVII y 84 Bis. 54 fracción XXVII, 84 Bis. Autonomía técnica, jurisdiccional, organizacional y funcional. Competencia para conocer de controversias entre particular y administración pública estatal y municipal. Es parte del Poder Judicial del Estado. Gobernador propone Magistrados y Congreso con las dos terceras partes de la legislatura ratifica</p>	<p>Ley Orgánica del poder Judicial de Tlaxcala artículos 131-134. Le da autonomía presupuestaria y de ejercicio directo del mismo. Misma competencia que la Constitución.</p>	<p>BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PARA PROPONER Y EJERCER SU PROPIO PRESUPUESTO.</p>

Veracruz de Ignacio de la Llave	Artículos 33 fracciones XXXVIII, XLII, &7 fracción VI. Personalidad jurídica y patrimonio propio. Autonomía para dictar sus fallos. Competente para dirimir controversias entre particulares y administración pública del estado y municipios. Gobernador propone Magistrados al Congreso para que estos los nombre.	Competencia ampliada por Ley. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz de la Llave. Personalidad jurídica y patrimonio propio, plena jurisdicción para dictar sus determinaciones. Competencia entre particulares y administración pública estatal y municipal; y entre particulares y órganos autónomos.	BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO (PROPONER Y EJERCE SU PRESUPUESTO).
Yucatán	Artículos 73 y 75 Quater. Organismo público autónomo con jurisdicción plena para dictar sus fallos y con autonomía para presentar su presupuesto. Competencia para dirimir las controversias de carácter fiscal y administrativa entre el particular y la administración pública estatal y municipal. Los Magistrados son designados por el Gobernador y ratificado por las dos terceras partes de los miembros del Congreso.	Artículo 7.- Ejercicio de su presupuesto.	BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO (PROPONER Y EJERCE SU PRESUPUESTO).

Zacatecas	Artículo 112. Personalidad jurídica y patrimonio propio, plena jurisdicción para dictar sus fallos, organizacional y funcional. Competencia para conocer de controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal. El Ejecutivo propone Congreso designa.	Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Artículos 4 y 40. Misma autonomía que establece Constitución y facultad para proponer y ejercer su presupuesto.	BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO (PROPONER Y EJERCE SU PRESUPUESTO).
Ciudad de México	Artículo 40. Autonomía jurisdiccional para dictar sus determinaciones, administrativa y presupuestaria, funcional y organizacional. Competencia para conocer de controversias que se susciten entre particulares y la administración pública de la Ciudad de México y de las alcaldías *de acuerdo con la Ley Orgánica. El Jefe de Gobierno designa Magistrados y Órgano Legislativo ratifica.	Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Artículo 1 establece autonomía administrativa, presupuestaria	BASE CONSTITUCIONAL. SE AMPLÍA PARA PROPONER Y EJERCER SU PROPIO PRESUPUESTO.
Estado de México	Artículo 61, fracción XV, XV bis, Artículo 77 fracción XII y Artículo 87. Autonomía jurisdiccional para dictar sus determinaciones, administrativa, independencia para ejercer su presupuesto. Los magistrados son nombrados por el Ejecutivo con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, o en su caso por la permanente. La competencia se amplía para conocer de actos administrativos de órganos auxiliares con función de autoridad.	Código Administrativo del Estado de México, Ley Orgánica del Estado de México, artículo 4 amplía competencia en los términos de la Constitución Local.	BASE CONSTITUCIONAL, SE AMPLIA PARA EJERCER DE MANERA INDEPENDIENTE EL PRESUPUESTO.

Gracias a la tablada comparativa desarrollada, es posible concluir que en efecto los alcances de los tribunales pueden variar según la entidad federativa que se analice, ante este resultado me es pertinente resaltar la utilidad didáctica para la divulgación comparativa de esta, de tal manera se pretende que el lector de la presente tesis pueda tener un contexto nacional de las atribuciones de los Tribunales de las Entidades analizadas.

Se estima necesario señalar una cuestión que se está debatiendo desde el año de 2019, en que varios presidentes de distintos colegios de abogados de la entidad suscribieron una iniciativa de ley, para reformar la Constitución del Estado, bajo dos vertientes.

La primera, que consistente en que el Congreso del Estado sea quien expida una convocatoria para elegir Magistrados, con ellos, quitar la facultad el ejecutivo la facultad que tiene de proponer candidatos.

La segunda, preceptuar en la propia Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que es un Organismo Constitucionalmente Autónomo.

En ambos casos, la justificación que dan es que el tribunal alcance una plena autonomía, como lo es el ejercicio de los recursos económicos y la contratación.

Desde mi punto de vista, el régimen actual del Tribunal de Justicia Jurídica de Nuevo León, es un órgano que no atenta contra la garantía judicial consagrada en el punto 1 del artículo 8 de la convención Interamericana de derechos humanos,

pues es un órgano que está su independencia está garantizada por lo dispuesto por la fracción V del artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha fracción, no obliga a las legislaturas de las entidades federativas a que sus Tribunales estén instituidos bajo la denominación de órganos autónomo constitucional.

La denominación de órgano constitucional no necesariamente implica su autonomía, lo importante como se explicará en el punto que sigue, es que los Tribunales de Justicia administrativa estén libres de cualquier injerencia al momento de resolver los asuntos de su competencia.

La misma Suprema Corte de Justicia de la nación ha establecido, que en caso de antinomias (que no las hay) entre la Constitución Federal y las Convenciones Internacionales suscritas por México, debe de prevalecer lo establecido en la Constitución.

Soy de la opinión que no hay antinomia, la Convención Interamericana en ningún momento preceptúa que los órganos jurisdiccionales deban estar inmersos en el Poder Judicial, sino, lo que dice es que los órganos jurisdiccionales deben de ser independientes y no pueden estar resolviendo en términos dictados por otros poderes o entes de poder.

El Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Nuevo León, está instituidos por normas apegadas estrictamente con nuestra Carta Magna, pues respeta el principio de libertad e independencia en dictado de sus resoluciones y



otorga elementos adicionales que no rompen con su constitucionalidad, al dotarlo de una autonomía presupuestaria y funcional.

Es cierto, que el tribunal no ejerce sus recursos de manera autónoma, sin embargo, ello no significa que sea incorrecto, por el contrario, facilita muchas veces la labor administrativa de un órgano jurisdiccional, pues sus magistrados están ajenos de rendir cuenta pública y no están sujetos a dichas responsabilidades, esto aminora las posibles represalias que pudieran tener con los diferentes entes facticos de poder.

Como se podrá observar en las tablas que se acompañan, en la gran mayoría de las entidades federativas, los titulares del ejecutivo proponen a sus congresos a las personas que pudieran ocupar los cargos de Magistrados. Esta facultad del ejecutivo, en mi opinión es parte de una verdadera división de poderes y contrapesos. Basta ver lo sucedido en estos últimos años, donde el Congreso convoca para la selección de Magistrados al Tribunal Superior de Justicia en el Estado, donde el reclamo fue generalizado por los organismos ciudadanos y la ciudadanía en general.

La verdadera autonomía radica, en la actitud, compromiso, honestidad de quien imparte justicia, cuestiones plenamente garantizadas por la Constitución. La pura denominación de carácter constitucionalmente autónomo no la verdadera autonomía.

#### **2.1.4.- Principios Procesales Comunes y los Particulares del Proceso Contencioso Administrativo.**

Hay tres principios que la doctrina señala como comunes para todas las disciplinas procesales y que se traducen en los siguientes:

- a) Principio Lógico: Buscar la verdad y evitar el error.
- b) Principio Jurídico: Igualdad de las partes y justicia en las resoluciones.
- c) Principio económico: Tiene dos vertientes, la primera relativa a la economía procesal en sí misma, ya segunda consiste en que la misma no se costosa.

Como se ha mencionado, la teoría General de Proceso tiende a ubicar las cosas que son comunes a cada disciplina procesal, en materia administrativa hay principios muy particularidades que se desprenden de los distintos ordenamientos legales, entre ellos la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, destacando los siguientes:

- a) Estricto Derecho: La controversia debe resolverse de acuerdo con los planteamientos formulados por las partes.

Este principio está inmerso en la fracción II del artículo 87 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, que la letra dice:

***“artículo 87. Las sentencias deberán ser debidamente fundadas y motivadas, congruentes y exhaustivas”.***

***Su redacción contendrá:***

***I.-....***

***II. El análisis de la procedencia del juicio y de los conceptos de agravio consignados en la demanda, para cuyo orden de estudio deberán atenderse preferentemente aquellos que impliquen un mayor beneficio para el demandante.***

***III...”***

En términos generales este principio presupone que la litis está entablada entre los agravios expuesto por el actor y las defensas y excepciones que hicieran las demandadas, sin embargo, la aplicación estricta de éste dispositivo puede traer consecuencias en terceras personas o puede alterar el interés público, pongamos

como ejemplo asuntos de desarrollo urbano, donde la pretensión del actor es obtener una licencia de uso de suelo, la repercusión de la nulidad y el efecto de la misma sin duda puede tener consecuencias contra terceros y ante la deficiencia de una contestación adecuada puede generar que el asunto se resuelva por la aplicación de una norma procesal por encima de una norma específica que regula un orden y una planeación en materia de asentamientos humano y desarrollo urbano de un determinado municipio.

La pregunta sería, ¿El juzgador puede romper o deslindarse de este principio tan arraigado en los procedimientos contenciosos administrativos? En el desarrollo y en las conclusiones de la presente tesis, se podrá dar respuesta a esto.

No obstante ellos, se adelanta la opinión en que se estima que el juzgador debe resolver sobre la legalidad del acto reclamado y verificar si las partes se conducen con razón, pues se corre el riesgo de dejar que las partes se impongan sobre el juzgador y entablar una litis cuyo resultados pueden ser contrarios a la ley, ya sea por deficiencia en la conducción de la defensa o bien previa estrategia entre las partes para que el Tribunal defina a sabiendas de la estricta aplicación de este principio.

- b) Desigualdad Procesal: En términos generales todo acto administrativo se presume como legal, por lo tanto, corresponde a la actora desvirtuar la legalidad de este.

Este principio a nivel de justicia administrativa federal y en diferentes leyes estatales que rigen la justicia administrativa está plasmado de manera literal, sin embargo, es un principio derivado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 143, así como su correlativo 143 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Nuevo León y artículo 68 del Código Fiscal del estado de Nuevo León.

No obstante, ello, como consecuencia del sistema anticorrupción derivado de la reforma constitucional de 2015, donde los Tribunales de Justicia Administrativa se encargan de imponer la sanción administrativa de los servidores públicos que comentan faltas graves, la Suprema Corte de la Nación mediante jurisprudencia, determinó que en esta materia opera el principio de presunción de inocencia, con lo que se rompe en este caso con dicho principio que sigue operando en todos los demás casos. Sobre el particular me permito citar la siguiente jurisprudencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

*Época: Décima Época, Registro: 2006590, Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P./J. 43/2014 (10a.), Página: 41*

**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.**

*“El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, “numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento*

*de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso”.*

- c) Equidad Procesal: Principio fundamental en todos los procesos y reconocido por la Constitución Federal en sus artículos 14,16 y 17.

Cabe destacar que mediante reforma del año 2017 la Constitución Federal el artículo 17 fue reformado en su tercer párrafo para quedar como sigue:

*“Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.”*

Es notorio la fuerza de este principio que privilegia desde el más alto ordenamiento jurídico que rige nuestro país la igualdad entre las partes y que también delimita de alguna manera la discrecionalidad de los juzgadores.

Así lo ha reconocido una de la Salas del máximo tribunal de justicia de México, mediante la siguiente tesis:

*“Época: Décima Época, Registro: 2018777, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 1a. CCCXLVI/2018 (10a.), Página: 376”*

#### ***“PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. SUS ALCANCES”.***

*“El derecho al debido proceso, reconocido por los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido entendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el necesario para que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. En ese sentido, la igualdad procesal de las partes, inmersa en el derecho al debido proceso, está íntimamente relacionada con el derecho de contradicción y constituye el núcleo fundamental del derecho de audiencia que consiste, en esencia, en que toda petición o pretensión formulada por*

*una de las partes en el proceso, se comuniquen a la contraria para que ésta pueda prestar a ella su consentimiento o formular su oposición. Así, por el principio de igualdad procesal, se procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales, pero también se erige como una regla de actuación del Juez, el cual, como director del proceso, debe mantener, en lo posible, esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. Ahora bien, dicho principio no implica una igualdad aritmética o simétrica, por la cual sea exigible la exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes, sino que lo que este principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de sus pretensiones, de modo que no se genere una posición sustancialmente desventajosa para una de ellas frente a la otra; de ahí que las pequeñas desigualdades que pueda haber, requeridas por necesidades técnicas del proceso, no quebrantan el principio referido”.*

*“Quien escribe se ha pronunciado en diversas ocasiones con voto particular en su calidad de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, en aquellos asuntos en que los particulares acompañan a sus demandas de negativa ficta, un documento con el que pretenden justificar su instancia no resuelta, sin que en el mismo acredite con exactitud su petición.*

*El anterior criterio, se tiene precisamente cuidando la igualdad entre las partes y evitando que tener una resolución que pueda repercutir en el interés social de una comunidad.*

*Se comparte la argumentación que al respecto quién escribe esta tesis, en los casos que se comentan en el párrafo anterior, destacando que es un voto particular que no es compartido por los demás integrantes de la sala Superior del Tribunal de Justicia administrativa de estado de Nuevo León del cual forma parte”.*

Desde una opinión muy particular es innecesario analizar los agravios expresados en el recurso de revisión interpuesto por el abogado parte actora, contra la sentencia que declara la validez de una negativa ficta, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia inobservada por la Sala de Instrucción, que lleva a decretar el sobreseimiento del juicio, debido a que en términos de “los artículos 56 y 57 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, los presupuestos procesales del juicio contencioso administrativo, su estudio es una cuestión de orden público, pues la procedencia del juicio no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes ni aun de los juzgadores”; por ello el Magistrado Instructor,

“al ejercer la función jurisdiccional, deben sujetarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador, y por ende, en cualquier tiempo, incluso en la segunda instancia, pueden y deben analizar de oficio si la promoción y substanciación del juicio reúne todos los presupuestos legales para pronunciarse sobre la cuestión de fondo de la controversia sometida al conocimiento de este Tribunal”, lo anterior, se estima en el caso concreto, por las razones que se exponen a continuación:

Por ello cuando “el demandante lo que pretende reclamar ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en términos del artículo 17 fracción XIII de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, lo es una negativa ficta, que para ello, en términos del propio artículo 47, fracción II de la citada legislación, el demandante deberá adjuntar a su demanda, entre otros requisitos, copia de la instancia no resuelta por la autoridad demandada, cuando se impugne dicha figura (negativa ficta)”, la cual no puede ser otra cosa, que la propia copia de la solicitud del ahora accionante ante la autoridad demandada a través de la cual refiere que solicita licencia de uso de suelo, debidamente firmada por el solicitante y sellada con la fecha de recepción, porque precisamente a este escrito es al que debe recaer la resolución correspondiente dentro del término de ley, y no un simple formato.

Se estima aplicable a lo anterior la siguiente tesis aislada que reza:

*“Época: Octava Época, Registro: 210212, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994 Materia(s): Administrativa, Tesis: VI. 1o. 126 A, Página: 296*

**DEMANDA DE NULIDAD. A ELLA DEBE ACOMPAÑARSE COPIA DE LA INSTANCIA NO RESUELTA QUE CONTENGA LOS AGRAVIOS, Y NO SIMPLEMENTE LA COPIA DEL FORMATO CON EL QUE SE PRESENTO EL RECURSO.**

*Del enlace lógico jurídico de los artículos 131, 121, 122, 18 y 209 fracción III del Código Fiscal de la Federación, se puede válidamente concluir que si para la*

*configuración de la presunta confirmación del acto impugnado en revocación o resolución negativa ficta, se requiere justificar la existencia del recurso y su fecha de interposición, pues a partir de este momento empieza a correr el término de cuatro meses que tiene la autoridad para resolverlo; es claro que el aludido artículo 209, fracción III, al referirse a que el actor debe adjuntar a la demanda, la instancia no resuelta, ello no puede ser otra cosa que la copia del formato por la que se interpone ante la autoridad fiscal el recurso de revocación, debidamente sellada con la fecha de recepción, y el anexo de la copia del escrito que contiene los agravios que le causa al recurrente el acto impugnado, los hechos controvertidos, las pruebas que acompañe y las que ofrezca, debidamente firmado, porque precisamente a este escrito es al que debe recaer la resolución correspondiente dentro del término de ley, y no al formato con el que se interpone el citado recurso”.*

#### **PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.**

Sin embargo, “del análisis de los presupuestos procesales del juicio de donde deriva el asunto que se comenta y de los elementos de la acción intentada por la parte actora, se advierte que éste no demostró la configuración de la negativa ficta”, en razón de que el impetrante en “estricto apego al invocado artículo 47 fracción II, de la Ley de la materia, es decir, no allegó la copia de la instancia no resuelta por la autoridad demandada, que en este caso sería el escrito petitorio del propio accionante”, que contiene la solicitud de Licencia de Uso de Suelo, firmada por el solicitante y sellada con la fecha de recepción, “documento que es exigible en esa norma legal e indispensable a fin de instaurar el juicio de nulidad en contra del acto impugnado en el caso que nos ocupa (negativa ficta), pues el Pleno del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en su criterio aprobado en la Sexta Sesión extraordinaria de fecha 11-once de julio de 2001-dos mil uno, estableció que tratándose de negativa ficta el particular debe demostrar en autos que se presentó ante la autoridad demandada la petición que la autoridad administrativa debió haber respondido, tal como lo prevé el artículo 17, fracción XIII, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, pues de otra manera, el particular demandante no estaría en aptitud de demostrar la configuración de la negativa ficta, al señalarse en esta misma disposición que la negativa ficta resulta del silencio de la autoridad ante una instancia del particular, pero es claro que esa



petición, para que la autoridad administrativa resulte obligada a responderla, así como en su caso, la propia autoridad jurisdiccional este en aptitud de abordar el fondo de las pretensiones contenidas en ella, debe haberse hecho por escrito, en atención a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 8º.

En estos caso, cuando el accionante en su escrito inicial de demanda que presenta ante la oficialía de partes del tribunal, señala como acto impugnado, la instancia no resuelta respecto a la solicitud de licencia de uso de suelo, con el comprobante de control de ingreso, sin que en el mismo se desprenda su petición ante la autoridad responsable, es obvio que ese documento no puede ser considerado como la instancia cuya silencio se reclama, pues del mismo no se deduce más que un comprobante de recepción sin contener lo planteado.

Es por ello, queda claro para éste que el promovente no es omiso en acompañar el documento con el que pretende justificar su instancia en términos del artículo 47, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, ya que el mismo promovente llega los documentos que el estima idóneos para demostrar los actos impugnados; tampoco se puede decir que, “haya oscuridad e irregularidad en la demanda en específico, en la presentación a su juicio, del documento base de la acción intentada (negativa ficta), pues queda claro el propio demandante así es como lo ofrece y adjunta a su escrito de demanda de nulidad, tal y como la ofrece como prueba de su intención”.

Es por ello, que se llega a la conclusión que los documentos de la acción resultan insuficientes para demostrar la procedencia, porque no respetan la formalidad requerida, por lo que, conforme lo previsto en el artículo 47 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, éstas son cuestiones que, en su caso, deben que resolverse en sentencia definitiva y determinar si trasciende a la procedencia de la acción intentada.

Entre ello, no es posible que se realice una interpretación al artículo 47 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, ya que le mismo resulta claro, al señalar que el actor debe adjuntar a la demanda, la copia de la instancia no resuelta por la autoridad demandada cuando se impune la negativa ficta, lo cual puede ser otra cosa que la propia copia de la solicitud del accionante ante la autoridad demandada y no la constancia control de inicio de trámite, este requisito que se prevé el numeral en cita, se entiende como la necesidad de que al pretender impugnar una negativa ficta simplemente se debe de allegar el documento que constituya propiamente la instancia no resuelta, dicho de otra forma, la solicitud firmada por el accionante y sellada, en donde aparezca la fecha de recepción, de manera que si ello no se acredita dentro del juicio, no existe tal acto impugnado (negativa ficta) y en consecuencia se deriva un impedimento técnico-procesal que imposibilita pronunciarse sobre el fondo el asunto, esto es, respecto de la validez o nulidad de los actos impugnados y la condena respectiva, o lo que es lo mismo, si se encuentra o no justificada legalmente la falta de respuesta a la solicitud de licencia que se dice fue presentada ante la autoridad correspondiente.

Sin que pueda tenerse cumplido lo anterior, con la sola confirmación de la autoridad demandada al contestar la demanda, porque ello, no constituye la documentación que en términos de la ley de la materia se exigen para impugnar como ya se dijo una negativa ficta en términos de los artículos 17, fracción XIII y 47 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, ya que el propio accionante expresa que dicho requisito a su juicio lo pretende acreditar con el control de inicio de trámite, manifestación la anterior que se valora en términos de lo previsto en el artículo 81 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León; sin embargo, no puede ser así, ya que al “reclamarse ante este Tribunal la nulidad de la resolución negativa ficta, la sentencia que dirima el juicio de nulidad no debe anular dicha negativa de manera tal que deje al arbitrio de la autoridad para pronunciar en tercera

oportunidad la instancia del particular, si no que este Tribunal está obligado a decidir la controversia, tomando en consideración las argumentaciones aducidas en la instancia a la que no se dio respuesta, los motivos y fundamentos que la autoridad expresó en la contestación de la demanda para apoyar su negativa, en función de los conceptos de impugnación expuestos por el actor en la ampliación de la demanda”.

Es por ello que se concluye que la parte actora no allegó la solicitud planteada ante la autoridad demandada, por lo tanto incumple lo previsto en el artículo 47 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, de acuerdo a los razonamientos antes precisados, “resultando con ello, que dicho documento (copia de la solicitud) además de ser un requisito exigible en término expreso de la ley de la materia, es indispensable su exhibición a fin de que el juzgador al resolver el fondo, es decir, tenga a la vista los argumentos invocados en la instancia a la que no se dio respuesta”; pues resulta indiscutible a la vista de los documentos que acompaña el ahora accionante a su escrito inicial de demanda, con la intención de cumplir con el multirreferido artículo 47 fracción II de la ley de la materia, que no se contienen las argumentaciones formuladas por el solicitante ante la autoridad administrativa; lo que origina perjuicio al propio accionante, ya que así no se tendría “la certeza y seguridad de lo que realmente peticionó ante la autoridad administrativa, para que éste Tribunal estuviere en la posibilidad legal de decidir la controversia tomando en cuenta las argumentaciones aducidas en la propia solicitud”.

Tampoco se estima que se dejaría en estado de indefensión al demandante, “puesto que de la forma en que se precisó por él, tanto el acto impugnado como la presentación del documento en términos del artículo 47, fracción II de la ley de la materia, en su escrito de demanda, no era procedente el requerimiento previsto en los artículos 45, último párrafo, en relación con el 47, fracción II, último párrafo, y 48 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León”. Tampoco se considera que existe omisión, ni oscuridad en la demanda, así como

manifestación alguna del accionante de imposibilidad de exhibir el documento; “ya que si en el caso el actor acompañó a la demanda el documento que a su juicio funda la acción que intenta, ya que no está entre las facultades de los Magistrados de este Tribunal el de perfeccionar las pruebas que el actor ofrezca para demostrar su acción, ya que de lo contrario se llegaría al extremo de suplir, en este caso, al actor de probar su acción, pues ello contravendría indudablemente los principios de equilibrio procesal e igualdad de partes, que deben observarse en todo litigio, ya que no debe perderse de vista que el juicio contencioso administrativo prevalece el principio de estricto derecho. Lo anterior argumentación va acorde en la jurisprudencia de la Segunda Sala, aplicable al caso concreto por analogía, y que es obligatoria en términos del artículo 198 de la Ley de Amparo, que tiene por rubro”:

“[J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Marzo de 2010; Pág. 1035

**MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN OBLIGADOS A ALLEGARSE PRUEBAS NO OFRECIDAS POR LAS PARTES NI A ORDENAR EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS DEFICIENTEMENTE APORTADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON LAS QUE EVENTUALMENTE AQUÉL PUDIERA ACREDITAR LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN DEDUCIDAS.**

*De los artículos 14, fracciones IV y V, 15, 20, fracciones II a VII, 21, fracciones I y V, 40 y 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como de los derogados numerales 209, fracciones III y VII, 214, fracción VI y 230 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que en los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su acción y al demandado sus excepciones; esto es, la parte interesada en demostrar un punto de hecho debe aportar la prueba conducente y gestionar su preparación y desahogo, pues en ella recae tal carga procesal, sin que sea óbice a lo anterior que el último párrafo del derogado artículo 230 del Código Fiscal de la Federación y el numeral 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevean que el Magistrado Instructor podrá acordar la exhibición de cualquier documento relacionado con los hechos controvertidos u ordenar la práctica de cualquier diligencia, pues la facultad de practicar diligencias para mejor proveer contenida en los citados preceptos legales, debe entenderse como la potestad del Magistrado para ampliar las diligencias probatorias previamente ofrecidas por las partes y desahogadas durante la instrucción, cuando considere que existen situaciones dudosas, imprecisas o insuficientes en dichas probanzas, por lo que tales*

*ampliaciones resulten indispensables para el conocimiento de la verdad sobre los puntos en litigio. De ahí que la facultad de ordenar la práctica de las referidas diligencias no entraña una obligación, sino una potestad de la que el Magistrado puede hacer uso libremente, sin llegar al extremo de suplir a las partes en el ofrecimiento de pruebas, pues ello contravendría los principios de equilibrio procesal e igualdad de las partes que deben observarse en todo litigio, ya que no debe perderse de vista que en el juicio contencioso administrativo prevalece el principio de estricto derecho. Además, si bien es cierto que conforme a los numerales indicados el Magistrado Instructor tiene la potestad de acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos o de ordenar la práctica de cualquier diligencia para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, también lo es que esa facultad no puede entenderse en el sentido de eximir a la parte actora de su obligación de exhibir las pruebas documentales que ofrezca a fin de demostrar su acción, ni de perfeccionar las aportadas deficientemente para ese mismo efecto, sino que tal facultad se refiere a que puede solicitar la exhibición de cualquier prueba considerada necesaria para la correcta resolución de la cuestión planteada".*

## SEGUNDA SALA

Es notorio, que la línea de argumentación de la Segunda Sala del Suprema Corte busca respetar el principio constitucional de igualdad de las partes, ya que evita que los juzgadores puedan realizar actos dentro del procedimiento que beneficies a una sola de las partes dejando en un estado desigual a la otra. Aunado a ello, también se puede deducir de dicha argumentación que la corte le pone un límite para suplir la deficiencia a los diversos juzgadores, sobre todo deduciendo que en todo caso que la parte que pudo beneficiarse siempre estuvo en condiciones de poderlo hacer por sí mismo.

- d) Contradicción: siempre deben ser oídas y vencidas todas las partes, para ellas las partes deben de estar enteradas de todos los documentos que obren en los procesos para poder imponerse de ellos y alegar lo correspondiente. Este principio es fundamental y también deriva de los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Constitución y en diversos artículos de la Ley de Justicia Administrativa, donde se privilegia que todas las partes tengan las mismas oportunidades de imponerse sobre todo las actuaciones y tener los mismos privilegios procesales, no obstante ello, las normas procesales que regulan

la materia a veces son deficientes o no hay disposición para un acto concreto, por lo que obliga al juzgador hacer la interpretación correspondiente.

Este principio es básico y esencial en todos los procedimientos jurisdiccionales no sólo en México, sino en gran parte del mundo, sobre éste escribe García de Enterría y Tomás Ramón Fernández *“es de esencia a todo procedimiento su carácter contradictorio, es decir, la posibilidad de que se hagan valer los distintos intereses en juego y que de esos intereses sean adecuadamente confrontados en presencia de sus respectivos titulares antes de adoptar una decisión definitiva.”* (García de Enterría & Ramón Fernández, 2020)

En la regulación del Juicio Contencioso Administrativo establecido en la Ley de Justicia Administrativa, podemos encontrar muchas disposiciones tendientes a respetar este principio, como regla general siempre se encuentra un dispositivo legal que le da la oportunidad a las partes de tener acceso a todos los documentos que se anexen y así estar en aptitudes de poder ejercer las acciones correspondientes, ejemplo de ello, es que en toda demanda y contestación las partes deberán acompañar copia para traslado de cada documento que se acompaña, así como copia de los escritos de agravios ante la imposición de un recurso de revisión para cada una de las partes etc.

Sin embargo, a juicio personal, hay diversas disposiciones que con el afán de agilizar el procedimiento y facilitar la labor práctica jurisdiccional pueden restringir este derecho.

Caso concreto me refiero a la fracción III del artículo de la referida Ley, que establece que a la demanda deberá acompañarse las pruebas documentales que ofrezca. Sin embargo, cuando dichos documentales estén en un archivo o documento ajeno a los oferentes, podrá solicitar al magistrado instructor que

ordene a la autoridad respectiva acompañe copia certificada de ello, siempre y cuando demuestre el actor que este la solicito al menos con cinco días antes de presentar la demanda.

Este precepto, rompe con el principio de contradicción por que puede dejar al actor en un estado de indefensión, puesto que se le puede reducir el tiempo para la interposición de la demanda. En un momento dado, este artículo puede no aplicarse si así lo estima el juzgador, partiendo de la violación a este principio constitucional consagrada en la Carta magna en los artículos 14, 16 y 17.

- e) Definitividad: Consiste en que el acto reclamado o impugnado ya fue resuelto o se tuvo por resuelto en términos de la Ley y que ya no cabe recurso alguno ante la autoridad administrativa.

Principio preceptuado en casi todas las leyes que rigen los procedimientos contenciosos administrativos en el país, en el ámbito local de Nuevo león se encuentra de manera puntual la fracción X del artículo 17 de la respectiva Ley de Justicia Administrativa y de manera estrechamente relacionada con la fracción XIII del mismo artículo.

***“Artículo 17.- El Tribunal será competente para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los acto o resoluciones que se indican a continuación, dictados ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, por autoridades administrativas, fiscales o entidades de la Administración Pública Paraestatal o de los Municipios del Estado de Nuevo león. Cuando estas últimas actúen en carácter de autoridad:***

***X.- Los que se promuevan contra cualquier acto u omisión definitivos de las autoridades administrativas del estado, de los Municipios y de sus entidades paraestatales o municipales, que afecten los intereses jurídicos de los particulares.”***

Este principio es de seguridad jurídica porque evita que se ventilen juicios o procedimientos sobre las mismas causas o pretensiones y pueda generar diversidad en las distintas resoluciones.

El inciso que se cita a continuación da al Tribunal de Justicia Administrativa competencia para conocer de la negativa y la afirmativa ficta, y la cual se relaciona con el principio que se estudia porque pone un límite en el tiempo al silencio administrativo, o sea, las definitividades la establecen las respectivas leyes, es a través de una ficción legal la que le da el efecto a la petición por el transcurso del tiempo.

***“XIII. Los que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas. Configuradas por el silencio de la autoridad para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la Ley fije o falta de término de cuarenta y cinco días;***

***Cuando por disposición de las leyes o reglamentos, el silencio de la autoridad administrativa para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que se señale en ellos, para tal efecto, implique la configuración de una afirmativa ficta, la autoridad ante la que se hubiere formulado tendrá el plazo de diez días hábiles para reconocer de manera expresa tal circunstancia y las consecuencias legales que de su omisión se desprenda. De lo acontecer así, o si el particular considera que el reconocimiento que se haga no satisface la pretensión deducida en la instancia no resuelta de manera expresa, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la omisión de reconocer la configuración de la afirmativa ficta o, en su caso, del reconocimiento que se haga al respecto, en la parte que afecte a su interés jurídico.***

***En cualquier caso, en que la afirmativa ficta implique la afectación de un derecho de terceros, a contravención de disposiciones de orden público o cause un perjuicio de terceros, la contravención de disposiciones de orden público o cause un perjuicio al interés social, la misma se tendrá por no configurada.”***



Al respecto el criterio que ha adoptada la mayoría en Sala Superior estriba en que la misma fracción XII en relación con el artículo 46, establece la configuración de la negativa ficta, mientras el que escribe tiene un voto particular al respecto, que parece oportuno transcribir por considerar que es una interpretación directa a un precepto de carácter procesal, y que precisamente pretende evitar que las normas procesales estén por encima de las normas que regulan directamente la materia.

- f) Impulso Procesal: las partes deben instar el impulso del proceso, salvo que por disposición de la ley le corresponda a la instrucción continuar con la secuela del procedimiento.

El artículo 26 segundo párrafo de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, dice *“En la tramitación del juicio contenciosos administrativo impera el principio de impulso procesal de las partes”*.

Sin embargo, cabe señalar que la ley citada ha tenido varias reformas encaminadas a dar mayor celeridad al procedimiento, arrojándole la carga procesal al instructor, prueba de ello son los artículos 55 y 72 que mediante reforma del año 2014 impone la carga al Tribunal para que en el auto que admita la contestación o se tenga por no contestada citar para audiencia de pruebas o bien para poner en estado de sentencia los juicios donde no haya prueba de desahogo.

***“Artículo 55.- En el auto en que se admita la contestación de la demanda o se tenga por no contestada, siempre y cuando ninguna de las pruebas admitidas requiera especial desahogo, se concederá a las partes un término común de diez días a fin de que formulen alegatos. Transcurrido dicho término, con alegatos o sin ellos, quedará el juicio en estado de sentencia”.***

Si en el caso del párrafo anterior de las partes objetare de falso un documento o firma dentro de los primeros cinco días del término para alegar, se señalará fecha para la audiencia en que deberán desahogarse las pruebas y formularse los alegatos respecto de la objeción, hecho lo cual quedará el juicio en estado de sentencia”.

***“Artículo 72.- El Magistrado instructor está facultado para calificar la pertinencia de las pruebas ofrecidas por las partes, y desechará aquellas que no se relacionen con los puntos controvertidos”.***

En el acuerdo en el que se realice la calificación de pruebas, se fijará la fecha de la audiencia del juicio, misma que se celebrará dentro de un plazo que no excederá de quince días.

No se citará para audiencia en aquellos casos en que las pruebas ofrecidas y admitidas no requieran desahogo especial, aplicándose en lo conducente lo previsto en el Artículo 55 de esta Ley.

La parte que asista tardíamente a una audiencia se incorporará al procedimiento en la etapa en que ésta se encuentre, sin perjuicio de la facultad del Juez en materia de conciliación.”

Como consecuencia de lo anterior la Sala Superior emitió el siguiente criterio:

***“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO COARTA EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA.***

*Del análisis del contenido del artículo 57 fracción V, así como el diverso 26 segundo párrafo, ambos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, se colige que la causal de sobreseimiento por caducidad de la instancia por inactividad procesal, se actualiza cuando a) Que no se efectúe ningún acto procesal en el término de trescientos días consecutivos; y b) Que dentro de ese mismo período el actor no impulse el procedimiento, cuando ello resulte necesario para su continuación. Sobreseimiento que se decreta como una sanción al desinterés mostrado por el actor, que es a quien le corresponde impulsar el procedimiento, lo que*

*no restringe el derecho al acceso a la impartición de justicia, sino que impone plazos razonables para la prosecución procesal, pues dicha figura sobreviene cuando se deja de impulsar el procedimiento, cuando la obligación que está a cargo de las partes, evitando que las acciones jurisdiccionales puedan prolongarse indefinidamente en el tiempo, lo cual está acorde a los principios de seguridad jurídica y certeza legal; ello sin que signifique una vulneración al principio pro-persona, pues éste no persigue cobijar a la persona, sino procurarle la mayor protección, sin desconocer otros principios como los son las derivadas del orden procesal”.*

#### *Antecedentes*

*Recurso de Revisión 320/2011. 15 de octubre de 2013. Recurso de Revisión 436/2012. 17 de diciembre de 2013. Recurso de Revisión 768/2012. 28 de febrero de 2014.*

*Es importante señalar que una vez en que entró en vigor la comentada reforma constitucional en derechos humanos de 2011, hubo varias promociones en los diversos juicio contenciosos en el ámbito local, tendientes a desaplicar la fracción V del artículo 57 de la citada Ley de Justicia Administrativa del Estado y Municipios de Nuevo León, por considerarlo que dicho artículo iba en contra del derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8 y 25 de la convención Interamericana de derechos Humanos. Dicha fracción V que establece como causa de sobreseimiento:*

*“V- Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días consecutivos, ni el actor hubiere promovido en se mismo lapso, siempre que la promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. En los juicios que se encuentren en revisión, la inactividad producirá la caducidad de esa instancia y la Sala Superior declarará firme la resolución recurrida. Celebrada la audiencia de Ley o propuesto el asunto para resolverse, no procederá el sobreseimiento o la caducidad; y”.*

Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte ha reconocido como valida a la caducidad por no violentar ningún derecho humano, así como también diverso Tribunal Colegiado ha sostenido que la caducidad no contrapone el derecho de acceso a la justicia, sino por el contrario es un dispositivo procesal que lo garantiza.

*“Época: Décima Época, Registro: 2008427, Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la*

Federación, Libró 15, febrero de 2015, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 4/2015 (10a.), Página: 1633

**CADUCIDAD DE LA INSTANCIA PREVISTA EN LOS CÓDIGOS PROCESALES CIVILES DE LOS ESTADOS DE JALISCO, CHIAPAS Y NUEVO LEÓN. ES APLICABLE DE MANERA SUPLETORIA A LAS LEYES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE REGLAMENTAN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.**

*Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.) (\*), ha establecido que la supletoriedad de un ordenamiento legal sólo opera cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento prevea que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; asimismo, cuando el legislador disponga en una ley que determinado ordenamiento debe entenderse supletorio de otros ordenamientos, ya sea total o parcialmente; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente; c) La omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de fijar en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. En el caso se reúnen todos y cada uno de los requisitos necesarios para la supletoriedad de la ley, toda vez que si bien se trata de diferentes legislaciones de distintos Estados, como lo son la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el Código de Procedimientos Civiles de esa entidad; la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, el Código de Procedimientos Civiles de esa entidad; y, el Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León y el Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad; lo cierto es que dichas leyes de justicia administrativa local tienen en común que permiten expresamente la posibilidad, a falta de disposición expresa, y en cuanto no se oponga a lo prescrito en tales leyes, la aplicación supletoria de los respectivos Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados. Por otra parte, en los términos de la jurisprudencia referida, la aplicación supletoria de una norma no puede condicionarse a que proceda sólo en aquellos casos en los que la ley a suplir prevea de forma expresa la figura jurídica a suplirse, ya que dicha interpretación puede tener como consecuencia delimitar la finalidad que persigue dicha institución, que es auxiliar al juzgador en su función impartidora de la ley para resolver las controversias que se le someten a su consideración.*

*Época: Décima Época, Registro: 2001428, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la*

*Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: VIII.A.C.3 K (10a.),Página: 1931”.*

**“PRINCIPIO PRO HOMINE Y CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO PUGNAN.**

El nuevo paradigma, previsto en el artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de la forma que favorezca más ampliamente a las personas, no llega al extremo de inaplicar una figura procedimental prevista en los ordenamientos adjetivos correspondientes (a menos que sea lesiva al equilibrio y protección de las partes), como la de la caducidad de la instancia, pues ésta no coarta principios fundamentales como el de acceso a la justicia, sino impone plazos razonables para su prosecución que, sin duda alguna, es de gran importancia dentro del orden procesal, tendente a alcanzar la seguridad jurídica, ya que su finalidad es evitar que acciones judiciales puedan prolongarse indefinidamente en el tiempo, lo cual, obviamente, incidiría de forma negativa en el interés público. En otras palabras, el principio pro homine no persigue cobijar a toda costa a la persona, sino procurarle la mayor protección, pero, sin desconocer otros principios también de gran entidad como, en el caso, el orden procesal”.

- g) Legalidad: Principio toral en todo procedimiento y se entiende que el juzgador no debe de apartarse las reglas establecido en la ley. Sobre el particular, hay que destacar que toda norma procesal puede ser interpretada como mayor la beneficie al particular o en su caso puede ser inaplicada si se estima que la misma es inconstitucional.

Sobre el particular se ha emitido un voto por quien escribe la tesis en su calidad magistrado, con el cual se argumenta que en el Juicio Contenciosos Administrativo se debe ceñir por lo preceptuado en las leyes aplicables al caso, en este sentido, el voto se dado en diversas ocasiones, cuando se

promueve una negativa ficta y en la ley específica no se contempla su configuración, se precisa la argumentación del voto en el siguiente sentido:

En mi opinión, no existe la configuración de la negativa ficta cuando el accionante reclama como acto impugnado en el juicio natural, diversas solicitudes a las autoridades de un municipio, pidiendo le sea informada y notificada la resolución definitiva a su solicitud de licencia de alcohol para consumo para el establecimiento que menciona con fundamento en los artículos 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, inciso B), 18, 19 y 25, del Reglamento de Alcoholes de Municipio demandado, respecto de la cual la Sala A quo, declaró su validez; ya que, el suscrito Magistrado consideró que, se debe declarar y decretar la improcedencia y el sobreseimiento del juicio de oficio, de conformidad con lo previsto en los artículos 56, fracciones VII y IX, y 57, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, administrado con lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 17 de la misma Ley, no obstante que de conformidad a lo dispuesto en la última parte del artículo 56 antes señalado, “las causales de improcedencia se harán valer de oficio o a propuesta de las partes, ya sea en primera o en segunda instancia” y por lo tanto sin materia el recurso de revisión que nos ocupa; lo anterior conforme a las siguientes consideraciones de derecho:

Lo anterior es así, toda vez que la figura de la negativa ficta constituye una institución de carácter adjetiva o procedimental basada en una ficción legal que tiene su origen en una presunción que por lógica elemental debe encontrarse establecida en la propia ley, por virtud de la cual el silencio de las autoridades administrativas frente a las instancias o peticiones de los particulares, significa la existencia de una resolución desestimatoria de lo pretendido con esa instancia o petición, con el propósito de habilitar a los particulares a deducir la acción de nulidad correspondiente, a fin de que en un proceso jurisdiccional se pueda discutir el mérito legal de la petición no resuelta y la legalidad de la resolución negativa que se integra de forma

presuntiva por el silencio de la autoridad y el contenido material de la petición irresoluta.

Siendo importante precisar y destacar que dicha ficción legal no tiene su origen en la omisión de la autoridad administrativa de dar respuesta a la petición o instancia del particular afectado, sino en la presunción que la ley establece (por no ser una consecuencia de hecho, sino de derecho) sobre el significado del silencio de la autoridad administrativa, es decir, de la falta de una respuesta expresa.

Así pues, es fácil advertir que la negativa ficta es la consecuencia jurídica que la ley establece de forma expresa y específica para una determinada hipótesis de hecho, pero también que dicha consecuencia jurídica no es lógica ni natural bajo la perspectiva del orden común en que se desenvuelven los hechos, ni tampoco desde el ámbito de la semántica propia de las palabras que describen el significado de los hechos que se regulan (omisión, silencio, etcétera), dado que no existe un nexo causal natural o semántico entre la omisión a la que se le atribuye un significado determinado (es decir, entre guardar silencio, no responder, o la omisión de resolver, y la supuesta expresión de una resolución cuyo contenido es –en el caso de esta figura- en sentido negativo), y la presunción legal por virtud de la cual una omisión, un no dar respuesta, significa todo lo contrario, y no sólo eso que la respuesta presunta es en sentido negativo.

En ese orden de ideas, es menester señalar que son las leyes administrativas o fiscales especiales las que determinan cuáles son las materias, instancias o peticiones respecto de las cuales se establece la ficción legal que se estime más conveniente para los particulares y la sociedad en general, es decir, en qué casos la omisión de resolver una instancia o petición constituyen negativas, en función de los bienes jurídicos involucrados y la afectación que

pudieran o no resentir el interés social o el orden público con el establecimiento de tal ficción.

Por ello se estima, que en la especie no existe configuración de la negativa ficta impugnada de mérito, a raíz de la supuesta falta de contestación, a la instancia en cuestión, misma que se sustenta en los artículos 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, inciso B), 18, 19 y 25, del Reglamento de Alcoholes del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, numerales los cuales no establecen expresamente las consecuencias que deriven por la falta de contestación a lo solicitado, que constituye le sea informada y notificada la resolución definitiva a su solicitud de licencia de alcohol para consumo para el establecimiento que menciona; por tanto, no se contempla una presunción legal específica que instituya la figura de la negativa ficta para el caso de que exista falta de resolución a la solicitud mencionada.

En ese contexto normativo, no es jurídicamente posible estimar que la falta de respuesta a su solicitud en términos de lo citados numerales del Reglamento Municipal en cita, constituya una resolución negativa ficta; porque para ello es indispensable conforme al principio de legalidad, que en la ley que regule la materia de la instancia o petición de que se trate, se establezca la presunción legal, por virtud de la cual el silencio de la autoridad administrativa significa fictamente una resolución en sentido negativo, que como se ha visto, no ocurre en la especie; al efecto, para su mejor apreciación, se trae a la vista el artículo 25 del Reglamento de Alcoholes del Municipio demandado, que a la letra dice:

***h) “ARTICULO 25.- Recibida la solicitud con toda la documentación completa a que se refiere el Artículo 23 de este Reglamento, la Secretaría del Ayuntamiento o la dependencia que ésta designe, la foliará e integrará el expediente administrativo correspondiente, enviándolo a la Dirección de Alcoholes para que ésta realice una***



***inspección al establecimiento motivo de la solicitud, dentro de un término de 15- quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se recibió la solicitud, a fin de verificar los datos proporcionados por el solicitante y a efecto de constatar Compilación de Reglamentos Municipales Secretaría General de Gobierno, Coordinación de Asuntos Jurídicos y Normatividad Página 24 de 72 que se cumpla con las distancias radiales a que se refiere el Artículo 21 de este Ordenamiento, de todo lo cual se deberá levantar croquis y acta circunstanciada.”***

Numeral del que no se desprende que se prevea expresamente la negativa ficta, en caso de no ser resuelta la solicitud de referencia.

No pasa desapercibido que los diversos artículos de dicho Reglamento como 97, 100, 103 y 107, establecen, respectivamente, que procede el *recurso de inconformidad*, contra los acuerdos o resoluciones que sean emitidas por las autoridades administrativas con motivo de la aplicación de dicho Reglamento; recurso el cual, debe resolverse dentro de un término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la celebración de la audiencia y, si la autoridad no emite resolución en el plazo establecido y la notifica, se tendrá por resuelto en sentido negativo.

Por otra parte, también se prevé que, toda persona Física o Moral tiene derecho a denunciar ante la autoridad municipal correspondiente, aquel o aquellos establecimientos que considere que están afectando sus intereses; y, la autoridad competente está obligada a hacer del conocimiento del denunciante sobre el trámite, resultado de la verificación de los hechos, medidas de seguridad impuestas y resolución de la denuncia planteada, dentro de treinta días hábiles siguientes. De no resolverse la denuncia, se entiende que se expresa de forma tácita una resolución en sentido negativo contra la cual podrá interponerse el recurso de inconformidad previsto en esta Ley o la demanda en juicio contencioso administrativo.

Sin embargo, en el caso concreto, de la instancia que exhibe el ahora accionante en el juicio natural, no se desprende que su solicitud sea un recurso de inconformidad ni mucho menos una denuncia, en términos del Reglamento de Alcoholes del Municipio demandado.

Así las cosas, es claro que no toda omisión de dar respuesta expresa a una instancia o petición constituye una denegación presuntiva o resolución negativa ficta, pues siendo una ficción legal, sólo cuando la ley lo autoriza puede entenderse que la falta de respuesta a una petición o instancia configura una presunción desestimatoria. Lo anterior encuentra además apoyo en las tesis de rubro: ***“NEGATIVA FICTA. INTEGRACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.”***

En el entendido de que por virtud de lo anteriormente expuesto, no puede estimarse que la configuración de la resolución negativa ficta, dependa de la voluntad de los particulares o de las autoridades demandadas, ni tampoco que la sola falta de respuesta por parte de la administración pública a cualquier instancia o petición, sea suficiente para la configuración de una resolución presuntiva en sentido negativo, pues siendo una ficción jurídica, corresponde al legislador establecer en qué casos puede presumirse que el silencio de la administración pública implica, fictamente, una resolución negativa, lo que sólo puede acontecer en los ordenamientos legales o reglamentarios donde se regulen los aspectos sustantivos y/o adjetivos de las instancias o peticiones donde se establezca la presunción legal relativa, dado que es criterio imperante que tal resolución implica una respuesta de fondo. Lo anterior, en el entendido de que, lo previsto en el artículo 17, fracción XIII, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, solamente prevé un supuesto de competencia material sobre los casos en que este Tribunal puede conocer y resolver los conflictos o controversias

que surjan entre los particulares y el Estado y/o sus Municipios por resoluciones fictas, no una presunción legal genérica y abstracta de negativa ficta para toda clase de petición o instancia no respondida o no contestada por las autoridades pertenecientes a la administración pública estatal o municipal.

Pues suponer que el mencionado dispositivo legal, establece en el primer párrafo de su fracción XIII, una presunción genérica y abstracta de negativa ficta para toda clase de petición o instancia no respondida o no contestada por las autoridades pertenecientes a la administración pública estatal o municipal, rompería con la clara intención de la norma, que solamente es enumerar, exponer y precisar los actos o resoluciones, expresos o presuntos, respecto de los cuales puede promoverse el juicio de nulidad competencia de este tribunal; quebrantamiento que traería consigo desnaturalizar el objeto de regulación de tal disposición legal, pues en esa infundada suposición, se asume que esa norma deja de regular un aspecto fundamentalmente procesal de la instancia puramente jurisdiccional instituida en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, como lo es la competencia de este Tribunal respecto de los actos administrativos expresos o presuntos que pueden ser materia del juicio contencioso administrativo, para apartarse del objeto de la propia ley, establecer una ficción jurídica respecto a situaciones, instancias o peticiones que tienen lugar fuera del proceso contencioso administrativo, lo que sería tanto como admitir que dicha Ley de Justicia Administrativa regula situaciones ajenas al procedimiento contencioso administrativo previsto para resolver los conflictos y controversias que surjan (fuera de esa instancia) entre los particulares y la administración pública estatal o municipal.

Bajo ese panorama, es jurídicamente inadmisibles suponer que el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, establece en el primer párrafo de su fracción XIII, una presunción

genérica y abstracta de negativa ficta para toda clase de petición o instancia no respondida o no contestada por las autoridades pertenecientes a la administración pública estatal o municipal, porque con ello se soslaya comprender el sentido de tal disposición legal en el contexto normativo integrando por el resto de disposiciones que pertenecen al mismo ordenamiento legal, que en conjunto delimitan su alcance y clarifican su significado.

En esa tesitura, se corrobora lo anteriormente dicho en el sentido de que, cuando se analiza la configuración de las resoluciones presuntivas o fictas, debe tenerse presente que, como ficción legal, es la ley especial la que determina cuándo y en qué casos opera la presunción de que el silencio de la administración pública significa una resolución ficta, así como el sentido de ésta, es decir, si el silencio administrativo debe entenderse como una negativa ficta; y que son las leyes administrativas o fiscales especiales las que determinan cuáles son las materias, instancias o peticiones respecto de las cuáles se establece la ficción legal que se estime más conveniente para los particulares y la sociedad en general, es decir, en qué casos la omisión de resolver una instancia o petición constituye una negativa ficta, en función de los bienes jurídicos involucrados y la afectación que pudieran o no resentir el interés social o el orden público con el establecimiento de tal ficción.

Por lo que partiendo de lo que dispone la ley que rige la materia y el procedimiento objeto de la petición cuya falta de respuesta se alega como hecho constitutivo de la acción de nulidad solicitada, no se configura dicha resolución negativa ficta bajo la cual se promueve por el accionante, pues tal como se dijo con antelación, del Reglamento de Alcoholes del Municipio demandado no se desprende que el legislador haya establecido una presunción legal específica que instituya la figura de la negativa ficta, para el caso de que exista una omisión de resolver lo solicitado a que se refiere el accionante en su petición; lo anterior, debido a que el artículo 17, fracción

XIII, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, solamente prevé un supuesto de competencia material sobre los casos en que este Tribunal puede conocer y resolver los conflictos o controversias que surjan entre los particulares y el Estado y/o sus Municipios por resoluciones fictas, no una presunción general de negativa ficta para toda clase de petición o instancia no respondida o no contestada por las autoridades pertenecientes a la administración pública estatal o municipal, pues suponer que tal numeral en su primer párrafo de su fracción XIII, una presunción general de negativa ficta para toda clase de petición o instancia no respondida o no contestada por las autoridades pertenecientes a la administración pública estatal o municipal, destruiría con la indudable intención de la norma, que es precisar los actos o resoluciones, expresos o presuntos, respecto de los cuales puede promoverse el juicio de nulidad competencia de este tribunal; por lo que tenemos que no toda omisión de dar respuesta expresa a una instancia o petición constituye una denegación presuntiva o resolución negativa ficta, ya que sólo puede configurarse en los casos que así lo previenen expresamente las disposiciones legales que rigen las diferentes instancias o peticiones previstas en el ordenamiento jurídico que corresponda; resaltando que cuando se trate de resoluciones negativas fictas, se intenta precisar el momento a partir del cual surge el derecho a reclamar vía juicio contencioso administrativo el sentido negativo que la ley de que se trate presuma ha sido resuelta, manteniéndose un principio de diferencia por el ordenamiento legal que establezca la presunción legal desestimatoria, inclusive en lo que se refiere al plazo necesario para su configuración, y sólo para el caso de que en la ley especial aplicable no se prevea el momento a partir del cual opera la presunción instituida en la misma, se dispone que la promoción del juicio contencioso administrativo será procedente contra la presunción establecida, después de que venza el término de cuarenta y cinco días, en el entendido de que la previsión de ese término se establece como requisito de procedencia del juicio de nulidad, más que de configuración de la resolución presuntiva, tal y como lo dispone

el artículo 46, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, que solamente establecen el momento a partir del cual puede promoverse el juicio contencioso administrativo en contra de las resoluciones fictas que establezcan en los distintos ordenamientos legales, pero que no establecen ninguna presunción general de desestimación sobre cualquier petición no contestada o respondida.

Al respecto, resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial, que se estima por el suscrito Magistrado que aplica por analogía al presente asunto, de rubro: **“NEGATIVA FICTA. IMPROCEDENCIA DE LA (ISSSTE).”** En esa tesitura, se estima que en el caso que nos ocupa, no se configura la resolución negativa ficta bajo la cual se promueve el juicio, dado que, partiendo lo que dispone la ley que rige la materia y el procedimiento objeto de la petición cuya falta de respuesta se alega como hecho constitutivo de la acción de nulidad intentada, es decir, del Reglamento de Alcoholes del Municipio demandado, Nuevo León (según lo señalado en la propia petición de origen), se advierte que no existe de forma expresa ninguna presunción desestimatoria que permita jurídicamente suponer que la omisión de las autoridades instadas a dar respuesta a dicha clase de petición, implica una resolución negativa ficta.

En consecuencia al no configurarse la negativa ficta impugnada en el presente juicio, con fundamento además en el artículo 91 Bis de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, se estima por el suscrito Magistrado que en el presente caso se actualiza la improcedencia y “el sobreseimiento del juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 56, fracciones VII y IX y 57, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León”, adminiculado con lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 17 de la misma Ley, respecto de los actos impugnados en el juicio, ya que si bien la negativa ficta y la expresa son dos figuras independientes entre sí, también lo es que, ésta

última nace la oportunidad de ser reclamada, cuando se configure la primera ante este Tribunal, y por lo tanto, al considerarse que no existe configuración en la especie la negativa ficta reclamada en el juicio de origen por todas y cada una de las consideraciones de derecho ante expuestas lo procedente es el sobreseimiento del juicio, en relación a la supuesta negativa ficta a la solicitud presentado y como consecuencia de ella, la negativa expresa que derive de la misma.

Por último, cabe señalar que lo antes considerado por el suscrito no significa una restricción al derecho de acceso a la jurisdicción, pues éste, previsto y regulado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tiene una extensión ilimitada, según lo establece el propio precepto constitucional, donde claramente se dispone que tal derecho se encuentra limitado por los plazos y términos que fijen las leyes, es decir, por los presupuestos procesales que determinan la procedencia de los medios de impugnación en sede jurisdiccional, como en este caso lo son los de decisión previa y de previsión legal expresa de la ficción jurídica por virtud de la cual los particulares afectados por la falta de respuesta de la administración pública a una instancia o petición, se encuentran habilitados para deducir la acción de nulidad contra una presunta resolución desestimatoria, con la intención de someter a discusión el fondo o mérito de la pretensión deducida en sede administrativa.

### **3.- Ámbito local. Caso Nuevo León.**

#### **3.1.- Naturaleza de la Función del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León.**

El Tribunal de Justicia Administrativa, es un órgano jurisdiccional para dirimir a las que se refiere la Constitución Federal, y con una particularidad a la que nos referiremos más adelante que tiene que ver con su ámbito de competencia, sin

embargo en éste punto hay que decir que en la actualidad el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León está creciendo, no solamente en el número de juicios contenciosos administrativos que ante él se ventilan, sino también como es obvio en los años que vienen realizando sus funciones, ya que la ley que lo crea es publicada en año de 1991, sin embargo se estima prudente hacer un recorrido a través del tiempo para comprender más del trabajo jurisdiccional que actualmente desempeña y de la necesidad del mismo. Decía el maestro Gabino Fraga ante la preocupación de que los administrados tuvieran una instancia diferente a la de los recursos administrativos que se llevaban ante el mismo órgano que emitían los actos que se estimaban como ilegales, para garantizar mayor imparcialidad que *“las legislaciones de los diversos países se han visto en la necesidad de establecer un control jurisdiccional de los actos de la Administración, considerando que debe haber órganos diferentes de ésta e independientes de ella que dentro de formas tutelares de procedimiento, puedan juzgar y decidir, con autoridad de cosa juzgada, las controversias que se susciten entre los particulares y al Administración”* (Fraga, 1989) .

### **3.2.- Fundamento Constitucional Local.**

En cuanto al marco normativo estatal, “el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, se encuentra regulado por la fracción XLV del artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León”.

Dispositivo que actualmente establece lo siguiente:

***“ARTÍCULO 63.- Corresponde al Congreso:***

***XLV.- Instituir mediante las leyes que expida, el Tribunal de Justicia Administrativa como órgano jurisdiccional con autonomía funcional y presupuestal y dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos y con facultades para resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal, ya sea central o paraestatal; estableciendo las normas de su organización y funcionamiento, los requisitos, las licencias y***



**renuncias de sus integrantes, sus procedimientos y los recursos contra las resoluciones que pronuncien.**

*Dicho Tribunal conocerá de las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública municipal, central o paramunicipal, en los casos en que los municipios no cuenten con un Órgano de Justicia Administrativa municipal. Los Magistrados del Tribunal serán nombrados por un período de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento. Al concluir el período para el que fueron nombrados, podrán ser considerados para nuevo nombramiento; y podrán ser removidos por las mismas causas y observar el mismo procedimiento que para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.*

*Los Municipios podrán contar con Órganos de lo Contencioso Administrativo, autónomos sin subordinación jerárquica a la autoridad municipal, con facultades plenas para el pronunciamiento de sus fallos y para resolver las controversias que se susciten entre la administración pública municipal, central o paramunicipal, y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; los que se regirán por los ordenamientos legales que al efecto se emitan.*

*Asimismo, el Tribunal de Justicia Administrativa será el órgano competente, a través de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves o que constituyan hechos de corrupción, así como a los particulares que participen en los actos vinculados con dichas responsabilidades, fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales, así como conocer de los asuntos derivados de las sanciones administrativas que emitan otras autoridades.*

*Para tal efecto, deberá incluir en la Ley que regula la creación, organización y atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa, las facultades de la sala especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y la facultad del Congreso para emitir la convocatoria y seleccionar de entre la lista de candidatos remitida por el Comité de Selección del Sistema, en caso de ser más de tres, a una terna de entre los inscritos para elegir al Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas. Para elegir dicha terna, cada legislador votará por tres opciones de la lista de candidatos remitida y los tres candidatos con la votación más alta integrarán la terna.*

*El Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas será electo de entre los integrantes de la terna, previa comparecencia, en votación por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. De no alcanzarse dicha votación, se procederá a una segunda votación entre los dos integrantes que hayan obtenido más votos. En caso de empate entre quienes no obtuvieron el mayor número de votos, habrá una votación para definir por mayoría quien entre dichos dos*

*candidatos participará en la segunda votación. Si persiste el empate, se resolverá por insaculación entre ellos.*

*Si en la segunda votación, ninguno de los dos candidatos obtiene el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, se procederá a la insaculación de entre estos últimos dos.*

*El Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas podrá ser removido por las mismas causas y con el mismo procedimiento que para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.*

*La Ley preverá la participación de los integrantes del Comité de Selección del Sistema a que hace referencia la fracción III del artículo 109 de esta Constitución en la elaboración de la convocatoria, diseño de los mecanismos de evaluación y análisis de perfiles. El Comité de Selección del Sistema posterior al análisis de los perfiles definirá de manera fundada y motivada quiénes integran la lista de los candidatos que cumplen con los requisitos constitucionales y legales para ocupar dicho cargo y remitirá dicha lista al Pleno del Congreso”.*

Con lo anterior en mente, se puede colegir que el Congreso del Estado de Nuevo León tiene facultades para expedir “al tribunal de justicia administrativa, como órgano jurisdiccional de autonomía funcional y presupuestal y dotado de autonomía plena para conocer y resolver todas aquellas controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal central o paraestatal, así como aquellos relacionados con la administración pública municipal, central o paramunicipal”, siempre y cuando no hubiere órganos expresamente establecidos para este último supuesto.

### **3.3.- Funciones Juzgado Fiscal.**

En cuanto al marco normativo estatal, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, se encuentra regulado por la fracción XLV del artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

Dispositivo que actualmente establece lo siguiente:

#### **ARTÍCULO 63.- Corresponde al Congreso:**

**“XLV.- Instituir mediante las leyes que expida, el Tribunal de Justicia Administrativa como órgano jurisdiccional con autonomía funcional y**

**presupuestal y dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos y con facultades para resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal, ya sea central o paraestatal; estableciendo las normas de su organización y funcionamiento, los requisitos, las licencias y renunciaciones de sus integrantes, sus procedimientos y los recursos contra las resoluciones que pronuncien.**

Dicho Tribunal conocerá de las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública municipal, central o paramunicipal, en los casos en que los municipios no cuenten con un Órgano de Justicia Administrativa municipal. Los Magistrados del Tribunal serán nombrados por un período de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento. Al concluir el período para el que fueron nombrados, podrán ser considerados para nuevo nombramiento; y podrán ser removidos por las mismas causas y observar el mismo procedimiento que para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

Los Municipios podrán contar con Órganos de lo Contencioso Administrativo, autónomos sin subordinación jerárquica a la autoridad municipal, con facultades plenas para el pronunciamiento de sus fallos y para resolver las controversias que se susciten entre la administración pública municipal, central o paramunicipal, y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; los que se regirán por los ordenamientos legales que al efecto se emitan.

Asimismo, el Tribunal de Justicia Administrativa será el órgano competente, a través de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves o que constituyan hechos de corrupción, así como a los particulares que participen en los actos vinculados con dichas responsabilidades, fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales, así como conocer de los asuntos derivados de las sanciones administrativas que emitan otras autoridades.

Para tal efecto, deberá incluir en la Ley que regula la creación, organización y atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa, las facultades de la sala especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y la facultad del Congreso para emitir la convocatoria y seleccionar de entre la lista de candidatos remitida por el Comité de Selección del Sistema, en caso de ser más de tres, a una terna de entre los inscritos para elegir al Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas. Para elegir dicha terna, cada legislador votará por tres opciones de la lista de candidatos remitida y los tres candidatos con la votación más alta integrarán la terna.

El Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas será electo de entre los integrantes de la terna, previa

*comparecencia, en votación por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. De no alcanzarse dicha votación, se procederá a una segunda votación entre los dos integrantes que hayan obtenido más votos. En caso de empate entre quienes no obtuvieron el mayor número de votos, habrá una votación para definir por mayoría quien entre dichos dos candidatos participará en la segunda votación. Si persiste el empate, se resolverá por insaculación entre ellos.*

*Si en la segunda votación, ninguno de los dos candidatos obtiene el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, se procederá a la insaculación de entre estos últimos dos.*

*El Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas podrá ser removido por las mismas causas y con el mismo procedimiento que para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.*

*La Ley preverá la participación de los integrantes del Comité de Selección del Sistema a que hace referencia la fracción III del artículo 109 de esta Constitución en la elaboración de la convocatoria, diseño de los mecanismos de evaluación y análisis de perfiles. El Comité de Selección del Sistema posterior al análisis de los perfiles definirá de manera fundada y motivada quiénes integran la lista de los candidatos que cumplen con los requisitos constitucionales y legales para ocupar dicho cargo y remitirá dicha lista al Pleno del Congreso”.*

Con lo anterior en mente, se puede colegir que el Congreso del Estado de Nuevo León tiene facultades para expedir al tribunal de justicia administrativa, como órgano jurisdiccional con una autonomía funcional y presupuestal; y dotado de autonomía plena para conocer y resolver todas aquellos conflictos que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal central o paraestatal, así como aquellos relacionados con la administración pública municipal, central o paramunicipal, siempre y cuando no hubiere órganos expresamente establecidos para este último supuesto.

### **3.4.- Funciones Tribunal de lo Contencioso Administrativo.**

El Tribunal de lo Contenciosos Administrativo nace institucionalmente por decreto 213 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 5 de

julio de 1991 que contiene la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no obstante como ya lo referimos en el punto anterior es en los Transitorios del Decreto 214 correspondiente a la Código de Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo donde dónde se establecen las disposiciones de la transición del Juzgado Fiscal al éste nuevo.

El Tribunal de Justicia de lo Contencioso Administrativo pasa hacer un verdadero órgano de impartición de justicia con todas las características que de un Tribunal Jurisdiccional.

A diferencia del Juzgado Fiscal el nuevo Contencioso Administrativo dicta sus fallos en nombre de él y no con la representación del ejecutivo, pues se le dota de autonomía jurisdiccional.

Otra diferencia substancial se da en el ámbito competencial, pues esta se expande para conocer de los actos emitidos por los distintos entes de la administración pública estatal y municipal, y no se limita a los dictados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado.

Características:

- a) Autonomía Jurisdiccional.
- b) Fuerza para hacer cumplir sus determinaciones.
- c) Unitario y Unistancial hasta 1997 y unitario y bistancial hasta 2012.
- d) Competencia para conocer de actos administrativos de todas las instancias de la administración pública estatal y municipal.

El Tribunal se concibe para ser un órgano garante de la legalidad de los actos que le son sometidos bajo los procedimientos previamente establecidos en ley.

### **3.5.- Tribunal de Justicia Administrativa.**

El Tribunal del Contencioso Administrativo fue transformado a Tribunal de Justicia Administrativa mediante decreto de Ley, número 293 de fecha primero de febrero del 2012, no sólo cambia su denominación, cambia también en su estructura, pues ya la Sala Superior no es unitaria y rotativa, sino es permanente y colegiada compuesta por tres magistrados designados exclusivamente como integrantes de la Sala Superior.

Este nuevo esquema ha propiciado que las resoluciones en segunda instancia sean más uniformes en relación como se venían resolviendo, ya que la rotación cada dos años del titular provocaba cambios constantes en los criterios pues dependía de quien ocupaba en su momento la titularidad de la sala.

Actualmente y con motivo de la reforma constitucional del año 2015 el Tribunal pasa hacer un órgano sancionador en materia de responsabilidades administrativas contando para ello con una Sala Especializada en dicha materia.

### **3.6.- Competencia del Tribunal de Justicia.**

La competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León se encuentra plasmada en tres ordenamientos jurídicos, como ya se ha citado en éste capítulo primeramente en la fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un segundo plano como también ya se ha visto en la fracción XLV del artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y por último en los artículos 1º y 17 de la Ley de Justicia Administrativa, que me permito citar:

***“Artículo 1o.- Esta Ley tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de***

***Nuevo León, dotado de facultades para conocer y resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y el Estado, los Municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal cuando estas últimas realicen funciones administrativas de autoridad; el procedimiento para su resolución y ejecución; los recursos que los particulares y las autoridades podrán interponer en contra de los fallos que pronuncie”.***

***“Artículo 17.- El Tribunal será competente para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones que se indican a continuación, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, por autoridades administrativas, fiscales o entidades de la Administración Pública Paraestatal o de los Municipios del Estado de Nuevo León, cuando estas últimas actúen en carácter de autoridad:***

I.- Que determinen la existencia de una obligación fiscal, la fijen en cantidad líquida o den las bases para su liquidación;

II.- Que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por las leyes fiscales indebidamente percibidos por el Estado o los Municipios; o cuando se niegue por las mismas autoridades la devolución de un saldo a favor del contribuyente;

III.- Los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, siempre y cuando se afirme: a) Que el crédito que se exige se ha extinguido legalmente, o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la oficina ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el Artículo 22 del Código Fiscal del Estado; b) Que se es poseedor, a título de propietario, de los bienes embargados en el procedimiento administrativo de ejecución seguido contra otras personas; o que se es acreedor preferente al fisco, para ser pagado con el producto de los mismos; El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los derechos embargados, podrá promover el juicio en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco estatal o municipal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales estatales o municipales, podrá promover el juicio antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal.; y c) Que el procedimiento administrativo de ejecución no se encuentra ajustado a la ley. En este caso, las violaciones cometidas antes de la etapa del remate sólo podrán hacerse valer hasta el momento de la convocatoria en primera almoneda, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, en cuyo caso el juicio podrá interponerse contra el acta en que conste la diligencia de embargo. Si las violaciones tuvieran lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria

o se trate de venta de bienes fuera de subasta, el juicio se interpondrá contra la resolución que finque el remate o la que autorice la venta fuera de subasta. En los juicios que se promuevan por alguna de las causas a que se refieren los dos últimos incisos de esta fracción, no podrá discutirse la existencia del crédito fiscal.

IV.- Que causen un agravio en materia fiscal o administrativa, distinto a los precisados en los incisos anteriores, así como todos aquellos actos realizados por cualquier autoridad administrativa, estatal o municipal, fuera del procedimiento de ejecución fiscal;

V.- Que impongan sanciones no corporales por infracción a las leyes y reglamentos estatales o municipales, de carácter administrativo o fiscal;

VI.- Que determinen responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos del Estado o de los Municipios;

VII.- Que se refieran a la interpretación, cumplimiento o incumplimiento de convenios y contratos administrativos, en los que sean parte el Estado o los Municipios, o sus entidades paraestatales o paramunicipales;

VIII.- En materia de pensiones con cargo al erario estatal o a cargo de los Municipios de la entidad, o de las instituciones estatales o municipales de seguridad social;

IX.- Los relativos a la responsabilidad patrimonial extracontractual reclamada al Estado, a los Municipios, o a las entidades paraestatales o municipales;

X.- Los que se promuevan contra cualquier acto u omisión definitivos de las autoridades administrativas del Estado, de los Municipios y de sus entidades paraestatales o municipales, que afecten los intereses jurídicos de los particulares;

XI.- Los que se promuevan en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o fiscales, estatales o municipales, al resolver los recursos establecidos por las leyes y reglamentos respectivos;

XII.- Los que promuevan las autoridades estatales o municipales o los titulares de sus entidades paraestatales o municipales, para que sean nulificadas las resoluciones administrativas o fiscales dictadas por ellas mismas, favorables a los particulares;

XIII.- Los que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas, configuradas por el silencio de la autoridad para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la Ley fije o a falta de término de cuarenta y cinco días; Cuando por disposición de las leyes o reglamentos, el silencio de la autoridad administrativa para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que se señale en ellos, para tal efecto, implique la



configuración de una afirmativa ficta, la autoridad ante la que se hubiere formulado tendrá el plazo de diez días hábiles para reconocer de manera expresa tal circunstancia y las consecuencias legales que de su omisión se desprendan. De no acontecer así, o si el particular considera que el reconocimiento que se haga no satisface la pretensión deducida en la instancia no resuelta de manera expresa, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la omisión de reconocer la configuración de la afirmativa ficta o, en su caso, del reconocimiento que se haga al respecto, en la parte que afecte su interés jurídico. En cualquier caso, en que la afirmativa ficta implique la afectación de un derecho de terceros, la contravención de disposiciones de orden público o cause un perjuicio al interés social, la misma se tendrá por no configurada.

XIV. Los demás que se promuevan en contra de actos o resoluciones que por su naturaleza o por disposición de otras leyes se consideren como competencia del Tribunal.

De igual manera, el Tribunal será competente, por medio de la Sala Superior o del Magistrado de la Sala Ordinaria, según sea el caso, para conocer y resolver los recursos de revisión y queja que se promuevan conforme a lo dispuesto de esta Ley.

#### **4.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, como parte de la Administración Pública de Estado.**

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León es un órgano formalmente administrativo y materialmente jurisdiccional.

Cuyo ámbito lato de competencia es “el de resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública central o paraestatal del Estado”; y de la misma manera “los que se susciten entre los particulares y la administración pública municipal en los casos que los municipios no cuenten con un órgano de lo contencioso administrativo”, recientemente y como consecuencia de la reforma a la constitución federal del 2015 relativa a sistema anticorrupción se amplía su competencia para sancionar a los servidores públicos

que comentan falta consideradas como graves por los diversos ordenamiento que contemplan normas sancionatorias a los servidores públicos.

Como dato adicional, cabe señalar que materialmente ningún municipio cuenta con su propio órgano jurisdiccional, no obstante, establece las bases para ello con la adición de un capítulo a la “Ley de Justicia Administrativa del Estado y Municipios de Nuevo León que fue el resultado de la controversia constitucional número 61/2010 promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, contra los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado”.

Sin embargo se estima, que el actual contexto constitucional ya no permite la existencia de Tribunales de los Contenciosos Administrativo o de Justicia Administrativa cualquiera que sea su denominación en ámbito municipal ya que con motivo de la referida reforma del año 2015, en específico a la fracción V del artículo 116 de nuestra Constitución federal, que dispone “Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares”, introduce por primera vez la obligación a las entidades federativas a establecer tribunales de justicia administrativa para dirimir las controversias entre particulares y la administración pública estatal y municipal y refiere que éste tribunal es el único que podrá sancionar a los servidores públicos y particulares que comentan las faltas graves señaladas en las diversas leyes aplicables. Por consiguiente, el apartado del Título V del procedimiento Contencioso administrativo local de la Ley de Justicia Administrativa del Estado y Municipios de Nuevo León debe ser derogado por ser contrario a la Constitución federal”.

No obstante ello, se respeta las decisiones que han tomado o pudiera tomar los municipios en cuanto a instituir su propio órgano de jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin embargo, hay el convencimiento de que Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, tiene tanto la capacidad técnica-jurídica y la infraestructura humana y material, para conocer de todos los asuntos en los que los

municipios sean parte, tanto demanda como sería la lógica, sino también, como parte actora ante un juicio de lesividad.

De alguna manera, la bondad de que sea un sólo tribunal se traduce en certeza jurídica para los justiciables, pues prevalecerá un criterio más uniforme en las decisiones que se den en las controversias de los juicios contenciosos en el ámbito municipal, lo que fortalece al estado de derecho y privilegia la tutela efectiva que todo gobernado tiene derecho. Independientemente de lo anterior, lo importante es que los particulares estén confiados a que los actos de la administración pública, en todos los órdenes, están sujetos, en caso de litigio, a Órganos o Tribunales jurisdiccionales independientes e imparciales.

Me permito citar la visión que sobre el particular ha escrito la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, integrante del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

*“El Estado de Derecho implica sobre todo el sometimiento de las autoridades y los entes públicos al orden jurídico instituido, el cual previene que autoridades solamente pueden actuar en el marco de las competencias otorgadas. Sin embargo, en el despliegue de su actuación puede eventualmente apartarse de su ámbito competencial y lesionar la esfera jurídica de los gobernados, que frente al poder del Estado es tutelada por nuestro orden constitucional y legal.*

*La justicia administrativa, pues, no es sino el control constitucional y legal de los actos de la autoridad a través de los mecanismos legales, de los órganos y de los procedimientos instituidos en la ley; así como la defensa de los derechos de los particulares que pueden ser vulnerados por dichos actos, a fin de que estos obtengan la reparación de los daños ocasionados.”*  
(Mosri Gutiérrez, 2014)

En el caso particular de Nuevo León, el ámbito estricto de competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado lo encontramos en el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.

## **CAPITULO V. LOS DERECHOS HUMANOS COMO LÍMITE DE INTERPRETACIÓN DE LA NORMA PROCESAL.**

### **1. Los Derechos Humanos.**

Inaugurando el presente capítulo es pertinente dar un con contexto histórico y de referencia sobre cómo se han interpretado y materializado los derechos humanos en la vida del hombre, razonar sobre el origen de los derechos humanos indudablemente tiene que remitirnos a la figura del estado. Lo decía Hobbes en su obra “El Leviatán”, personalmente la idea de estado de Hobbes la podría dilucidar de la siguiente manera: “El estado es una ficción en la cual el hombre renuncia a su fuerza para que esta sea recibida e impartida de una manera justa y únicamente por el estado, de otro modo se viviría en un estado de anarquía y guerra absoluta”.

Para Hobbes el estado si bien representa una figura dantesca también representa una medida de control gubernamental y de justicia de ahí que se le compare con el “Leviatán”, monstruo bíblico que representa justamente la capacidad del Estado para usar y legitimar la fuerza a favor del orden, sin embargo en esa metáfora religiosa Hobbes hace mención de “behemoth” quien representa la guerra absoluta, de modo que ante un espectro primario los derechos humanos no solo pueden ser vulnerados por el estado sino también por los particulares.

Lo que nos remite a la reflexión sobre la dignidad como valor innato de los hombres el cual por mucho tiempo fue ignorado, los derechos humanos fueron negados y no reconocidos durante toda la existencia de las sociedades humanas pues muchas razas, grupos étnicos y culturales fueron invisibilizados y no asumidos como humanos, causando sufrimiento y vulnerando su integridad. “En la historia del mundo y la de México podemos encontrar muchos ejemplos de estas violaciones

de los derechos, como la esclavitud, la explotación de niños y niñas, las consecuencias de las guerras, los abusos del Estado, los abusos laborales y la discriminación a los pueblos indígenas y las libertades sexuales”.

Los derechos humanos se encuentran basados en la concepción de la dignidad del ser humano y de la limitación al poder del Estado, es un pensamiento que se encuentra presente a través de diferentes matices, dentro la historia del hombre en sociedad. La búsqueda por el reconocimiento de la dignidad de los hombres ha sido una importante meta que ha figurado de manera destacada ante el acontecer histórico de las civilizaciones humanas y su entendimiento de sí mismos, desde el mínimo reconocimiento de los derechos de los indígenas, dado en la época de la Conquista española de las civilizaciones prehispánicas, hasta la moderna manifestación de los derechos del hombre y del ciudadano tras la Revolución Francesa.

Si bien los atisbos de la búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos pueden identificarse en numerosos acontecimientos históricos de la antigüedad, tales como la revelación judía al poder del faraón, las resistencias tanto germánicas como sajonas al imperio romano, no fue hasta que dentro del periodo de la Francia de María Antonieta que los derechos humanos fueron exigidos y propiamente plasmados tanto en la praxis como en la actividad intelectual, política y jurídica.

Pensar en Derechos Humanos en la edad media era imposible pues ante una época regida por el feudalismo el hombre común era propiamente una propiedad del feudal lo cual para poder lograr un cambio tuvo que ocurrir un gran acontecimiento el cual fue la revolución francesa la cual abrió las puertas y definiría el futuro del conocimiento de los hombres pues sería el precedente del siglo de las luces, ahora recordando las consecuencias de la revolución francesa esta represento un hito para la historia humana tanto política, jurídica y filosóficamente

también inauguró el estudio de los derechos humanos y los límites del estado en su actuar, pues la creación de la Asamblea Nacional Constituyente representó el máximo avance en el desarrollo de las naciones incluso anunció el destino y el entendimiento de los estados modernos en la actualidad dichas ideas las encontramos en una fase de internacionalización e exposición de los derechos fundamentales, dicho de otra forma, una vez que la mayor parte de los sistemas jurídicos internos han reconocido los derechos y las libertades fundamentales, por lo que se ha abierto una etapa en la que los derechos fundamentales son objeto de proclamación en el ámbito de Organizaciones de índole internacional tanto de carácter universal como regional.

Durante la exposición del concepto de universalidad es importante entender que dicha exposición se integra por etapas tempranas para la internacionalización de dichos derechos ha permitido un importante desarrollo en el cual aún todavía aun hoy en día estamos en materialización, “la promoción y protección de todos los derechos humanos han pasado de ser un asunto que caía bajo la esfera de la competencia exclusiva de los esfuerzos de agrupaciones” a favor de grupos vulnerables y de los estados a convertirse en “una preocupación legítima de la comunidad internacional”, pues ante la incapacidad de los Estados a garantizar el reconocimiento de estos, los esfuerzos internacionales son una esperanza tal y como señala la Declaración y el Programa de Acción de Viena. (Derechos Humanos México. México, 2002)

Es importante para el presente capítulo destacar que la exposición a la internacionalización de los derechos humanos fue realizada en el año 1945, “una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y creada la Organización de las Naciones Unidas”. Sin embargo en un periodo de relativa calma y de la mano principalmente de la Sociedad de Naciones, se ha presenciado al surgimiento de una amplia corriente a favor del reconocimiento internacional de los derechos humanos, es

importante destacar los crímenes de guerra perpetrados por el régimen Nazi fueron tan solo los más expuestos ante una serie de actos macabros, perpetrados por los regímenes fascistas como el de Franco y Mussolini, estos atentados contra la existencia humana sentaron un precedente moderno sobre la incapacidad del estado para llevar a la praxis los derechos humanos, pues aunque los atisbos en la documentación jurídica ya eran interpretables estos solo reconocían como humanos a ciertos hombres y no a todos sin ninguna clase de distinción, pues el grave acontecer del actuar del régimen nazi fue legitimar a través del poder y fuerza del Estado la negación e invisibilizar los derechos a los hombres que no perteneciesen o cumplieran con las ideas Nazis.

Dichos ejemplos europeos permitían finalmente exponer las debilidades del estado para garantizar los derechos a los hombres propiamente permitía que la manera como los Estados llevaran a la praxis los actos de fuerza e impartición de justicia fuese una cuestión de pertenecía que sea exclusiva a la jurisdicción interna de cada Estado sin reconocer los méritos internacionales por garantizar los derechos humanos innatos o universales del hombre. Este axioma negaba a los otros Estados el derecho a intervenir o interceder en favor de los hombres originarios de un Estado en el que no se les respetaba dichos derechos humanos. La única excepción era la institución denominada “intervención humanitaria”, teoría que está basada en la exaltación de que los Estados tienen la obligación de garantizar a sus propios nacionales ciertos derechos elementales. Estos derechos son tan elementales y de tal valía para la persona humana que las violaciones en las que incurra un Estado no deben ser ignoradas por el resto de los Estados.

Para poder enfatizar y continuando sobre la línea de análisis de la dignidad humana es necesario recordar las atribuciones del humanismo clásico el cual tuvo una importante aportación gracias a él “humanismo renacentista de Giovanni Pico della Mirandola” y su “Discurso sobre la dignidad del hombre”, a pesar “de que su



pensamiento se encuentra encuadrado en una concepción religiosa. Para Pico della Mirandola, Dios concedió al hombre la facultad de construir su destino mediante su libertad; el hombre decide si desea parecerse a una planta o a una bestia, o si, por el contrario, por medio de su raciocinio va a convertirse en un ángel o en un hijo de Dios. El hombre debe cuidar este don la libre elección (sic) con responsabilidad. El hombre a su libertad aúna voluntad, inteligencia, deseo de aprender, búsqueda de la verdad y el saber numerar, que no es el arte del cómputo sino de la aritmética divina en la concepción de Platón y Aristóteles”. (Pico della Mirandola, 2004)

Me es preciso exponer como concepto central del presente capítulo el concepto de dignidad humana pues esta representa la esencia de los derechos fundamentales, ya que estos encuentran su base en la dignidad humana. En realidad, constituyen una unidad que no se destruye. Entonces es pertinente hacernos el cuestionamiento sobre ¿qué se entiende como dignidad humana? cuestionándonos este razonamiento es posible expresar que la dignidad humana puede entenderse como la obligación de reconocer del valor que tiene el individuo en el universo. La idea y exposición del concepto de universalidad pretenden el entendimiento de los Derechos Humanos como un concepto universal sin importar la postura que se use para interpretarlos.

No obstante, para la correcta interpretación de estos razonamientos, se replanteo un parámetro teórico después de la segunda guerra mundial. En este nuevo periodo, el cual se comprende hasta nuestros días, se puede encontrar el desarrollo científico más vasto en materia de derechos fundamentales de todos los tiempos, teniendo como fin que todas estas interpretaciones y conceptualizaciones sobre el entendimiento del ser humano no solo puedan mantenerse bajo un mundo puramente de ideas si no poder materializarlo a través de la praxis jurídica y social.

En la actualidad, gracias al esfuerzo de luchadores sociales, ONG y los Gobiernos representativos, los derechos fundamentales son reconocidos no solo como un conjunto de normas que se tengan que cumplir o respetar, sino también como un conjunto de valores naturales, y son válidos en prácticamente el mundo entero, que permite reconocer, valorar y respetar a cada uno como personas, y a trabajar para que todos en general puedan disfrutar de esos derechos.

Dicho lo anterior, cuando se habla de comprensión explicación e interpretación de los derechos humanos es posible expresar que estos versan sobre la exegesis desde la raíz y en todas sus dimensiones para entender su origen de los derechos humanos, su estructura, su fundamento y su función dentro de la sociedad. Es una labor que compete a la filosofía moral, política y a la jurídica, en esta última, tanto en su extensión de teoría de la justicia como de teoría del Derecho, y que impacta a las diversas ramas de la ciencia jurídica, como el Derecho Constitucional, el Derecho administrativo, el Derecho procesal, el Derecho del trabajo e, incluso, el Derecho privado, civil o mercantil.

## **1.1.-Concepto**

Los derechos humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes y atribuciones del estado, en donde la humanidad ha luchado por alcanzar la libertad política, la libertad física y jurídica así como para suprimir la esclavitud, a fin de que los miembros de una colectividad, sean quienes tomen las dediciones que determinaran el vivir comunitario, la libertad a una económica con miras a que las libertades tengan un soporte económico básico, que las haga posibles, y la libertad espiritual, mediante la cual se haga patente la libertad de credos y de pensamiento.

Es un proceso de evolución de la conceptualización humana en la cual, en la actualidad, persisten y siguen existiendo en la actualidad innumerables actos horribles e impensables respecto a las violaciones de los derechos, así como el desinterés de por las mismas autoridades para materializarlos. Puesto que “aún prevalecen las desavenencias conceptuales que impiden avances o someten a las disposiciones a la interpretación amañada de términos o conceptos con la mayor de las impunidades. La universalidad de los derechos humanos proclamada el 10 de diciembre de 1948 se encuentra afectada por las reivindicaciones de Estados o sociedades particulares”. (Baccelli, Ferrajoli, & Pisarello Prados, 2001)

Ahora bien, desde un espectro más tecnificado podríamos definir a los Derechos Humanos como el conjunto de derechos innatos de la persona, cuya actualización efectiva resulta necesaria para el desarrollo de forma integral del individuo que vive dentro de una sociedad organizada. Los Derechos Humanos responden a las necesidades de las personas, grupos y sociedades es por tanto que el concepto de Derechos Humanos se considera integral, ya que son interdependientes, dicho de otra forma, se entiende que no hay un derecho fundamental de mayor jerarquía que otro, por tanto la violación a uno solo de ellos trasciende en múltiples violaciones, además que la realización de un derecho posibilita la realización de otros.

La conceptualización de los derechos humanos debe entenderse desde una perspectiva universal e incluyente, ya que son indispensables para todas las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, dentro del marco de la situación temporal, histórica y cultural que rodea la convivencia de las personas. De ahí que, el modo de realización de los derechos fundamentales depende de la situación social, política y cultural de los grupos humanos que los ejercen, defienden y reivindican. Se debe reconocer que la universalidad de los derechos fundamentales está dada en tanto los seres humanos somos distintos, en esa

tesitura me es preciso explicar los elementos básicos que integran a los derechos humanos.

Los Derechos Humanos son:

- Históricos: lo anterior se dice así en virtud de que los mismos se encuentran vinculados de forma estrecha con una realidad política, histórica y social de una comunidad y Estado.
- Inalienables: resulta imposible que se cambie de titular a un derecho humano, de ahí, que no sea viable la enajenación de estos.
- Incondicionales: se considera que están supeditados a los lineamientos y procedimientos con los cuales se determinan los límites de los propios derechos, teniendo como límite, hasta donde inician los derechos de los demás o en su caso el interés general.
- Imprescriptibles: los derechos humanos tienen un carácter permanente, por tanto no pueden desaparecer o perderse por el simple transcurso del tiempo.
- Universales: estos derechos pertenecen a todos los individuos, sin que importe el sexo, posición, edad, partido político social, origen familiar, creencia religiosa o condición económica.
- Indivisibles: dada la importancia de los mismos se considera que resulta imposible que los derechos humanos puedan separarse de otro.
- Interdependientes: todos los derechos humanos se consideran que están articulados.
- Dinámicos: forman parte de un proceso que esta en constante evolución.
- Progresivos: la tendencia de los derechos humanos es el avance.

La conceptualización que representa a los Derechos Humanos ha permitido puedan ser clasificados de diversas formas, de acuerdo con su origen, naturaleza, contenido y por la materia que refiere. Lo que se conocía como la tres generaciones de los derechos humanos, es de carácter histórico y es considerada de forma

cronológica a su aparición o reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país.

### Primera generación

“Se refiere a los derechos civiles y políticos, también denominados <<libertades clásicas>>; fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos internacionalmente, entre los cuales figuran” (CDHEC):

Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de color, raza, posición social, idioma o económica.

1. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.
2. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.
3. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
4. Nadie puede ser sometido a tratos crueles o degradantes, ni a una tortura ya sea físico o psicológica.
5. Nadie de forma autoritaria y arbitraria en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia. Así mismo las personas tienen derecho a la nacionalidad.
6. Todas las personas tiene derecho a buscar un asilo, en cualquier país en caso de persecución política.
7. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean.
8. Toda persona tiene derecho a la libertad de religión y de pensamiento.
9. Todos los individuos tiene derecho a la libertad de expresión de ideas y de opinión.

10. toda persona tiene derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica.

11. Toda persona tiene derecho al libre tránsito, así como para decidir en donde residir.

### Segunda generación

“La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho. De ahí el surgimiento del constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos, descritos en las normas constitucionales, sean realmente accesibles y disfrutables” (CDHEC).

Es necesario un “Estado de Bienestar” en donde se implemente programas, acciones y estrategias, con la intención de que las personas gocen los derechos humanos de forma efectiva, y son:

1. las personas tienen derecho a seguridad social y a obtener los derechos económicos, sociales y culturales.
2. las personas tiene derecho al trabajo en condiciones dignas.
3. se tiene el derecho a formar sindicatos.
4. las personas tienen derecho a una vida digna, por lo que debe tener acceso a la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
5. las personas tienen derecho a la salud física y mental.
6. Durante el desarrollo de la maternidad y la niñez las personas tienen derecho a cuidados y asistencias especiales.
7. las personas tienen derecho a la educación.
8. hay que tener en mente que la educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.

### Tercera generación

“Este grupo fue promovido a partir de la década de los setenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Entre otros, destacan los relacionados con” (CDHEC):

1. La autodeterminación.
2. La independencia económica y política.
3. La identidad nacional y cultural.
4. La paz.
5. La coexistencia pacífica.
6. El entendimiento y confianza.
7. La colaboración internacional y regional.
8. Una jurisdicción internacional.
9. El uso de las herramientas tecnológicas aprovechando los avances de las ciencias y la tecnología.
10. La solución de los dificultades alimenticias, demográficas, educativas y ecológicas.
11. El medio ambiente.
12. El patrimonio de la humanidad que sea común.
13. El progreso que posibilite la vida con dignidad.

“Los derechos humanos se caracterizan por su: universalidad, su indivisibilidad y su integralidad. Además, son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Ahora te explicaremos qué significan estas palabras que suenan

un poco complicadas” (Bulle-Goyre, Placencia, & Manuel, 2001) (Carpizo & Carbonell, 2000).

Los derechos humanos se consideran universales, lo que significa que son para todos y se aplican en todos los lugares y en todos los tiempos. No importa la raza, el sexo, la opinión política o cualquier otra característica que tenga cada individuo, ya que ninguno de esos aspectos cambia la condición de personas y, por lo tanto, tampoco los derechos innatos. Así, si bien todas las personas son diferentes, también se reconoce que son libres e iguales en dignidad y derechos.

Además de universales, los derechos humanos son considerados como indivisibles e integrales, “porque el conjunto de derechos es lo que logra cuidar la dignidad de las personas, desde distintas áreas. Para que sean efectivos, no se les puede dividir, pues todos los derechos son igualmente importantes, se relacionan entre sí y se necesitan unos de otros para cumplirse. Por ejemplo, para tener una buena alimentación que nos garantice la salud, es necesario tener trabajo y para eso se requiere de educación”. (Carpizo & Carbonell, 2000)

Finalmente, los derechos humanos también son considerados “inalienables, irrenunciables e imprescriptibles, es decir, no se pueden quitar ni ceder y nadie puede negarlos o limitarlos, a menos que exista una indicación en las leyes que reconozca situaciones excepcionales para ello. Las personas no pueden vender sus derechos o renunciar a ellos. Además, aunque haya pasado el tiempo, no prescriben, es decir, no pierden su valor. Desde esta óptica, una primera definición de los derechos humanos puede ser: el conjunto de atribuciones reconocidas en los instrumentos internacionales y en las Constituciones para hacer efectiva la idea de la dignidad de todas las personas y, en consecuencia, que puedan conducir una existencia realmente humana desde los ámbitos más diversos, los que se imbrican,



como el individual, el social, el político, el económico y el cultural.” (Carpizo & Carbonell, 2000)

Poder definir o buscar conclusiones sobre cómo se interpretan a los derechos humanos resulta demasiado complejo puesto que a pesar de los esfuerzos internacionales para su interpretación y aplicación universal existen demasiadas diferencias dentro de las sociedades humanas las cuales entienden la dignidad humana a través de perspectivas muy diferentes, por lo que se pretende enfatizar que los derechos humanos que son aquellos que la persona posee por su propia dignidad y naturaleza, es decir, son innatos ya que le son inherentes y no una concesión del Estado; y son los que concretan en cada momento histórico, y son derechos derivados de las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, y que deben ser reconocidos positivamente por cualquier orden jurídico; derechos que son los que corresponden a la persona por esencia, y que deben ser reconocidos y respetados por todo poder y todo sistema jurídico positivo, las cuales tienen como máximo objetivo la materialización y ejecución de manera equitativa sin limitación o exclusiones de ninguna clase por lo que realizar el entendimiento racional y filosófico del término y poder desarrollarlo en el mundo real y no en el de las ideas constituye naturalmente un gran esfuerzo.

## **1.2 Los Derechos Humanos como eje central de la Constitución.**

Ahora bien, para el presente punto del capítulo desarrollado es pertinente hacer memoria y reflexionar la importancia del siglo XIX, pues este tuvo un impacto muy importante para los derechos fundamentales, ya que, durante dicha época se acelera el proceso para positivizar éstos dentro de las diversas constituciones de los países, ello, a pesar de la fortaleza conceptual que gradualmente fueron adquiriendo, los llamados en ese entonces derechos naturales, y que sufrieron de críticas muy serias en contra de su fundamentación iusnaturalista.

Continuando con el análisis sobre la importancia de los derechos humanos dentro de las constituciones modernas y sin la limitación de ser exhaustivos e incluso sin la expresión de ponderar de manera preferente ciertos conceptos, se razonarán algunos aspectos pertinentes de la investigación que se desarrolla. “Resulta interesante leer los argumentos en contra de la utilización del término derechos humanos que expone Peces Barba en el caso de los activistas que utilizan la noción de diversas formas, y hasta en posiciones contradictorias; cuando por ejemplo reclaman que el sistema no reconoce ni protege los derechos, afirmación que indica Peces Barba, identifica una posición cercana a la moral, o bien, cuando los activistas se refieren a derechos protegidos por recursos jurisdiccionales específicos, donde la acepción se refiere a derechos constitucionales”. (Peces-Barba Martínez, 1980)

Continuando bajo esta perspectiva, “según el jurista español, nos encontramos frente a dos concepciones contrapuestas: el iusnaturalismo y el iuspositivismo. La utilización de la noción <<derechos humanos>>, señala entonces Peces Barba, puede resultar imprecisa, por lo que recomienda mejor la referencia” a “derechos fundamentales”, en contra parte el maestro “González Piña, en todo caso, la recomendación es congruente, sólo si se parte de los mismos presupuestos conceptuales no explícitos de los que parte Peces Barba, ya que como ha de verse, él sostiene que los derechos fundamentales sean pretensiones justificadas moralmente y a su vez, derechos jurídico positivos”. (González Piña, 2015)

La comprensión e interpretación de la realidad y su contexto es la única barrera para evitar su manipulación, como ya expuse en capítulos anteriores la interpretación como concepto y la interpretación jurídica como la hermenéutica son mecanismos interpretativos para los derechos humanos estos mecanismos y formas de integración de la razón “no son una excepción; por el contrario, tienen una dimensión en la historia moderna, una función y una influencia ideológica y

emotiva ampliada por el poder de la comunicación, que tienta a la manipulación pluri forme y que exige, como contrapunto, un gran esfuerzo de comprensión. El uso retórico y semántico se produce cuando desde unos fundamentos éticos diferentes de los que los generaron en la historia, y en un contexto político no democrático se pretende legitimar un poder con referencias a los derechos humanos y denominando como tales a realidades que no responden ni a su origen ni a sus finalidades”. (Alexy, La institucionalización de los Derechos Humanos en el Estado Constitucional Democrático, 2000) (Arteaga, 2000) (Carbonell, 1999)

Desde entonces toda la gran mayoría de los Estados, en diferente medida, han incorporado gradualmente estos principios a su Constitución, ponderando a los derechos humanos como un eje central en el constitucionalismo moderno desde un entendimiento teórico y de praxis los cuales pretenden imponer límites al ejercicio de “la fuerza y la impartición de justicia de parte del Estado. No obstante, la Declaración no fue suficiente, y fue necesario que los países acordaran nuevos tratados y convenciones para que los grupos discriminados, como las mujeres y pueblos indígenas, por ejemplo, puedan disfrutar de sus derechos en las mismas condiciones que las demás personas”, como ya expusimos dentro del mismo capítulo la condición cambiante de la sociedad humana permite entender que la forma de interpretar los derechos humanos como un razonamiento atributivo en constante movimiento. (Alexy, La institucionalización de los Derechos Humanos en el Estado Constitucional Democrático, 2000) (Carbonell, 1999)

Ahora bien, haciendo un ejercicio de reflexión es importante para la presente tesis exponer o hilar las concepciones constitucionales y su relación con los derechos humanos a la interpretación desde un campo y perspectiva jurídica mexicana por lo que en los siguientes párrafos pretendo desarrollar una reflexión sobre la Constitución mexicana y los derechos humanos como eje rector de esta.

La Constitución Política Mexicana es la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico como país. En esta se vierten los principios políticos, jurídicos, económicos y sociales sobre los que se organiza México. Es ahí, donde se fijan las acciones que pueden realizar los poderes que integran el Estado, y sus límites y se reconocen los derechos fundamentales de las personas que viven en el territorio nacional y de todas las personas que están dentro del mismo. Por tanto, todas las leyes y normas secundarias deben estar ajustadas con la Constitución.

El artículo 1 de nuestra Constitución “establece que todos y todas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos”; especifica que las “normas relativas a los derechos humanos serán interpretadas desde un espectro garantista de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales”, velando por la dignidad humana de todos y todas las mexicanas, de modo que es a través del primer artículo que podemos ver el atisbo interpretativo de lo que la Constitución mexicana requiere para la resolución justa de los procesos de acceso e impartición de justicia en el país.

Además de las disposiciones constitucionales para poder materializar los preceptos y fines de los derechos humanos es preciso desarrollar la idea de los tratados internacionales los cuales ya he mencionado en el presente capítulo para lo que me es pertinente recalcar que “cuando un Estado firma un tratado, debe adaptar sus leyes a lo que dice el tratado, creando o modificando normas legales y adaptando todo su funcionamiento para dar cumplimiento a lo que se comprometió”. En este caso la Constitución mexicana reconoce y asume llevar a cabo las disposiciones internacionales para la interpretación y materialización de la impartición de justicia de una manera correcta. (Cossío Díaz J. R., 2017)

Estos tratados “pueden ser generales y reconocer derechos a todas las personas, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o tener un mayor énfasis en una situación en particular, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, o reafirmar los derechos de algún grupo específico que tiene mayores dificultades para que se les respeten sus derechos”. (Cossío Díaz J. R., 2017)

De tal modo que, si la Constitución y la normatividad que en ella está vertida no pretende quedar reducida a un sistema de silogismos en los cuales resalta pura teorización, debe ser analizada desde aspecto amplio y en consideración de los derechos fundamentales, que adquiere una dimensión objetiva y una eficacia verdadera; lo cual plantea estudiar la propia naturaleza y el rol que desempeña la fuerza normativa de la Constitución, ello debido a las demandas de protección y reparación de los derechos fundamentales, de modo que los supuestos vertidos dentro de la Constitución puedan llevarse a la praxis de una manera fehaciente y con el fin de que los derechos reconocidos en la misma como en los tratados internacionales puedan asegurar la efectiva acción de acceso e impartición de justicia.

Como la interpretación de los elementos normativos que componen los razonamientos constitucionales de los derechos fundamentales se puede expresar que estos se convierten en un eje central para la interpretación y aplicación de los ordenamientos jurídicos los cuales dinamizan a la “sociedad y al Estado, también se crean tensiones democráticas y antidemocráticas acerca de su validez y vigencia. En este contexto histórico y conceptual adquiere pleno sentido que se identificó que el carácter abierto jurídico y político de la Constitución, por cuanto de ello se podrán derivar las dimensiones y los límites de la fuerza normativa constitucional”. (Sánchez de la Torre, 1968)

Ante estos razonamientos, se debe tener en mente que una Constitución tiene por sentido proteger y garantizar los derechos fundamentales a través de la jurisdicción constitucional. Por ende, la denominación de Constitución no es un solo nombre, sino que resulta la expresión jurídica válida para un sistema de valores a los que se pretende dar un contenido histórico y político. Por tanto, es en este sistema valorativo, desde donde hay que interpretar y entender la justicia constitucional.

La conceptualización de los derechos humanos tiene un carácter fundamentalmente esencial, y comprende todos los diversos derechos que la Constitución Política y los convenios internacionales de los que el Estado mexicano sea parte reconocen a las personas, a razón de que son inherentes a su dignidad humana.

Estos son los derechos que primariamente fueron considerados como innatos o naturales, inalienables e imprescriptibles por los filósofos iusnaturalistas, así como los pensadores del siglo de las luces, y “como tales fueron reconocidos en las declaraciones de derechos de los Estados que se formaron a partir de las colonias inglesas en América (de 1776 a 1784) y en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789”. (Sánchez de la Torre, 1968)

Sin embargo, los derechos fundamentales son derechos que se encuentran en una constante ampliación y transformación, pues como el conocimiento en sí y el desarrollo de las civilizaciones las necesidades de los hombres cambian por lo que es correcto remitirse a interpretar los apuntes de Norberto Bobbio quien expresa:

*La expresión “derechos del hombre”, que es ciertamente enfática, puede llamar a engaño, porque hace pensar en la existencia de derechos pertenecientes a un hombre abstracto y, como tal, sustraído al fluir de la historia, a un hombre esencial y eterno de cuya contemplación derivamos el conocimiento infalible de sus deberes y derechos. Hoy sabemos que también los derechos llamados humanos son el producto no de la naturaleza, sino de la civilización humana: en cuanto derechos históricos son mutables, esto es susceptibles de transformación y de ampliación. (Bobbio, 1991)*

Es necesario entender que las perspectivas variables pueden diferir antes el acto interpretativo, en la actualidad está muy presente un reduccionismo, de signo totalmente diferente, que limita el análisis para la comprensión de los derechos humanos desde el punto de vista de la filosofía moral o desde la teoría de la justicia. La cual sostiene que la base de los derechos humanos solo es alcanzable por la razón, la comprensión y fundamentación, corriente la cual la ven como términos iguales. En donde, para ellos la reflexión significativa se agota en ese tipo de argumentación. Dicha corriente suele llamar al resultado de sus reflexiones derechos morales.

Continuando con esta línea interpretativa es preciso entender que, la fundamentación es abordada desde un punto de vista abstracta y racional, misma que desconsidera a la historia de forma tradicional, desde una tradición racionalista. Por tanto, se pretende una fundamentación válida para cualquier tiempo histórico. Así el resultado de ese tipo razonamiento ciñe su cara racional.

Para poder superar esta etapa sólo puede venir de la integración de la fuerza y adecuada aplicación de los derechos humanos, que “ponga juntos la reflexión de la filosofía moral, política y jurídica, como teoría de la justicia, y que nos descubra el fundamento del espíritu de los derechos humanos y la reflexión de la Filosofía

jurídica, como teoría del Derecho, complementada por las diversas ramas de la ciencia jurídica, que nos descubra la estructura y la función de la fuerza jurídicamente organizada en derechos fundamentales integrados en el Derecho positivo". (Álvarez, 2010)

Es necesario entender que la impartición de justicia a través de un espectro humanista requiere que el proceso jurídico garantice los derechos fundamentales para que el individuo pueda tener un proceso justo y sin restricciones de ningún tipo, respetar los derechos humanos y valerse de ellos como eje central de la Constitución prevé resultados positivos, dados que la conceptualización e idea del régimen jurídico es buscar la justicia, claramente apegada estrictamente al entendimiento y tutela de los derechos humanos de los hombres.



## **CONCLUSIÓN. -**

El desarrollo de la presente tesis tiene por efecto no solo la posibilidad del análisis intelectual o académico de esta, sino también el de poder llevarlo a la praxis, de modo que las pretensiones del presente son las de poder llevar las instancias procesales practicando un espectro interpretativo totalmente en concordancia con los derechos humanos, destacando y estando de la mano a la tutela efectiva y al debido proceso.

De tal manera me es posible iniciar con las conclusiones a las que he llegado desarrollando la presente investigación, como he comentado en los capítulos ya mencionados, si bien el desarrollo constitucional en nuestro país ha valido el avance en la materialización de los derechos humanos en los actos de impartición de justicia de las autoridades facultadas, la realidad es que aun hoy en día existen cuestionamientos jurídicos que dificultan la correcta impartición de la justicia a través de un espectro humanista.

Para la conclusión de este trabajo me es fundamental explicar que como exprese en la interrogante mencionada al principio de la presente tesis, cual puede ser el límite interpretativo de las normas procesales en el juicio contencioso, toda vez que ante las reformas y el cuestionamiento interpretativo del juzgador, puede resultar compleja la correcta impartición de justicia, debido a que ante los recursos usados dentro los juicios han desarrollado una praxis bien identificada conforme a los razonamientos de las autoridades encargadas de impartir justicia.

Nuevamente para poder explicar los razonamientos expresados me es útil analizar las consecuencias tanto interpretativas como de praxis las reformas judiciales que se han dado en nuestro país.

Iniciando con este análisis podemos hablar de la reforma al Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 10 de junio del 2011, es sin duda una de las reformas con mayor trascendencia en nuestro país, tan es así que muchos han comparado su calado con la misma promulgación de la misma Constitución de 1917. Su importancia radica en el fortalecimiento del compromiso de poner como eje central la dignidad de la persona y como consecuencia de ello obliga a todas las autoridades a respetar al máximo los derechos humanos.

La reforma impacta de manera significativa al de impartición de justicia de justicia en México, pues obliga a todos los jueces nacionales garantizar los derechos humanos en sus resoluciones, para lo cual los dota de una herramienta para resolver bajo el principio de interpretación pro persona, conforme a la Constitución y conforme a las convenciones de las que México es parte, y para el caso de los jueces de los distintos fueros federales o locales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, en aras de respeto a los derechos fundamentales pueden desaplicar una norma al considerarla que atenta contra un derecho derivado de la misma Constitución Federal o de las diversas convenciones a las que se ha hecho referencia. Así lo decía en exministro Juan N. Silva Meza. “La reforma proporciona, a quienes imparten justicia, las herramientas –los más altos estándares en materia de derechos humanos- para romper las barreras que impiden a la persona acceder a la justicia en condiciones de igualdad, para colocar, mediante decisiones y criterios interpretativos, los cimientos para la consecución de un proyecto de vida digna y para transformar las condiciones estructurales que limitan la autonomía de las personas para diseñar y llevar a cabo dicho proyecto”. (Vázquez Pérez, 2013)

La discrecionalidad no puede tener como significado el arbitrio, la resolución que emitan los órganos jurisdiccionales deben de estar justificadas, y su justificación no debe dejar duda alguna que en la misma imperó el respeto a los derechos humanos.

Como consecuencia lógica de la reforma, hay mayor discrecionalidad por parte de los juzgadores al abandonar el sistema lógico del silogismo en las resoluciones jurisdiccionales, cambio que por cierto ha sido difícil de asimilar pues aún muchos juristas estiman que la ley escrita o consuetudinaria es preferente a la dignidad de las personas. (Carpizo E. , 2015)

El respeto a las normas procesales como fin para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva es imperativo; sin embargo, las mismas también están sujetas a interpretación cuando el legislador las haya expedido en contravención de los principios inmersos en la Constitución General y las Convenciones Internacionales.

La reforma ha tenido gran impacto en el medio jurídico en nuestro país y en el Estado de Nuevo León, la preocupación de las distintas escuelas es palpable, la misma Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha implementado en todos sus niveles de estudio programas tendientes a una mejor comprensión y desarrollo en torno a los derechos humanos, sirva esta conclusión para reconocer la visión que ha tenido tanto sobre el particular, tanto el Doctor José Luis Prado Maillard en su etapa de Director de la Facultad, como del maestro Oscar Lugo Serrato actual director de la misma.

Como consecuencia de la reforma y bajo la nueva dinámica de impartición de justicia, el principio de certeza jurídica tan arraigado en el sistema jurídico

mexicano, se torna con nuevo matices, más no desaparece como muchos juristas lo comentan, la idea de la aplicación estricta de la ley al caso concreto, se tornó en justificaciones razonables, sin perder de vista el marco legal, pero abierto siempre a una interpretación que respete los derechos fundamentales de todas las partes, sin dejar a una en un estado de ventaja frente a su contraparte.

La certeza jurídica radica en la justificación racional que hace el juez moderno, este concepto va de la mano con la transparencia que debe imperar en los tribunales, la apertura de las audiencias a los procedimientos, la adecuada aplicación de las jurisprudencias, la congruencia y constancia de las resoluciones, y la apertura que debe tener el juez para que conozcan sus criterios jurídicos son los matices que ahora distinguen a este principio. Como lo dice Arniu, la certeza jurídica es una aptitud que debe tener el particular para poder saber las consecuencias de sus actos.

Hoy por hoy, los litigantes tienen derecho a conocer los criterios y antecedentes de quien va a resolver su caso, es un derecho que tiene para poder dirigir sus estrategias en la disputa, y el juez tiene que estar vigilante que esas estrategias estén dentro de un orden jurídico que respeta los derechos fundamentales de las partes.

La evolución de la organización del hombre en sociedad ha sido constante y en cada momento de la historia existe una razón que los explique, en el mundo contemporáneo hay una tendencia muy importante y regresa a una justificación del derecho que tenga como base central el mayor la dignidad de la persona. Este principio viene emergiendo después de las atrocidades cometidas contra las personas humanas en acontecimientos bélicos del siglo pasado. Las constituciones

modernas como lo es la de México han recogido este principio, que es el eje rector y la razón del ejercicio del Estado.

Pasamos de un estado de derecho a un estado constitucional de derecho, cuestión que incide de manera relevante en la función jurisdiccional y obliga a los juzgadores a estar cada vez más capacitados para resolver en derecho conforme al respeto de los derechos fundamentales y es aquí precisamente donde para el caso que nos ocupa la tutela judicial (jurisdiccional) efectiva ocupa un papel relevante.

Como ya se apuntó en el capítulo correspondiente tutela judicial efectiva es un mandato constitucional y convencional que exige al estado poner a disposición de los ciudadanos todos los mecanismos para hacer efectiva la tutela de sus derechos y para resolver conflictos de manera adecuada, o sea de cumplir con su obligación de impartir justicia pronta, imparcial, expedita y completa.

Todas las normas procesales deben garantizar que en todos los procesos jurisdiccionales no se violente este derecho, por el contrario, deben asegurar el acceso de toda persona a que se le imparta justicia, a través de un debido proceso que respete la oportunidad de ser oído y vencido en juicio con iguales oportunidades que su contra parte y que el resultado que se obtenga pueda ser debidamente ejecutable, o sea, que el vencedor este satisfecho de la reparación que la había sido agraviada.

En este sentido, se puede asegurar que hay dos vertientes pendientes por el legislador, una la de revisar el marco de las normas procesales para ajustarlas a derecho fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Constitución Mexicana, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos

Humanos y otra vertiente es que cumplan sus atribuciones en total respeto a la dignidad de la persona pues están obligados a cumplir con dicho precepto constitucional consagrada en el artículo primero.

Los principios que rigen el procedimiento contencioso administrativo tienen que ser revisado forzosamente, muchos de ellos ya no encuentran una justificación constitucional, es el caso que permite al Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, interpretar de manera constante sus normas y contrarrestarlas con los principios constitucionales.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, es de los primeros tribunales en instituirse en la república, su regulación en la Constitución del Estado cumple con la fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que respeta la independencia de sus resoluciones sobre cualquier poder o autoridad, y no solo se dice en el papel, sino, también en los hechos. Además, garantiza la organización interna y su facultad reglamentaria.

Actualmente, existe una iniciativa de reforma presentada por diversos Colegios de Abogados de la entidad, en la que se busca, según ellos una mayor independencia frente al ejecutivo. Cabe precisar, que en términos de la Constitución local y de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el tribunal es un órgano formalmente administrativo y materialmente jurisdiccional. De manera que, la misma Constitución de Nuevo León, otorga derecho al Tribunal para presentar su propio presupuesto. Sin embargo, la pretensión de la iniciativa es dotar al tribunal de disposiciones para ejercer directamente el presupuesto y que eliminar la facultad del ejecutivo para proponer al Congreso a los diferentes magistrados que los integran. La postura que sostengo es que al pasar directamente al Congreso el nombramiento de los magistrados se

estaría en que la toma de decisión sería más política que jurídica, basta revisar el sistema único de selección por parte del Congreso local a los diferentes encargos para darnos cuenta de que el sistema ha sido muy deficientes y cuestionado, lo que ha acarreado muchos conflictos de índole jurídica.

Por lo que respecta a la supuesta independencia económica, se estima que en el momento en que el Tribunal rinda cuenta pública estará sujeta a más presión de los diferentes poderes.

La jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación es sin duda un referente y delimita en algunos casos la interpretación de los órganos jurisdiccionales que están fuera de él. Hay autores que consideran al precedente, a los criterios obligatorios o a la jurisprudencia como parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, independientemente de ello, el rol que juega el Poder Judicial Federal al emitir sus criterios en la impartición de justicia en el ámbito local es de suma importancia, puesto que delimita en muchas ocasiones la interpretación que hagan estos. No obstante, ello, hay muchos criterios contradictorios entre las diferentes instancias de ese poder, que pone en muchas ocasiones en un estado de incertidumbre a los tribunales locales, hay al final de cuentas esto repercute en el derecho a la tutela judicial efectiva que debe garantizar el estado, ya que de alguna manera rompe con el principio de seguridad jurídica.

## **Bibliografía**

- Aarniu, A. (1991). *Lo Racional como Racionable*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Aguilera Portales, R., & López, S. (2010). *Las Contribuciones del Neoconstitucionalismo en la Teoría Política y Jurídica Contemporánea*. México: Porrúa.
- Aguiló Regla, J. (2004). *El método jurídico como argumentación Jurídica, en la Constitución del Estado Constitucional de Colombia*. Colombia: Palestra.
- Alexy, R. (2000). *La Institucionalización de los Derechos Humanos en el Estado Constitucional Democrático*. *Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Bartolomé de las Casas: Boletín Oficial del Estado*.
- Alexy, R. (2007). *Teoría de los Derechos Fundamentales*. Traducción y estudio introductorio de Carlos Bernal Pulido. Madrid, España: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Alsina, H. (1990). *Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial*. Guadalajara Jalisco, México: Librería Carrillo Hermanos e Impresores S.A.
- Álvarez, L. (2010). Los Derechos y sus Garantías. *Revista Telemática de Filosofía del Derecho*, nº 13, 311-324.
- Anchondo Paredes, V. E. (17 de noviembre de 2018). *Métodos de Interpretación Jurídicas*. Obtenido de <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/quid-iuris/article/viewFile/17406/15614>
- Arenas Bátiz, C. (2013). *El Nuevo Modelo de Control de Constitucionalidad y de Convencionalidad en materia de Derechos Humanos a partir de la Reforma del 2011*. . *Consejo de la Judicatura del Estado del Nuevo León*.
- Arteaga, E. (2000). *Constitución Política y Realidad*. México: Siglo XXI.
- Arteaga Nava, E. (2006). *Derecho Constitucional*. México: Oxford University Press.
- Bacelli, L., Ferrajoli, L., & Pisarello Prados, G. (2001). *Los fundamentos de los derechos fundamentales*. Madrid: Trotta.



- Bautista, J. B. (1985). DERECHO PROCESAL CIVIL. México: Cardenas, editores y distribuidores.
- Becerra Bautista, J. (2006). El Proceso Civil en México. México: Porrúa.
- Bobbio, N. (1991). El Tiempo de los Derechos. Madrid: Sistema.
- Bulle-Goyre, Placencia, R., & Manuel, V. (2001). Ciclo de Conferencias Magistrales entorno a los Derechos Humanos. *Cuadernos de la Judicatura*.
- Calamandrei, P. (1996). Instituciones de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires. Argentina: Librería El Foro.
- Carbonell Sánchez, M. (2008). Constitución, Reforma Constitucional y Fuentes del Derecho en México. México: Porrúa.
- Carbonell, M. (1999). Desafíos de los derechos humanos en México. *Anuario del departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, número 29*, 11-22.
- Carpizo, E. (2015). Del Estado Legal al Consitucional de Derecho. México: Porrúa.
- Carpizo, J., & Carbonell, M. (2000). Derecho a la Información y Derechos Humanos. México: UNAM.
- Cossío Díaz, J. R. (2017). Derechos humanos. Apuntes y Reflexiones. . México: El Colegio Nacional.
- Cossío Díaz, J. R., & Schmill Ordoñez, U. (2002). Interpretación del Derecho y Cconcepciones del Mundo. En *Interpretación del Derecho y Cconcepciones del Mundo*. (págs. 57-87). México: Fontamara.
- Cossio, J., & Raigosa, L. (1996). Régimen político e Interpretación Constitucional en México. Isonomía.
- Cruz Covarrubias, A. (Noviembre de 2008). *Vlex*. . Obtenido de <http://doctrina.vlex.com.mx/vid/x00bf-hacer-protocolo-investigacion-284824345>
- De Bernardis, L. M. (1995). La garantía procesal del debido proceso. Lima : Cultural Cuzco.
- De Páramo Arguelles, J. R. (1998). “La Ilustración Británica”, en el Contexto Social y Cultural de los Derechos. En F. J. Ansuátegui Roig, J. M. Rodríguez

- Uribe, G. Peces-Barba Martínez, & E. Fernández García, *Historia de los derechos fundamentales* (págs. 251-308). España: Dykinson.
- De Pina, R., & Castillo Larrañaga, J. (2007). INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL. México: Porrúa.
- Derechos Humanos México. México. (2002). *Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos*, 7 y 9.
- Díaz Revorio, J. (2016). Interpretación de la Constitución y juez constitucional. *IUS*, Volumen 10, número 37.
- Duque Sandoval, O. (13 de agosto de 2007). *Concepciones del Derecho y Discrecionalidad Judicial*. Obtenido de <http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/viewFile/272/1051>
- Dworkin, R. (1986). El imperio de la justicia. Harvard University Press.
- Etchevery, J. B. (2015). *Biblioteca Jurídica UNAM*. . Obtenido de <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libros.htm?i03796>
- Ferrajoli, L. (2004). Derecho y Garantías, la Ley del más Débil. Madrid: Trotta.
- Ferrer Mac-Gregor, E. (2011). Interpretación Conforme y Control Difuso de Convencionalidad. . *Estudios Constitucionales año 9*, 531-622.
- Fix Zamudio, H., & Ferrer Mac-Gregor, E. (2009). Las sentencias de los tribunales constitucionales. México: Porrúa.
- Fix-Zamudio, H. (1974). Constitución y Proceso Civil en Latinoamérica. México: UNAM.
- Fix-Zamudio, H. (1983). Debido proceso legal, Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo III, D, primera parte. México: Porrúa.
- Fix-Zamudio, H. (2004). Enciclopedia Jurídica Mexicana. México : Porrúa.
- García de Enterría, E., & Ramón Fernández, T. (2020). *Curso de Derecho Administrativo II*. Madrid : Thomson Reuters.
- García Ramírez, S. (2014). El debido proceso. México D.F.. México: Porrúa .
- Gómez Lara, C. (2004). Teoría General del Proceso. México: Oxford.
- Gómez Lara, C. (2006). El debido proceso como derecho humano. México: UNAM.

- Gómez Lara, C. (2006). *Sistemática Procesal*. México: Oxford.
- Gomez Lara, C. (2012). *Teoría General del Proceso*. Mexico: Oxford.
- González Oropeza, M. (1996). La Interpretación jurídica en México. . *Isonomía: Revista de teoría y filosofía del derecho* número 5, 65-75.
- González Pérez, J. (2001). *El Derecho a la Tutela Jurisdiccional* . Madrid: Civitas.
- González Piña, A. (2015). *Los Derechos Humanos en Perspectiva: el Pensamiento de Gregorio Peces-Barba, Antonio E. Pérez Luño y Carlos S. Nino*. Madrid: Tirant lo Blanch.
- Guastini, R. (1998). La Constitucionalización del Ordenamiento Jurídico: el caso italiano. En M. Carbonell, *Escritos de Teoría Constitucional* (pág. 153). México: Centro de Estudios Jurídicos Carbonell A.
- Guimaraes Ribeiro, D. (2004). *La Pretensión Procesal y la Tutela Judicial Efectiva*. Barcelona: J.M. Bosch Editor.
- Hart, H. L. (1998). *El Concepto del Derecho*. Buenos Aires: Abelardo Perrot.
- Heidegger, M. (2003). *Ser y Tiempo*. Madrid: Trotta.
- Kelley Hernández, S. A. (2003). *Teoría General del Proceso*. México: Porrúa.
- Kelsen, H. (1928). *La garantía jurisdiccional de la Constitución* . México D.F.. México.
- Kelsen, H. (1934). *Teoría Pura del Derecho*.
- Larraondo Salguero, E. E. (20 de mayo de 2014). *Caso: Panel Blanca (Ana Elizabeth Paniagua Morales y otros) Expediente: 10154*. Obtenido de [http://www.tc.gob.pe/corte\\_interamericana/seriec\\_23\\_esp.pdf](http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_23_esp.pdf)
- Le Fur, L. (1967). *Los fines del Derecho*. México: UNAM.
- Llobregat, J. G. (2008). *El Derecho a la Tutela Judicial efectiva en la Jurisprudencia del Tribunal*. Barcelona: Bossch.
- López Sánchez, R. (2013). *Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales*. . México: Porrúa S.A.
- Lorca Navarrete, A. (2003). *El Derecho Procesal como Sistema de Garantías*. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado* número 107, 531-557.

- Marinoni, L. (2012). El Precedente en la Dimensión de la Seguridad jurídica. *Ius et Praxis*, 246-249.
- Marioni, L. G. (2007). Derecho fundamental a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. Lima: Palestra Editores.
- Martínez Idárraga, J. A. (s.f.). *Positivismo, Vigencia y Eficacia en el Pensamiento de H. L. A. Hart*. Obtenido de Dialnet:  
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3851203.pdf>
- Mosri Gutiérrez, M. (2014). *LA JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN MÉXICO. SU EVOLUCION Y CARACTERISTICA FUNDAMENTAL ACTUAL COMO JUSTICIA CONSTITUCIONAL*. Obtenido de Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal:  
<https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/lajusticiafiscalyadministrativaenmexico.pdf>
- Ovalle Fabela, J. (2011). Teoría General del Proceso. México: Oxford.
- Pahuamba Rosas, B., & Erick, Z. G. (2014). Aplicación de los Derechos Humanos. México D.F.: Editorial Liber Iuris Novum S. de R.L. de C.V.
- Palombella, L. (1999). *Filosofía del derecho: moderna y contemporánea*. Madrid: Tecnos.
- Pavó Acosta, R. (2009). La investigación científica del Derecho. Lima, Perú: Fondo Editorial.
- Peces-Barba Martínez, G. (1980). Derechos Fundamentales. Madrid : Latino Universitaria.
- Perelman, C. (1979). La lógica jurídica y la nueva retórica. Madrid: Civiatas.
- Pérez Luño, A. E. (1995). Derechos Humanos, Estado y Constitución. Madrid: Tecnos.
- Pico della Mirandola, G. (2004). Discurso sobre la dignidad del hombre. *UNAM*, 15-18, 45-47- Y50.
- Picó i Junoy, J. (2011). Las garantías Constitucionales del Proceso. Barcelona: Bosch Editor.
- Prieto Sanchís, L. (2009). Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. Madrid: Trotta S.A.

- Reidl Martínez, L. (27 de Noviembre de 2018). *Psicol UNAM*. Obtenido de <http://www.psicol.unam.mx/Investigacion2/pdf/metodo/clase5.pdf>
- Salinas Garza, J. Á. (2016). *Tutela Judicial Efectiva, una Visión Constitucional y Convencional de la Teoría del Proceso*. Ciudad de México: Editorial Liber Iuris Novum S. de R.L.de C.V.
- Salinas Garza, J. Á., & Rodríguez Lozano, L. G. (2016). *El debido Proceso en el Estado Constitucional de Derecho*. Ciudad de México: Editorial Liber Iuris Novum, S.de R.L.
- Sánchez de la Torre, Á. (1968). *Teoría y Experiencia de los Derechos Humanos*. Madrid: Gregorio del Toro-Editor.
- Sánchez Zorrilla, M. (2010). Apuntes Para una Metodología Jurídica: la Idea de Marco teórico. *Revista Telemática de Filosofía del Derecho*, 297-310.
- SCJN. (2009). Introducción a la Retórica y la Argumentación. *Poder Judicial de la Federación*.
- SCJN. (2016). Clínicas de Derechos Humanos. Una nueva alternativa para la educación jurídica y la sociedad. México: Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación : Escuela Libre de Derecho, 2011.
- Silva Meza, J. N. (s.f.). *El Impacto de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos en la labor Jurisdiccional en México*. Obtenido de <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2012/pr/pr10.pdf>
- Vázquez Pérez, C. (2013). *El Camino para la Reforma Constitucional de Derechos Humanos*. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación : Universidad Nacional Autónoma de México.
- Villelbella Armegol, C. M. (2015). *www.juridicas.unam.mx*. Obtenido de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/46.pdf>
- Wroblewski, J. (1985). *Constitución y Teoría General de la Interpretación jurídica*. Madrid: Civitis S.A.
- Zagrebelsky, G. (2007). *El derecho dúctil*. Madrid: Trotta.